

**NACIONES UNIDAS
COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE – CEPAL**



Distr.
LIMITADA

LC/MEX/L.488
23 de agosto de 2001

ORIGINAL: ESPAÑOL

**MARGINADOS EN MÉXICO, EL SALVADOR,
NICARAGUA Y PANAMÁ**

ÍNDICE

	<u>Página</u>
RESUMEN	1
I. NOTAS INTRODUCTORIAS	3
II. GLOBALIZACIÓN, POBREZA Y JUVENTUD.....	7
1. Globalización y juventud: aspectos generales	8
2. Demografía, mercados laborales y pobreza	11
3. Los jóvenes urbanos	16
III. LA JUVENTUD MARGINADA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS	21
1. Manifestaciones de la juventud marginada.....	21
2. Causas de la marginación de los jóvenes urbanos	31
IV. LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA JUVENTUD MARGINADA	46
1. Una mano de obra abundante, disfuncional y desempleada	46
2. Insuficiencia de recursos públicos para programas para la juventud	51
V. ALCANCE DE LAS INSTITUCIONES VIGENTES PARA LA JUVENTUD MARGINADA	55
Tipo de instituciones y políticas de atención a la juventud marginada.....	55
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	68
1. Propuesta económica incluyente	69
2. Nutrición y salud	70
3. Educación y capacitación.....	71
4. Empleo productivo	72
5. Reintegración social.....	73
BIBLIOGRAFÍA.....	75
<u>Anexo estadístico</u>	87

RESUMEN

Este estudio se realizó con el fin de elaborar un diagnóstico y propuestas de atención a grupos de población vulnerable en la región norte de América Latina. Se seleccionó al grupo de jóvenes marginados¹ debido a la importancia que la juventud tiene como proporción de la población total en esta región y como factor de recambio generacional en un período de transformaciones profundas en la economía y la sociedad latinoamericana. A 10 años de haber invertido la tendencia negativa de crecimiento que predominó durante la “década perdida”, la pobreza y marginación de amplios sectores continúa, y su persistencia agrava la situación de vulnerabilidad en que subsisten los hogares más pobres.

En este documento se utilizó como eje del análisis de vulnerabilidad el concepto de desajuste o desarrollo inadecuado de las capacidades, en este caso de los jóvenes, que les impide aprovechar la estructura de oportunidades e integrarse socialmente, lo que provoca mayor exclusión y marginación. Se seleccionaron algunos países —México, El Salvador, Nicaragua y Panamá— que pudieran ser representativos de la evolución y del tratamiento que el problema de la marginalidad ha tenido entre los jóvenes de escasos recursos. Según el grado de desarrollo económico y las afectaciones sociales padecidas en los últimos años —como las secuelas de la guerra en Centroamérica o el aumento del tráfico de drogas— se detectan consecuencias más profundas sobre el modo de vida, los agrupamientos y el nivel de violencia a los que recurren los jóvenes marginados. La falta de horizontes y de propuestas viables para propiciar una reintegración social de los jóvenes excluidos de las oportunidades educativas y laborales, y de su mismo entorno familiar, los obliga a mantener estrategias de supervivencia basadas en asociaciones marginales, delictivas y proclives a la violencia en contra de la sociedad.

Uno de los rasgos más sobresalientes en la situación de marginación de los jóvenes de la calle es la desintegración de su entorno familiar, en un clima de pobreza y violencia acentuadas. La falta de una estructura familiar que pueda sostenerlos y orientarlos en su formación constituye la exclusión principal, al menos para los más jóvenes. Esta condición negativa se refuerza con el abandono de la escuela y la casi imposibilidad de lograr posteriormente una inserción laboral que pudiera otorgarles los medios para sobrellevar una vida digna en un amplio sentido. En la medida en que el funcionamiento económico y las instituciones no generan medidas o soluciones compensatorias a esta situación de exclusión, la vulnerabilidad social de los jóvenes tiende a agravarse, tanto por la disminución de la edad de quienes abandonan sus hogares para sumarse a las pandillas como por la mayor proliferación de éstas.

En estas condiciones, y pese a que ha transcurrido poco más de una década del avance que representó la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en la mayoría de los países centroamericanos prevalece la situación de indefensión de los niños. En el caso de los jóvenes, la exclusión y el abuso derivan, en gran parte, de las dificultades de aplicación de las nuevas leyes

¹ Con el objeto de hacer más fluida la lectura, se omitió el uso de los artículos (los-las) y las respectivas concordancias de adjetivos según cada género, por lo que se decidió utilizar para el grupo genérico, que incluye varones y mujeres, la denominación común e indiferenciada de “los jóvenes”.

penales juveniles, basadas en el concepto de responsabilidad penal, debido al insuficiente desarrollo institucional y al concepto de situación irregular para calificar el modo de subsistencia de los jóvenes marginados. La escasa evolución en el enfoque de protección integral —en particular en el caso de los sectores juveniles— torna aún más difícil garantizar el debido proceso para los jóvenes infractores (El Salvador, 1999), lo que a la postre constituye un escollo para cualquier intento sistemático de reintegración de estos jóvenes a una situación menos drástica, en lo económico y en lo social.

En general, los programas gubernamentales orientados a la juventud no contemplan el problema de los jóvenes marginados, ni la necesidad de abrirles espacios de expresión, participación y elaboración de propuestas. Los jóvenes marginados son objeto de la atención gubernamental cuando les afectan situaciones críticas, como la drogadicción, la transmisión de alguna enfermedad sexual o el embarazo precoz en el caso de las adolescentes. En las experiencias exitosas de organizaciones civiles o instituciones privadas que se abocan a rehabilitar u ofrecer soluciones integrales a los jóvenes marginados, se comprueba que la reintegración social duradera combina soluciones para los tres aspectos mencionados. La inversión en educación para procurar la continuidad escolar, el aprendizaje de oficios o desarrollo de destrezas que permita emplearse o financiar parcialmente un proyecto, así como la recomposición del ámbito familiar, contribuyen a una reintegración más estable de los jóvenes.

Desde una perspectiva social más amplia, el cambio en los patrones culturales de las familias para incrementar la educación de las mujeres, estimular la paternidad responsable y un ambiente familiar de respeto y sin violencia, constituyen proyectos de mayor envergadura y continuidad, por lo que sólo pueden ser el resultado de amplios consensos del gobierno con la sociedad civil de cada país. Ya sea desde la globalidad de la sociedad o por un trabajo en las barriadas marginales, sólo se podría aspirar a que los jóvenes agrupados en pandillas abandonaran esa forma de vida si se les ofreciera una opción efectiva que contemplara los aspectos de educación funcional, trabajo e integración social con el resto de la comunidad, vinculados por la solidaridad.

I. NOTAS INTRODUCTORIAS

La juventud, grupo de población entre 15 y 24 años,² representa como promedio en México y Centroamérica 20.3% de la población total y 33.4% de la población económicamente activa (PEA). Su participación en el desempleo total es aún mayor: entre 41% y 62% de los desocupados en los diferentes países. En este contexto, los programas de capacitación y autoempleo destinados a la juventud resultan insuficientes o inadecuados. La marginación social de los jóvenes más pobres reviste manifestaciones en extremo degradantes o destructivas, sin más perspectiva que una mayor exclusión. Pese a este panorama desalentador, los jóvenes de la subregión tienen todavía un peso predominante como miembros activos de la sociedad, potencialmente productivos y creativos. Desde el punto de vista de los derechos reconocidos de la adolescencia y juventud como ciudadanos participantes, los jóvenes marginados carecen del acceso a instancias que pudieran canalizar su legítima aspiración a beneficiarse del desarrollo de la sociedad (UNICEF, s/f). Por ello, desatender la progresiva marginalidad que padece un amplio sector de la juventud de estos países es un atentado contra el futuro económico y social.

La juventud, en cuya población se suele incluir a los adolescentes tardíos y los adultos tempranos, pese a que no es un grupo etario homogéneo, constituye un grupo de personas que, por la trascendencia de la etapa de vida que atraviesa, comparte particularidades, problemas y desafíos análogos. Para este estudio, en muchos de los rasgos y situaciones analizados no existe una demarcación tan precisa y el grupo en cuestión tiende a rebasar las cotas de 15 y 24 años. Esta etapa juvenil —desde la adolescencia hasta la conversión en adulto— abre un período de prueba y ajuste con respecto a las condiciones sociales y económicas que la sociedad ha erigido sin la participación de los jóvenes. La segmentación social derivada de la estructura económica imperante constituye también una fuente de marginación e indefensión que está en la base de las experiencias vitales de la juventud que transita por esta etapa. La discriminación es aún mayor para aquellos jóvenes que se encuentran privados de recursos para realizar satisfactoriamente este tránsito, los que conforman la principal referencia de este estudio.

El grupo específico de interés, la juventud marginada, también presenta dificultades diferentes de las del resto de los jóvenes, debido a las nociones de vulnerabilidad y marginación económica y social, que reaparecen, no sin polémica, en la discusión sociológica de los últimos años en la región.³ Para algunas corrientes de pensamiento, atribuir a la juventud una mayor vulnerabilidad y riesgo de rechazo social constituye un planteamiento desventajoso y portador de

² En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió a los jóvenes como las personas de 15 a 24 años de edad, y en 1995, cuando aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, la población juvenil fue definida como “la cohorte de edades entre 15 y 24 años”, si bien reconoce que, aparte de esta definición estadística, tiene “diferentes significaciones en las diferentes sociedades del mundo”. En este documento se adopta la definición mencionada porque corresponde también a otros estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

³ Desde la segunda mitad de los sesenta existe una profunda discusión sobre estos conceptos y su relación con el desarrollo; específicamente sobre *marginalidad* y *exclusión social* en la región, pueden consultarse Nun (1969), Cardoso (1971) y Germain (1973).

un estigma negativo que debilita su posición en esta etapa de transición biológica y social. Tanto el reconocimiento a la definición de identidad como la inserción autónoma en la estructura social existente se verían afectadas por un enfoque que analizara la situación de los jóvenes desde conceptos que remiten a su debilidad o inferioridad en distintos aspectos vitales. Así, en lo que constituye una etapa social de confrontación y prueba de las aptitudes reproductivas en un amplio sentido, el sujeto principal —los jóvenes— aparecería sólo como portador de problemas y no como protagonista de su maduración individual y social.

Recientemente, el concepto de vulnerabilidad, relacionado con el agravamiento de condiciones precarias de vida y desarrollo, y con la situación de riesgo casi permanente de un sector numeroso de la población mexicana y centroamericana (a raíz de los desastres naturales que se han abatido sobre ellos), se ha puesto de actualidad y ha incrementado su importancia (CEPAL-BID, 2000). Este término también alcanzó difusión durante la segunda mitad de los años ochenta, a través del diagnóstico de los grupos vulnerados y de la propuesta denominada “ajuste con rostro humano” (UNICEF, 1987). Las catástrofes naturales mencionadas han vinculado el concepto de vulnerabilidad con el desamparo material y la precariedad del entorno productivo y habitacional que configura una situación de empobrecimiento y pérdida patrimonial repentinos. La noción de mayor vulnerabilidad se asocia también al daño provocado sobre las condiciones de reposición y acumulación de valores, que contribuye a la agudización de la pobreza (CEPAL-BID, 2000).

La vulnerabilidad a la que se alude aquí no pretende remitir a condiciones de privación material o a la necesidad de servicios asistenciales, sino más bien a la existencia de una estructura de oportunidades que, por el grado y tipo de capacidades adquiridas, no permite la apropiación y utilización efectiva de unas y otras. En este sentido, la vulnerabilidad nos enfrenta a una situación estructural que atenta contra las condiciones de reproducción, socialización y ejercicio de los más elementales derechos humanos y cívicos, en este caso de los jóvenes y, entre éstos, de los más pobres. La insuficiencia de recursos propios y la carencia de capacidades adecuadas provoca la reproducción y el agravamiento persistentes de la situación de pobreza (Katzman, 1997). En el caso particular de los jóvenes marginados, esta vulnerabilidad económica y social se manifiesta en un incremento de la tendencia a la exclusión y la privación de oportunidades, lo que favorece la propensión a involucrarse en redes de informalidad e ilegalidad, como expresión de las limitaciones estructurales para integrarse. De estas estrategias marginales de subsistencia resultan también nuevas situaciones de riesgo extremo, vinculadas a la violencia, la promiscuidad sexual y la degradación personal, las que tienden a incrementarse en todos los países y reflejan el fracaso de la política social global.

Si bien desde la década de los setenta ha disminuido paulatinamente la tasa promedio de crecimiento demográfico en América Latina, de 3.4% a 1.4%, ésta es aún elevada frente a la insuficiencia de la economía para generar empleo productivo y puestos de trabajo de calidad. En sociedades como la mexicana y las centroamericanas, sin despreciar el efecto de reconversión tecnológica en algunos sectores selectos y poco representativos del conjunto de la manufactura, el mayor desajuste proviene de la desatención al peso que la juventud tiene, y la demanda de oportunidades formativas y de empleo que la estructura productiva sólo puede proveer en cantidad limitada.

El efecto combinado, en estas sociedades, de una pirámide de población de base extendida y la insuficiencia de la inversión productiva, convierte el sector informal de la economía en un espacio recurrente de inserción laboral para los jóvenes que logran integrarse. El peso de la juventud como sector demandante de oportunidades y espacios de realización constituye un serio reto, ya que el desempeño económico por sí solo anticipa un riesgo cada vez mayor de exclusión y consecuente marginación de las vías regulares de inserción social. Es cada vez más necesario formular políticas específicas para la integración social y económica de los jóvenes pobres y excluidos.

Se seleccionaron tres países centroamericanos —El Salvador, Nicaragua y Panamá— por los contrastes que ofrecen en las situaciones sociales de cada uno, nivel de pobreza y perspectiva de desarrollo económico. Los países restantes pueden presentar similitudes con éstos en cuanto a las condiciones generales de marginación y vulnerabilidad de numerosos sectores de población.

En algunos de los casos examinados, como los de El Salvador y Nicaragua, la caracterización de estos jóvenes es particularmente sintomática por los efectos de la guerra interna durante la década de los años ochenta, cuando los jóvenes de hoy eran niños o recién nacidos. En una situación preocupante también, aunque menos dramática, se encuentra la juventud marginada de México y Panamá, que ha de enfrentar la oferta restringida de oportunidades de integración económica y social, pese al mayor desarrollo de sus economías y en contraste con el más amplio abanico de vinculaciones a las redes ilegales del narcotráfico, la prostitución y la delincuencia organizada. Con sus matices y características diferenciadas, en todos los casos podemos afirmar que estamos ante procesos de descomposición del tejido social que entrañan un desgaste o señalan la fragilidad del capital social, cuya reconstitución representa un gran desafío para el futuro de estas sociedades.

La otra solución recurrente frente al empobrecimiento y la falta de oportunidades laborales suele ser la emigración, particularmente desde México y El Salvador hacia los Estados Unidos, y algo menos desde Nicaragua y Panamá al mismo país.⁴ De acuerdo con la concepción clásica en la región, los inmigrantes internos y los extranjeros constituyen, por excelencia, grupos de población marginal (Germain, 1973) que se desplazan hacia ciudades o países más desarrollados para evadir una situación de vulnerabilidad económica o social. Estos grupos están compuestos por jóvenes en una proporción que varía de 13% a 15% para el conjunto de emigrantes de Mesoamérica.⁵ Es de señalar que estos jóvenes, debido a su situación particular por la “etapa en el ciclo de vida y exposición a modificaciones de su entorno individual y social (como la adquisición incompleta de derechos sexuales, familiares, económicos y políticos) [son] potencialmente vulnerables...” (Martínez Pizarro, 2000).

La misma sociedad, al considerar muchos de los problemas de la juventud como un desajuste propio de la edad, ha obviado deliberadamente los rasgos más perniciosos en cuanto a la descomposición social. El modelo de desarrollo económico y las instituciones complementarias contribuyen escasamente a la estructura de oportunidades y opciones efectivas

⁴ Los intereses principales dependen de las nacionalidades. Por ejemplo, entre los emigrantes panameños a Norteamérica, hay una proporción grande de población estudiantil.

⁵ Región histórica ubicada geográficamente en los territorios que actualmente ocupan México y Centroamérica.

de integración social, que descansan sobre la formulación de programas esporádicos poco eficientes para desarrollar las potencialidades de estos jóvenes. La necesidad de proporcionar a los jóvenes excluidos posibilidades integrales y con capacidad autónoma de insertarse en el circuito productivo y creador de la sociedad, constituye uno de los mayores desafíos ante este grupo vulnerable. Se incluyen en este trabajo, como recuadros, las experiencias exitosas de trabajo integral y creativo con niños y jóvenes en comunidades marginales de México (Valle de Chalco) y El Salvador (Polígono Don Bosco).

Los jóvenes, desde sus áreas de confinamiento social, desde sus escasas oportunidades de participar y decidir, desde su inhabilitación y sus espacios reducidos para el desarrollo personal y comunal, aun en sus precarias condiciones de formación y subsistencia, como se verá en cada capítulo, representan la mayor fuente potencial de recursos humanos y de desarrollo integral de estas sociedades.

II. GLOBALIZACIÓN, POBREZA Y JUVENTUD

Desde la década de los ochenta, la estructura económica de los países latinoamericanos ha registrado transformaciones que han determinado cambios significativos en el mercado laboral. Ello es evidente en su segmentación y su escisión en un mercado formal y otro informal, cuya constitución y funcionamiento quedan al margen de las regulaciones y compromisos contractuales que rigen el primero. Aunado al proceso de globalización, se verificó un dinamismo selectivo en los sectores productivos y, por ende, el impacto de la evolución del sector formal sobre el conjunto de la economía ha sido limitado. Este hecho fue determinante para provocar el cambio en las estrategias de supervivencia de las familias, sobre todo las más pobres y que tienen menos posibilidades de entrar a competir por un puesto en el mercado formal. La demanda de funciones más específicas de la mano de obra, y de recursos humanos más especializados en las distintas áreas de producción material y de servicios, ha contribuido a acrecentar la marginación laboral. Así, las diferencias de productividad, de remuneración y complementos salariales que han caracterizado la evolución de los ingresos personales en el proceso de inserción al mercado mundial durante los noventa, cimentaron la polarización y estratificación laboral. Este factor complica y dificulta aún más el acceso a quienes, como los jóvenes, se integran por primera vez al mercado de trabajo.

Aunque los mayores cambios experimentados en el ámbito laboral no pueden atribuirse sólo a la reconversión industrial en los cuatro países del estudio, es indudable que los procesos de ajuste económico, el conflicto bélico en la región centroamericana y la discontinuidad en la reactivación afectaron a la demanda y la oferta de mano de obra. Esto provocó desplazamientos importantes de población activa, no sólo entre diferentes sectores económicos, sino también entre las áreas de economía formal e informal, e incluso entre regiones geográficas dentro y fuera de los países. El proceso de emigración laboral y de reubicación de la población afectada directamente se verificó sobre todo en los países centroamericanos que padecieron la guerra interna durante los ochenta, como es el caso de El Salvador y Nicaragua. Las nuevas condiciones de inserción laboral son percibidas por muchos jóvenes como una barrera de integración social, y no como una oportunidad de probarse y acceder al mundo adulto.

La capacidad laboral, en el nuevo paradigma tecnológico, se basa en el hecho de contar con una sólida formación básica y destrezas específicas, que permitan desarrollar versatilidad con eficiencia. Sin embargo, debido a problemas de calidad de la educación en niveles primarios, es precisamente éste uno de los aspectos más agudos del desajuste que se observa hoy entre la demanda de trabajo y las capacidades que se ofrecen. Así, la población joven, que aspira a incorporarse a la actividad laboral y la participación adulta, tropieza con la inadecuada calificación y la carencia de oportunidades para realizar el aprendizaje y adaptación a las nuevas circunstancias. Esta situación de rechazo o no absorción laboral, que pesa particularmente sobre los jóvenes que se han marginado de la escuela o del curso natural de un oficio u ocupación heredados de sus padres, reviste características distintas según se trate de jóvenes urbanos o rurales. En este estudio, el énfasis se centrará en los primeros, ya que el proceso de marginación en la juventud rural los convierte mayoritariamente en emigrantes hacia ciudades de mayor

tamaño o hacia el exterior del país, mientras los problemas de marginación de la juventud tienden a incrementarse y adquieren más visibilidad en las ciudades, entre los jóvenes urbanos.

Según se precisa en estudios recientes para evaluar la brecha de equidad que prevalece en la región (CEPAL, 2000a), el incremento absoluto en el número de familias pobres estaría en parte determinado por el deterioro de las percepciones en sectores urbanos de bajos ingresos, cuya población habría aumentado más rápidamente que la rural. Así, a fines de 1999, los habitantes urbanos en condición de pobreza superarían los 130 millones, en tanto los del área rural llegarían a poco más de 80 millones. De acuerdo con esta premisa, el aumento de hogares y personas en situación de pobreza correspondería a fenómenos de crecimiento vegetativo de la población urbana, así como a la disminución de sus ingresos ⁶ y de sus oportunidades de empleo formal. ⁷ Resulta así de particular interés atender la situación de los jóvenes que se encuentran marginados en las ciudades, sea por su condición de pobreza o por la de su hogar de origen, además de los factores de exclusión que padecen con respecto a las oportunidades para establecer su vida en condiciones autónomas y separados de sus padres.

1. Globalización y juventud: aspectos generales

La forma en que cada sociedad percibe a sus jóvenes y los problemas mayores que le atribuye a la integración social, económica y cultural de los mismos, es muy variable y se corresponde con el proyecto global de desarrollo y su aceptación por la mayoría de las fuerzas actuantes del país. Sin embargo, en casi ningún país existe una atención específica a este sector de la población, ni se le considera en razón de su potencialidad creativa —por la edad y el proceso de elaboración de una identidad propia— como una fuerza social particular que, como tal, requiere atención y oportunidades diferenciadas del resto de población. Así, al tratar de enfocar el grupo de estudio, se topa con una limitación relacionada con la concepción negativa, hasta cierto punto preestablecida, que existe sobre la juventud. Esto no sería tan grave si no fuera porque la juventud constituye una parte esencial del capital humano y social de cuyo desempeño depende el futuro próximo.

Problemas complejos que involucran los estilos de desarrollo, las oportunidades de integración, las diferentes capacidades de inserción y las condiciones de habilitación, ⁸ subyacen a las formas en que grupos de jóvenes reafirman su pertenencia social y la defensa de su identidad local o cultural. Aunque las actividades de este tipo constituyen un medio importante para la consolidación como grupo y para la diferenciación respecto del mundo adulto y de los otros jóvenes, como no son formas reconocidas de valoración social, favorecen la segregación más que la integración. Es éste un aspecto en que los jóvenes esperan respeto y reconocimiento, debido a la creatividad y manifestación de su identidad comprometidas en formas de expresión

⁶ La CEPAL atribuye una influencia considerable a la crisis recesiva del bienio 1998-1999.

⁷ Se refiere a los empleos que tienen algún tipo de regulación contractual, a diferencia de los empleos del llamado sector informal que carecen de vínculos legales y que se establecen y regulan al margen de las instituciones y por acuerdos personales.

⁸ Concepto que está en el centro de la discusión con respecto a las estrategias de erradicación de la pobreza, por medio de una mayor participación de los sectores afectados y la creación de capacidades que les permitan aprovechar las oportunidades; véanse Kaztman (1997) e Irrarázaval (1995).

como el atuendo, la música y el lenguaje preferidos. Entre las disconformidades más reiteradas se encuentra sin duda la que se refiere a las fuentes de trabajo y la validación social a través de la inserción laboral.⁹ Tanto en las etapas de formación académica como en el desarrollo de las aptitudes para integrarse y mantenerse en los sectores más dinámicos, los jóvenes resienten de manera rigurosa e implacable las formas de segmentación social de la educación, que se confirman en el mercado de trabajo. Se podría afirmar que la mayor diferenciación radica en lo que se conoce como capital social (Katzman, 1997), que otorga una influencia muy importante en la cultura y el proceso de civilización al respaldo de las instituciones establecidas y los niveles de conocimientos y calidad de la formación básica incorporada desde muy temprana edad por los ciudadanos.

Las autoridades educativas, policiales y comunales coinciden en que gran parte del aumento de la tasa de suicidios y de la incidencia delictiva entre jóvenes puede atribuirse al modelo económico implementado en las últimas décadas, a las exigencias de competitividad académica desde muy temprana edad, a los procesos de selección estudiantil y laboral en etapas de escasa madurez, pero sobre todo al fracaso del sistema educativo y la desintegración familiar, también por motivos de presión económica. Así los jóvenes dependen cada vez más de sus habilidades y suerte personales, en tanto los valores de solidaridad comunal y familiar pierden efectividad. Algunas reflexiones en torno al costo social de este desarrollo dejan entrever el énfasis excesivo que se ha otorgado en los respectivos presupuestos gubernamentales a la atención de los problemas de ajuste financiero, en desmedro de los asuntos sociales.

En la mayor parte de los países del estudio, la atención gubernamental de los asuntos juveniles, cuando se les trata como un grupo distinto y específico, está enfocada a la capacitación laboral y formación para el trabajo. Aunque la década de los noventa correspondió en general a una etapa de reactivación económica en la región, la juventud marginal no fue incluida en los programas laborales de reinserción social, ni en el ámbito público, ni en el privado. Las propuestas para este sector de juventud carecieron de proyección porque no proporcionaban soluciones vitales, a partir de las cuales los jóvenes beneficiados podrían integrarse de hecho en la sociedad y cumplir una función validada por su entorno. Prácticamente las únicas políticas coherentes enfocadas a la juventud se refieren a los problemas de salud y la prevención o control de sustancias nocivas. Algunas sociedades han comenzado a poner más énfasis en la llamada salud reproductiva, con la preocupación de la rápida difusión del VIH-SIDA, aunque tampoco ha llegado a ser una política generalizada.

Proyectos de integración social como el de “Las Misiones Locales” en Francia,¹⁰ con un fuerte componente de reinserción social a partir de la integración laboral, requieren un compromiso y financiamiento sostenido por parte del gobierno para mantenerse como programa

⁹ Según resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Juventud 2000 en México, para casi el 83% de los jóvenes que laboran no hay vinculación entre esta actividad y sus estudios, y para el 35% la mayor insatisfacción laboral proviene del sueldo que reciben.

¹⁰ En el proyecto original, durante los primeros cinco años de funcionamiento del programa, el gobierno paga el 80% del salario mínimo obligatorio, incluidas las cotizaciones sociales, quedando solamente el 20% restante a cargo del nuevo empleador, sea éste del sector público o privado. Inspirado en este proyecto, en la Dirección de Empleo y Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México se estableció a comienzos de 1999 un programa con una propuesta de capacitación integral para el trabajo y la reintegración productiva a la sociedad.

integral, cubriendo diversos aspectos del problema de exclusión social —que puede abarcar desde la carencia de vivienda hasta la manutención cotidiana— y con la continuidad de largo plazo que pueda dar una solución real al problema de la exclusión y marginalidad. Adicionalmente, el proyecto de reinserción social requiere apoyos diversos, no sólo en el terreno de la capacitación laboral, sino también en los aspectos psicológicos y de cultura de participación ciudadana, para combatir efectivamente la exclusión.

En la región latinoamericana, el fenómeno de la exclusión social y económica va íntimamente vinculado al problema de la pobreza y la ampliación de la llamada “brecha de la equidad”, que mide la distancia y el esfuerzo requerido para alcanzar niveles y condiciones de desarrollo que hagan posible una distribución más igualitaria de los beneficios del progreso económico. Precisamente en los casos de México y Panamá, para los cuales se cuenta con datos de 1997, la tasa de desempleo en zonas urbanas, en el 25% de los hogares de menores ingresos, sobrepasa en más de 70% y 80% el promedio de desocupación de los respectivos países. De esta manera, la pobreza y la desocupación implican una percepción más baja de ingresos y una acentuación de la desigualdad en general (CEPAL, 2000b).

América Latina, como lo señala uno de los más recientes estudios de la CEPAL,¹¹ se convirtió en “productora neta de pobres”, ya que el número de pobres creció en términos absolutos casi 50% más que el aumento de habitantes, por lo que cabe deducir un acelerado proceso de empobrecimiento, por ingresos, de amplios sectores de la población. Este fenómeno correspondería a una más que duplicación de los habitantes urbanos en situación de pobreza durante las últimas dos décadas —de 63 a 130 millones—, mientras el incremento en el número de pobres rurales habría crecido un 10% en el mismo período (de 73 a 80 millones). El impacto de este proceso sobre el grupo de población que nos interesa, los jóvenes de 15 a 24 años, es todavía más pernicioso que lo que puede observarse en la población en general. En el caso específico de México, El Salvador y Panamá, el cociente de desempleo juvenil respecto del general fue más del doble de la tasa general de cesantía (2.45 en 1996, 2.00 y 2.05 en 1997, respectivamente). Sólo en Nicaragua, donde de todas maneras el desempleo general y abierto alcanza al 12.2% de la población activa, la tasa de desocupación juvenil es relativamente menos elevada: 20.9% de la población activa entre 15 y 24 años. Es evidente que, a pesar de haber avanzado en el promedio de años de estudio o formación con que incursionan en el mercado laboral, los jóvenes no logran la inserción esperada.

¹¹ “No obstante haberse reducido en casi cinco puntos el porcentaje de hogares en pobreza y en algo menos de tres puntos los hogares en indigencia durante los años noventa, entre 1997 y 1999 la población afectada habría aumentado en alrededor de 24 y 5 millones de personas, respectivamente. En este mismo período, la población latinoamericana creció en cerca de 15 millones de personas, en tanto que la población en situación de pobreza habría aumentado en alrededor de 22 millones. De este modo, el deterioro de los ingresos como consecuencia de la crisis financiera de los últimos dos años de la década habría acrecentado en 7 millones el número de pobres, en términos netos.” (CEPAL, 2000a.)

2. Demografía, mercados laborales y pobreza

La transición demográfica ha atenuado el efecto de la presión de la población joven sobre las oportunidades productivas y sociales, pero no lo ha eliminado. El perfil demográfico de muchos de los países latinoamericanos cambió significativamente durante los últimos 20 años debido a la influencia de dos factores: el descenso de la tasa de natalidad y el retraso de la edad de iniciación de la reproducción o adelanto del final de esta etapa, que en conjunto hicieron disminuir la fecundidad de las mujeres de un promedio de 5-6 a 2-3 hijos. México, El Salvador y Panamá se encontrarían en plena transición demográfica, caracterizada por un crecimiento natural moderado de la población, mientras Nicaragua está clasificada en una situación de transición incipiente y moderada debido al elevado ritmo de crecimiento de la población (CEPAL, 2000b).

En el año 2000, la población entre 15 y 24 años en los diferentes países del norte de América Latina representa entre 18.4% y 21.2% de la población total, lo que en términos proporcionales se ha mantenido a lo largo de las últimas tres décadas. Sin embargo, en términos absolutos, se trata en todos los casos de una población juvenil que se ha incrementado en 3.4 millones de personas, como resultado del crecimiento acumulado en los últimos 10 años de 40% en Nicaragua; entre 32% y 38% en Costa Rica, Honduras y Guatemala; 25% en El Salvador, y sólo 6% y 9% en Panamá y México, respectivamente (véase el cuadro 1).¹² De manera que por lo general, los países de los que se puede esperar que la demanda de atención social —educación, salud reproductiva y vivienda para los jóvenes— crezca a un ritmo mayor son precisamente los que, durante la década que termina, han tenido una recuperación económica menos dinámica y presentan un cúmulo de necesidades sociales insatisfechas.

a) Demografía: jóvenes y PEA

Es de notar que el peso de la juventud en el grupo de población en edad activa —entre 15 y 64 años— se habría estancado, o estaría disminuyendo, si bien todavía muestra tasas de crecimiento vegetativo superiores a las del conjunto de la población. Se presenta así la situación que los especialistas denominan el “bono demográfico” en referencia a la posibilidad de generar condiciones de crecimiento y empleo en incremento continuo que permitirían satisfacer las demandas de una población cuyo crecimiento se ha estabilizado. Pero mientras los efectos de esta “revolución silenciosa”¹³ se logran generalizar, la situación demográfica de los países seleccionados sigue mostrando una estructura con un peso importante de la población joven, debido, entre otros factores, al menor acceso a información o a instrumentos de planificación familiar en la mayoría de estos países, la ignorancia y la pobreza.¹⁴

¹² Los cuadros que se mencionan a lo largo de este documento se incluyen en el anexo estadístico.

¹³ Véase, para el caso mexicano, el artículo de Partida y Rodríguez en CONAPO, 1999. Para la región centroamericana y de América Latina, véase EAT-UNFPA (2000).

¹⁴ Sólo Panamá está catalogado en un rango medio de pobreza (15% a 30% de los hogares); El Salvador y México se ubican en un rango alto de pobreza (entre 31% y 50% de los hogares) y Nicaragua presenta un nivel muy elevado de pobreza (más de 50% de los hogares) (CEPAL, 2000c).

Incluso en aquellos países, como Panamá y México, donde el incremento de la población joven se ha frenado, ¹⁵ ésta sigue representando una proporción entre 29% y 33% de la PEA, mientras en otros considerados mayoritariamente jóvenes, como Nicaragua —por el peso de la población entre 0 y 24 años en el conjunto—, la participación de los jóvenes en la PEA llega a 39% (véase el cuadro 2). El hecho de que la mayor parte de los países considerados hayan registrado durante la década de los noventa un aumento promedio anual de los jóvenes entre 2.3% y 3.3%, y en todos los casos por encima del ritmo de evolución de la población en general, representa una presión fuerte sobre el resto de la sociedad para mantener las oportunidades de preparación y capacitación adecuadas respecto de sus futuras tareas como adultos. Si esta tendencia de crecimiento de la población joven se mantiene, es previsible que se reproduzcan las insuficiencias de servicios, y en particular el descenso de la calidad de la educación y la retención escolar de los adolescentes, con sus secuelas sobre la posterior integración social de los jóvenes.

Hay un problema estructural que remite a una disparidad más acentuada entre expectativas legítimas de la juventud y la capacidad social de los gobiernos de la región para satisfacerlas. En las familias más numerosas y de menores ingresos, la carga que representan los infantes y los jóvenes que no trabajan, en tanto implican desviación de ingresos sin ninguna compensación como contribuyentes al presupuesto familiar, alcanza un peso relevante. En países como Panamá y Honduras este factor explicaría entre 43% y 44% de la situación de pobreza de los hogares en 1997, mientras en México se atribuye a este factor una incidencia de 39% como determinante de la pobreza en 1996 (CEPAL, 2000a). Por lo tanto, la aspiración de los jóvenes pobres de continuar estudiando puede estrellarse drásticamente con la función que les impone su pertenencia a una estructura familiar o su permanencia en ella.

En todos los países para los cuales se dispone de información, el porcentaje más alto de población pobre se ubica entre los jóvenes de 15 a 19 años, mientras entre los jóvenes de 20 a 24 años la condición de pobreza afecta a una proporción menor (entre 4% y 7% menos que el grupo más joven), a veces inferior a la magnitud de pobreza en el conjunto de hogares urbanos o rurales (véase el cuadro 3). Ello, además de señalar la mayor vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes no adultos, estaría remitiendo indirectamente a la falta de conocimientos y escasez de vinculaciones sociales y redes de apoyo para permitir una inserción que ubique a un mayor porcentaje fuera de la condición de pobreza, situación que algunos de los jóvenes mayores sí alcanzan. A excepción de Costa Rica y Panamá, donde la condición de pobreza en las localidades más deprimidas no sobrepasa una proporción aproximada de 25%, en el resto de los países, las cifras sobre el peso de la pobreza entre los jóvenes son inquietantes. Por lo general, éstas se ubican en un rango que comprende entre el 50% y el 80% de la población entre 15 y 24 años del medio urbano y del rural. En consecuencia, cualquiera sea la forma de exclusión que padezcan los jóvenes, una de las condiciones que los debería unificar para remontar sus particulares

¹⁵ México ha logrado, con una política de población activa, transformar radicalmente las costumbres y decisiones de reproducción en todos los sectores de la población, evolucionando hacia un intervalo efectivo entre embarazos y un control en el número de hijos. Se espera que la demanda de servicios de asistencia de la población más joven se mantenga en términos absolutos sin grandes variaciones en los próximos 15 años y que después incluso disminuyan levemente (CONAPO, 1999). También en Panamá, la reducción de la tasa de natalidad en la última década es un factor que aminora la presión demográfica.

problemas de marginación es el combate a la pobreza, que afecta a una alta proporción de los mismos.

b) Desempleo, subempleo, informalidad

El proceso de ajuste estructural de la segunda mitad de los ochenta provocó altas tasas de desocupación y, como estrategia de supervivencia, la propagación de actividades de servicios personales y la segmentación entre mercado formal e informal. Así, los jóvenes de zonas urbanas, con una tasa siempre inferior a la tasa global de participación en la actividad económica, alcanzaron un porcentaje de desempleo que supera con mucho (y a veces, más que duplica) la tasa promedio global de desocupación (véase el cuadro 4). Independientemente de que una cantidad de actividades y oficios, tipificados como característicos de la economía informal, ya existieran desde décadas atrás, el sector informal como receptáculo de fuerza de trabajo desplazada ha adquirido un papel preponderante en la creación de empleos —de inferior calidad, por ingresos y productividad—, que el sector más dinámico de la economía no puede ofrecer.

Lo que antes de la década de los ochenta podía ser considerado como una opción de última instancia —el empleo informal—, sobre todo en muchachos que ya no podían mantener un rendimiento escolar determinado, se ha convertido actualmente en una alternativa, que en algunas circunstancias resulta más atractiva y apropiada que seguir posponiendo la oportunidad de tener ingresos. Continuar estudios en condiciones de privación económica y por una calificación laboral, cuya funcionalidad no está asegurada en la nueva estructura productiva, puede representar una oportunidad perdida como perceptor económico. Sobre todo después de los 20 años, los varones de familias pobres no sienten la necesidad de seguir estudiando, al menos no para trabajar. Así, los que están activos y no asisten a la escuela son entre 71% y 81% de los jóvenes, mientras los que realizan ambas actividades son menos del 8% (véase el cuadro 5). Es así como los jóvenes pobres tienen necesidades apremiantes y requerimientos más definidos, lo que contribuye a realizar una marginación a priori frente a lo que perciben como posibilidades canceladas.

Esta percepción, que está en la conciencia colectiva de las nuevas generaciones de jóvenes, implica que habría una selección temprana basada en la calidad y suficiencia de conocimientos básicos, además de la familiarización con el uso de instrumentos electrónicos —características que descalifican a los jóvenes que proceden de estratos de menores ingresos y escuelas públicas—, lo cual actúa con mucha más potencia en condiciones de crisis. En efecto, ante situaciones de empobrecimiento por disminución de ingresos, las familias recurren de una manera bastante generalizada, como estrategia contra la pobreza, a la incorporación al trabajo de los jóvenes e incluso de los niños más grandes, para aumentar el número de perceptores en la familia (Cortés, 2000). De esta manera, los jóvenes y adolescentes perciben un clima de presión familiar y social que contribuye a la desmotivación, el abandono temprano y la marginación del sistema educativo.¹⁶

¹⁶ Entre los niños, probablemente debido a su mayor indefensión frente a los peligros de su entorno y a la obligatoriedad de cursar la educación básica (6 años en la mayoría de los países considerados), se da más la modalidad de combinar la asistencia a la escuela con formas de trabajo de tiempo parcial como empacadores de supermercados o empleados en algún taller o negocio familiar.

Es evidente que el mercado informal se ha convertido en una opción cuya actividad es permanente y creciente. El último informe regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecía que, en términos netos, la creación de nuevos empleos durante el año 1999 había correspondido a la actividad informal (OIT, 1999). Esto remite al debilitamiento relativo del capital productivo en la región, con su consiguiente influencia sobre el capital social y particularmente sobre la formación de recursos humanos, dada la precariedad del empleo informal. Es éste un proceso que atenta de manera directa, aunque diferenciada para hombres y mujeres, contra la permanencia de los adolescentes y los jóvenes en las aulas y contra sus debilitadas esperanzas y oportunidades de remontar las condiciones de pobreza de su entorno. El porcentaje de varones jóvenes activos supera con mucho al de sus pares femeninas, sobre todo después de los 20 años. En este punto, las conductas se diferencian sustancialmente, ya que la propensión de ellas a marginarse del estudio, por falta de condiciones y oportunidades, después de esta edad es muy alta (casi entre 40% y 60%) (véase de nuevo el cuadro 5).

c) Migración

En el ámbito de las estrategias de supervivencia de las familias pobres, la emigración representa una posibilidad con mejores oportunidades de contratación y remuneración, si bien no está abierta a todas las familias pobres, o a las más pobres, ya que el emigrante debe poseer destrezas laborales y conocimientos sobre el terreno, que le permitan acometer con relativo éxito su empresa. La solución migratoria requiere, además, una inversión inicial y cierto capital social de la familia de origen, manifiesto en la conexión con redes de emigración (Cortés, 2000) y la posibilidad de prescindir temporalmente de los aportes de la persona que emigra. En el caso de México, por la proximidad geográfica y la organización de larga tradición en los pasos fronterizos, hay un menor costo imputable a los riesgos de traslado y fracaso en la emigración internacional hacia los Estados Unidos, lo que eventualmente es aprovechado por emigrantes del área centroamericana.

Las tasas de emigración de mexicanos a los Estados Unidos en 1996 reflejaban que 9.5 de cada 1 000 personas de la PEA recurría a esta opción para aumentar sus percepciones y las de su familia. Asimismo, en ese año, 11.8% de los hogares mexicanos recibían transferencias, y seis de cada 10 hogares de este tipo tenían estas remesas como principal fuente de ingreso monetario. De manera que dentro de los recursos con que cuentan mayoritariamente los hogares de bajos ingresos, la emigración ha representado un mecanismo de aumento de las percepciones, que beneficiaba a fines de los noventa al doble de hogares que en 1977 (véase el artículo de Rubalcava en CONAPO, 1999).

Con características cambiantes a lo largo de las últimas dos décadas, la emigración en Centroamérica también ha representado una forma no sólo de mejorar la situación laboral, sino también de preservar la integridad física para los habitantes de las zonas de ocupación militar en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Esta emigración, conocida como “movimiento de desplazados internos”, tuvo fuertes repercusiones en la actividad económica de las familias movilizadas y en las pérdidas de capital y patrimonio de diverso tipo. Pero en particular, la degradación y fragilidad del nuevo entorno vital trastocó las perspectivas de formación, aprendizaje y desarrollo de los miembros de menor edad del grupo familiar o comunal.

Actualmente esto se refleja en los graves problemas de integración social de los jóvenes de esos países que sufrieron la experiencia de la emigración forzada de sus padres.

El proceso de emigración desde el Istmo Centroamericano a los Estados Unidos alcanzó un punto de apogeo hacia fines de la década de los ochenta, poco antes del término del conflicto bélico. A fin de ilustrar las preferencias de la emigración, alrededor de 1990, del total de emigrantes del Istmo Centroamericano, el 81.2% tenía como país de destino los Estados Unidos, el 4.6% escogía Costa Rica y otro 4.4% seleccionaba México (Maguid, 1999). Para tener una dimensión del impacto económico del movimiento migratorio de los centroamericanos alrededor de 1990, el número de emigrantes como proporción de la PEA de los respectivos países representaba en El Salvador 31.5%, en Nicaragua 20% y en Panamá 11.5%. El impacto de las remesas sobre la economía local en 1989, de acuerdo con cálculos promediados, equivalía a 34% del ingreso de las familias receptoras en Nicaragua y a 72% de las percepciones para las familias beneficiadas en El Salvador (CEPAL, 1998).

Una vez superado el conflicto bélico en la región, la emigración por razones económicas y de oportunidades continuó hacia el resto de Centroamérica y los vecinos del norte, aunque con un flujo menor de personas, y características cambiantes en cuanto a composición, nivel de educación y temporalidad de la emigración. Así, en la emigración a los Estados Unidos procedente de Mesoamérica, hacia mediados de los noventa, el peso de la población joven más que duplicaba al promedio (13%), desde países como México (29%), El Salvador (31%) y Guatemala (27%), con predominio de los varones de menor edad, para quienes debía resultar menos oneroso recurrir a esta solución laboral (véase el cuadro 6). Sin embargo, son estos mismos países —que contribuyen con 95% de la emigración joven— los que presentan mayor número de jóvenes con nivel educativo bajo, mientras en los restantes países centroamericanos la tasa de jóvenes que emigran con un nivel de estudios medio o alto alcanza entre 48% y 72% del total de emigrantes, por lo que cabe atribuirles motivaciones y procedencias sociales distintas (véase el cuadro 7).

A partir de la pacificación regional, como los flujos de financiamiento externo no alcanzaron el monto previsto, y la recuperación económica fue discontinua e insuficiente, algunas corrientes migratorias intrarregionales continuaron e incluso se consolidaron, como en el caso de la emigración nicaragüense hacia Costa Rica. Del total de nicaragüenses emigrados y residentes en este país, 25% son menores de 20 años, lo que revela la severidad de las condiciones de supervivencia y de la falta de oportunidades en Nicaragua, que obliga a la movilización de familias completas y de una alta proporción de jóvenes entre ellos.

A partir de la década de los noventa, las condiciones legales de estancia en los Estados Unidos, así como el acceso a servicios de seguridad social, se endurecieron para todos los emigrados mexicanos y del área centroamericana en especial,¹⁷ por lo que aumentó sensiblemente el número de personas expulsadas y deportadas. Asimismo, los centroamericanos que arribaron a México se encontraron con una mayor rigidez de las autoridades migratorias, lo que a comienzos de los años noventa afectó sobre todo a salvadoreños, que en promedio fueron

¹⁷ Sin embargo en el caso de los emigrantes de origen nicaragüense, se beneficiaron de la promulgación de una ley en 1997, por la cual los emigrados a partir del 1º de diciembre de 1995 cuentan con facilidades para no ser deportados y regularizar su situación en el país (Maguid, 1999).

expulsados a razón de 827 cada semana entre 1990 y 1991. Hacia 1997, la cantidad de expulsados centroamericanos desde México disminuyó en más de un tercio, siendo los más afectados, por nacionalidad, guatemaltecos y hondureños (Maguid, 1999). Estas prácticas continuas de expulsión de emigrantes han tenido profundas repercusiones en el sector de juventud retornada, que en estas condiciones de rechazo inició la reinserción en sus respectivos países de origen.

3. Los jóvenes urbanos

El problema de la marginación juvenil ha cobrado mayor relevancia entre la población urbana debido a la importancia de la concentración de jóvenes en las ciudades y a las manifestaciones de violencia callejera, que desde hace años se vienen incrementando en las principales capitales. Se suele asociar, indiscriminadamente, el aumento de la inseguridad ciudadana con esta mayor presencia de jóvenes en las calles y lugares públicos. La “visibilidad” que han adquirido los jóvenes marginados a raíz de la persistencia del desempleo juvenil urbano —muy por encima de la desocupación general— y su organización en espacios de la comunidad, ha contribuido a fomentar un concepto negativo hacia ellos.

No es de despreciar que la misma situación de descenso generalizado de los ingresos reales en los sectores de más bajas percepciones y el relativo agotamiento de las fuentes de generación de ingresos, incluso en el sector informal, han reforzado el repliegue de cada núcleo familiar. No sólo se ha experimentado una devaluación del capital social en términos de pérdida de calidad y cobertura de los servicios, sino también en el desgaste y la desestimación de las redes tradicionales de solidaridad y acción conjunta para resolver situaciones de apremio económico cotidiano. Así, canales de transferencia de destrezas y acceso a oportunidades que en anteriores generaciones se transmitían de manera natural, hoy resultan inadecuados o inexistentes, y de manera más acentuada en el medio urbano.

Las manifestaciones de esta divergencia con la juventud que ha desertado de los recintos escolares, y que no logra una inserción laboral, generan una destrucción de los lazos tradicionales sobre los cuales se articulan las estrategias de supervivencia. Y este fenómeno de desintegración social es todavía más visible en las grandes ciudades y específicamente en los populosos barrios marginales. En el ámbito rural se utiliza el recurso de la emigración hacia ciudades de mayor tamaño, o países con mejor perfil económico.

a) Diferencia con los jóvenes rurales

La situación de pobreza en la que se encuentran los jóvenes según su origen, urbano o rural, en todos los países del área norte de América Latina, señala una mayor incidencia en el ámbito rural y afecta en mayor medida a las mujeres (véase nuevamente el cuadro 3). En México, El Salvador y Nicaragua, la probabilidad de que un joven urbano, entre 15 y 19 años, llegue a ser pobre es aproximadamente de 50%. Para la juventud rural de estos países, esta probabilidad asciende a 60% y más, en algunos casos. De manera que las condiciones de pobreza están más extendidas entre los jóvenes del campo, donde su intensidad y los esfuerzos necesarios para superarla suelen ser mayores, en comparación con la población joven de las ciudades.

Además, la estructura de oportunidades está más limitada para los jóvenes del área rural. Las posibilidades de terminar sus estudios y de que éstos sean de calidad son muy remotas en comparación con las de jóvenes urbanos. En cuanto a las condiciones de salud en general, y específicamente en el ámbito de la salud reproductiva, el acceso a la información y a los medios adecuados para aplicar una política de prevención del embarazo de adolescentes y de prácticas sexuales de alto riesgo en la juventud es casi inexistente. Efectivamente, la gama de oportunidades que ofrece el ámbito urbano —aunque no siempre reales— supera con mucho las restringidas posibilidades de la vida rural.

Por otra parte, el proceso de participación en la formulación de las políticas públicas para la juventud se restringe a sólo algunas organizaciones de la juventud urbana y las instituciones correspondientes, por lo que las necesidades apremiantes de la juventud rural siguen siendo desconocidas y postergadas. Cada vez más la estructura de las familias campesinas está cambiando por la adaptación de un mayor número de miembros a las funciones de perceptores de ingresos en actividades que constituyen servicios o producción en áreas rurales, mas no en la actividad agrícola. Los jóvenes rurales han podido así sortear parte de los desafíos que imponen las nuevas adaptaciones tecnológicas en la agricultura y la falta de conocimientos, de créditos y de recursos productivos que se requieren para participar de forma efectiva en los mercados agrícolas más dinámicos. Pese a todo, las opciones para la juventud rural están más bien vinculadas a la emigración hacia poblados o ciudades de tamaño intermedio o hacia el exterior, en busca de ámbitos abiertos donde mejorar sus ingresos o sus posibilidades de formación.

Los jóvenes urbanos de hogares pobres, por su parte, se encuentran en un medio relativamente saturado de pares, en condiciones similares, y en una posición de segregación social que hace difícil superar su precaria situación. Son jóvenes que se enfrentan diariamente a la diferenciación de estratos sociales y de oportunidades, y que al mismo tiempo son excluidos de las posibilidades de habilitación de medios y capacidades para acceder a ellas. En el medio urbano no deja de ser lacerante la situación de marginación social, dado el contraste inmediato entre este tipo de jóvenes y la sociedad formal, exitosa y excluyente.

Por último, en términos de los valores tradicionales de la comunidad, la cultura campesina es todavía un puntal de preservación de costumbres, actitudes y lazos comunitarios, que permite disponer de recursos y diversos tipos de apoyos en infraestructura para el conjunto. Es esta una forma del capital social que contribuye fuertemente a las estrategias de supervivencia de los grupos de familias y que, al emigrar a las ciudades, sólo se pueden mantener mientras la comunidad se asienta en un espacio compartido y resguarda esta organización. En la disgregación comunal y familiar que se percibe en las grandes ciudades subyace un proceso de pérdida de capital social que hace aún más difícil remontar la marginación y sus secuelas de violencia y degradación social. En las actuales condiciones de reproducción y acentuación de la pobreza, las familias pobres han de recurrir a incorporar más miembros del hogar y de menor edad que lo habitual como generadores de ingreso, lo que provoca una disgregación familiar (Cortés, 2000).

b) La emigración urbano-rural

Si bien los mayores índices de pobreza, y por ende de vulnerabilidad económica y social de los jóvenes, se registran en el medio rural, la amplitud del problema en las grandes ciudades,

principalmente las capitales, ha adquirido una relevancia creciente en la última década. Por una parte, la mayoría de los países latinoamericanos del área norte presentan un menor traslado de población rural hacia las ciudades, en consonancia con el grado de urbanización alcanzado por el país. Sólo en Nicaragua, debido entre otros factores a la guerra interna desplegada durante la década de los ochenta, se detuvo el proceso de urbanización y, pese al predominio rural, las estadísticas no registran mayores movimientos migratorios del campo a las principales ciudades. De esta manera, el fenómeno más relevante en términos de emigración interna de los países ya no es la transferencia de habitantes rurales hacia las grandes ciudades, sino más bien el traslado de población entre ciudades intermedias o del campo hacia los poblados cercanos (CEPAL, 2000b). Tal como se señala en este documento:

“Entre los elementos distintivos de los movimientos migratorios internos están el género y la edad. En la región se constata un predominio de la población femenina y de personas jóvenes en las corrientes migratorias internas [...] Los datos de emigración interna recogidos en décadas recientes confirman que dentro de los movimientos ahora más frecuentes —esto es, los de carácter interurbano— las mujeres y los jóvenes registran una sobrerrepresentación [...] Dependiendo del mayor grado de diversificación de las estructuras productivas y de la demanda laboral vinculada a los servicios y trabajos informales ofrecidos en las ciudades, se ha detectado una atracción visible para mujeres y jóvenes oriundos de otras localidades tanto urbanas menores como rurales.”

Aunque se trata de un movimiento diferente al que originó la urbanización en la región latinoamericana —y que se apoyaba en el proceso de industrialización de los países—, la emigración campo-ciudad constituye un mecanismo importante para la juventud rural como factor de progreso y superación de las limitaciones de su entorno. Sin embargo, por el tipo de actividades —generalmente marginal con respecto a los polos de desarrollo económico— al que se vinculan los emigrantes, el mejoramiento de sus ingresos implica el abandono de otras posibilidades de superación como el estudio, la capacitación laboral y otras formas de adquisición de conocimientos.

Actualmente las migraciones rurales hacia las ciudades siguen las posibilidades de colocación laboral en el sector informal, aunque también se ha detectado una importante corriente migratoria de carácter estacional o temporal, en correspondencia con los ciclos de cosecha agrícola. En el caso de los jóvenes y la población entre 15 y 29 años, se ha identificado una preferencia por los nuevos polos dinámicos como centros turísticos, puestos fronterizos y zonas de procesamiento para exportaciones, especialmente en el caso de las jóvenes solteras. En este proceso, las mujeres llevan una parte pesada, en la medida en que se les exige tener un mínimo adiestramiento previo, se les remunera por debajo del sueldo de los varones, y se les condiciona a que aplacen sus intereses de autonomía familiar, en función de no mermar su potencialidad productiva. De todas maneras constituyen, junto con los jóvenes, el contingente de mayor peso en la emigración interurbana, volviéndola más dinámica y circular. Se ha podido constatar que los jóvenes de la región se inclinan por emigrar hacia los llamados espacios de colonización donde todavía quedan posibilidades para integrarse y progresar, o a los grandes núcleos de concentración urbana (CEPAL, 2000b).

c) Crecimiento de la pobreza urbana en los años noventa

Durante la década de los noventa, sólo en los países más pobres del área norte de América Latina —como el caso de Honduras, según los datos de encuestas, y probablemente en Nicaragua— se acentuó la pobreza urbana en términos relativos, pasando del 65% de los hogares en 1990, al 67% en 1997, en el primer país; las zonas urbanas de Nicaragua registraron también 66% de hogares pobres en este último año. En el siguiente tramo se encuentran El Salvador, con casi 40% de hogares urbanos en la pobreza en 1997, y México, con 31% en esta situación en 1998. A inicios de los noventa, tanto en México como en Panamá el número de pobres urbanos se redujo en 3 y 11 millones de personas, respectivamente. La severidad de la pobreza también disminuyó en 2.4% y 8.4% en uno y otro país, como resultado en gran parte de la disminución del desempleo urbano en ambos países, impulsada por la actividad de la construcción durante los últimos años de la década (véase el cuadro 8).

Es de señalar que, aunque los años noventa constituyeron la década de la pacificación en la región centroamericana, la afluencia de capitales hacia la zona y la dinámica de la reactivación económica no han sido lo suficientemente vigorosas. Así, la oferta de ocupación se sitúa por debajo de lo que estos países requieren para enfrentar el problema de insuficiencia de ingresos y descenso de los niveles de satisfacción de necesidades básicas, por lo que el conjunto de la región aún registra lo que se considera un nivel medio de pobreza (CEPAL, 2000d). A la situación de recuperación parcial se sobrepuso en 1998 la catástrofe provocada por el huracán Mitch, que causó un daño devastador en los niveles económico y social ¹⁸ en los cuatro países del área con mayores índices de pobreza (Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador). En el caso de México, la crisis financiera y económica de diciembre de 1994 se reflejó en una considerable contracción económica y una lenta recuperación, cuyo principal impacto distributivo fue el empobrecimiento de los sectores de ingresos medios, concentrados principalmente en las ciudades (Cortés, 2000). En todos estos países, la discontinuidad de la recuperación productiva ha alimentado la retaguardia económica de los centros urbanos constituida por el sector informal y las redes de actividades marginales e ilícitas. En este cuadro depresivo de la economía, los rasgos de marginación y vulnerabilidad de los jóvenes adquieren mayor incidencia que la que se observa para la población en general. Adicionalmente, se ha impuesto una política restrictiva en la programación del presupuesto público, lo que en particular ha afectado a los proyectos y acciones orientados a la juventud.

d) Efecto de la guerra en El Salvador y Nicaragua

La normalización de la actividad económica en los países que sufrieron la guerra interna, El Salvador y Nicaragua durante la pasada década, paradójicamente agravó algunos problemas y creó otros nuevos. Entre los de mayor repercusión social se considera la desmovilización de los ejércitos y grupos armados, así como el desempleo que se generó subsecuentemente. Ante la falta de absorción de un amplio contingente de mano de obra, que incluso en El Salvador logró crear empleo temporal en el sector de la construcción por efecto de la reconstrucción global y los programas de reinserción de desplazados, el impacto sobre la juventud fue considerable. La

¹⁸ Véanse CEPAL, 1999b (Costa Rica), 1999c (El Salvador), 1999d (Guatemala), 1999e (Honduras), y 1999f (Nicaragua).

escasez de datos estadísticos para estos dos países durante el período posterior al conflicto no permite un análisis pormenorizado del efecto real sobre los jóvenes. Sin embargo, es probable que esta menor demanda de personal para tareas militares no sólo haya generado desocupación; también debe de haber permitido que algunos, entre los más jóvenes, continuaran sus estudios o comenzaran algún programa de capacitación con vistas a una posterior inserción productiva.

Quienes no pertenecen a estas sociedades y pueden tomar cierta distancia para considerar algunas manifestaciones de violencia e inseguridad ciudadana estiman que éstos son procesos en aumento, sobre todo en las ciudades capitales, San Salvador y Managua. Estudios recientes realizados sobre la base de sondeos de opinión pública concluyen que están en el temor, la inseguridad y la conciencia defensiva de los habitantes de las grandes ciudades, el ambiente violento y agresivo que se vive en ambos países, propiciado por grupos de delincuentes organizados. Entre los rasgos de caracterización de la violencia por los entrevistados, llama la atención el estereotipo que atribuye la delincuencia a grupos de “jóvenes”, y que se perciba como un problema que sólo se puede controlar o enfrentar mediante fuerzas policiales “autorizadas” socialmente para actuar violentamente en contra de los grupos o personas identificados (IUDOP, 1999).

Con pequeñas diferencias culturales y perspectivas de desarrollo disímiles, tanto El Salvador como Nicaragua adolecen de restricciones presupuestarias y escasez de programas para incorporar e integrar a la actual generación de jóvenes, que nacieron y se criaron en un clima de guerra, en constante agresión, sufriendo grandes desplazamientos y desintegración familiar, siempre por motivos de supervivencia. Los jóvenes de hoy son las víctimas de ayer, cuando no tenían edad suficiente para modificar su entorno, ni posibilidad de defenderse por sí mismos. Pertenecen a una generación que ha sido llevada y traída, dentro de su país, de su región o más allá, hacia Norteamérica, sin lograr asentarse ni definir su identidad, y con una integración precaria que proporciona una estabilidad y seguridad pasajeras.

III. LA JUVENTUD MARGINADA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS

En los principales centros urbanos de México y los países centroamericanos se hace cada vez más evidente la presencia de jóvenes en las calles y zonas habitacionales populosas. Ellos son un reflejo del peso tan importante que tienen en estas poblaciones, y una proyección de la desesperanza con que viven sus circunstancias actuales y la impasibilidad que recae sobre definiciones importantes de sus vidas. Antes de reunirse en la calle, antes de abandonar su hogar o su escuela, incluso antes de asumir una actividad callejera, los jóvenes, y en particular los marginados, son el producto social de economías con trayectorias y prioridades que no reparan en su particular existencia y necesidades como grupo específico. A continuación se intenta describir algunos rasgos de los jóvenes marginados como grupo social diferenciado, para detectar más adelante posibles mecanismos o formas de inserción y participación a partir de sus peculiaridades.

1. Manifestaciones de la juventud marginada

El tipo de marginación o segregación al que se alude en este apartado se refiere a formas intrínsecas de descalificación o exclusión de un grupo social, por no reunir las características idóneas para participar convenientemente en el mercado, o no saber utilizar sus recursos disponibles para formar parte de alguna de las redes del circuito de reproducción de la sociedad. De esta manera, se trataría de la marginación provocada por el propio sistema, bajo las condiciones de reproducción económica con que opera. Es evidente que este grupo de jóvenes pertenece a los hogares o familias con los ingresos más bajos de la sociedad, ya que la segregación adopta, primeramente, la forma de barreras económicas en el acceso a servicios, puestos de trabajo y medios de calidad, lo que desencadena otras formas subsecuentes de rechazo y exclusión.

Para medir indirectamente el grado de exclusión de la juventud en las zonas urbanas podría utilizarse el porcentaje de población juvenil inactiva —que no estudia ni trabaja—, ya que una de las razones naturales más habituales para abandonar o interrumpir los estudios, en el caso de los hogares de bajos ingresos, es la conversión en receptor de ingresos para el grupo familiar o para sí mismo. Por ende, el joven que no estudia ni trabaja está marginado. Así, a excepción de México, El Salvador y Nicaragua, donde la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no desarrolla actividad escolar o laboral ha aumentado levemente en los últimos años y se sitúa entre 22% y 24.5% de la juventud, en el resto de los países, este porcentaje ha tendido a descender, particularmente en Panamá, donde de 27.3% en 1991, bajó a 21.3% en 1998. Tal vez esto indique que en un contexto de crecimiento económico sostenido y con suficiente dinamismo, es posible avanzar en la integración y participación activa de algunos sectores juveniles.

Las características de los jóvenes, que es lo que se percibe parcialmente en las estadísticas y mediciones de algunos rasgos, son a veces el reflejo de sus historias personales y, otras, el resultado de sus circunstancias. Por ello, reviste cierta complejidad conocerlos como grupo social que no es sólo el resultado de la agregación de esas características personales, pero que tampoco

existen o se pueden entender al margen de estas circunstancias. Conforman un sector específico de la sociedad y, en el caso de los jóvenes marginados, la atomización y disgregación de los grupos, por su misma situación habitacional (en la calle), de riesgo (precariedad en condiciones de salud o de vida) o ilegalidad (transgresión de la ley), dificulta la tarea de rebasar el carácter anecdótico y particular de sus historias para caracterizarlos como un grupo social distinto a los demás, aunque formen parte del conjunto social, con intereses y necesidades bien definidos.

a) Bajos niveles de nutrición y escolaridad

Es discutible el hecho de que sea sólo la pobreza la que genera marginación económica y social, aunque hay un relativo consenso en que es la condición que desencadena una serie de situaciones que pueden derivar en exclusión, y es precisamente lo que le da el carácter de vulnerabilidad permanente a la pobreza. Debido a que pertenecen en su gran mayoría a familias de escasos ingresos, los jóvenes marginados tienen bajos niveles de satisfacción de necesidades básicas. Han pasado su infancia en habitaciones hacinadas, han sido mal alimentados, carecen de condiciones ambientales y a veces de salud para desarrollarse adecuadamente. Por diversos factores, abandonan temprano sus estudios, y a veces hasta su hogar. Sin embargo, no ocurre así en todos los hogares pobres; se dan estrategias de supervivencia familiar que no siempre provocan un desastre ampliado por empeoramiento de las condiciones originales de pobreza.

Entre las privaciones más notorias de los jóvenes marginados se encuentran las carencias alimenticias que han padecido durante años —y en la época más importante del crecimiento y formación corporal—, lo que se constata cuando se someten a alguna revisión para diagnóstico, generalmente por abuso en el consumo de alguna droga o por algún episodio de consecuencias fatales. Para el grupo de jóvenes de 15 a 24 años, no se cuenta con estadísticas de deficiencias nutritivas, y menos aún para la juventud según su pertenencia a distintos estratos de ingresos, lo que pudiera permitir una comparación. El nivel de satisfacción alimenticia ni siquiera se registra entre las estadísticas sobre juventud.

Otra manifestación grave de la marginación en los jóvenes es el abandono o la separación de la educación formal. Los datos sobre nivel de educación promedio entre distintos estratos de población juvenil permiten una aproximación al grado de vulnerabilidad o propensión a caer en situaciones de exclusión social. Se puede establecer que los nueve años de estudio delimitan la formación básica y la media o superior, que en muchos empleos formales, incluso en actividades de servicios, es cada vez más habitual como requisito de escolaridad mínima.¹⁹ Desde esta perspectiva, los países de la subregión que registran peor situación en la educación son: México, Nicaragua y Honduras, en los que más del 62% de los jóvenes han tenido nueve años o menos de instrucción, aunque con notables diferencias entre los tres países. En El Salvador, Nicaragua y Honduras existe todavía un porcentaje alto —alrededor de 17%— de población juvenil cuyo nivel de instrucción no rebasa los cinco años, si bien esta situación afecta mayormente a los varones nicaragüenses (casi 19%) (véase el cuadro 9).

¹⁹ Algunos países de la región como México, Costa Rica y Honduras han empezado a adoptar como meta deseable en sus programas de educación la extensión de la educación básica a nueve años de enseñanza.

Panamá es el único país de esta área en el que más de la mitad de los jóvenes ha cursado más de 10 años de instrucción, a la vez que el peso del grupo con menos de cinco años de educación formal es mínimo (3.5%). En general, un tercio de los jóvenes salvadoreños tiene entre 10 y 12 años de instrucción, situación mejor que la de México y Nicaragua, donde 25% y 22% de la juventud, respectivamente, ha alcanzado este nivel. Estos datos pudieran ser indicativos del grado de dificultad que los jóvenes encuentran para su inserción laboral en los respectivos países, si bien de ninguna manera son concluyentes con respecto al problema de marginalidad y de inserción social que los jóvenes de estos países viven cotidianamente. Las manifestaciones de vulnerabilidad social y de exclusión no se remiten a un solo factor explicativo y las derivaciones de la causa general más aceptada, que es la pobreza y los bajos niveles de educación y salud.

b) Pandillas juveniles (“maras” y otros grupos específicos de cada país)

Las pandillas juveniles, como expresión de la organización de jóvenes habitantes de barrios o zonas marginales de las grandes ciudades son un fenómeno relativamente reciente en la región norte de América Latina. Incluso en el caso de México, que experimentó un mayor desarrollo relativo y una acelerada urbanización en las últimas décadas, no se puede afirmar que la conformación de pandillas juveniles sean manifestaciones típicas de la juventud actual. Es evidente que son formas nuevas que los jóvenes han encontrado para aglutinarse y establecer identidades sociales y culturales, y que muchas veces están asociadas, en el inconsciente colectivo, a la escalada de violencia e inseguridad que caracteriza la vida en las grandes ciudades. En apariencia, son formas de organización callejera en barrios suburbanos que los jóvenes utilizan para afirmar su identidad y resguardar el territorio, que definen como propio, de las intromisiones de terceros. Se debe reconocer que éste es un problema complejo en el que se entrelazan factores de origen diverso, que van desde el ámbito económico hasta el racial, estimulados por la violencia y la marginación como rasgos característicos. Como lo señala un estudio reciente sobre el tema (FLACSO, 1999):

“La marginación social y económica, las dificultades familiares, la deserción escolar, las competencias técnicas mínimas, el desempleo o subempleo, el desmedido y no planificado crecimiento urbano, la cultura de la violencia, la transculturación, entre otros factores empujan a los jóvenes a reconstruir su identidad en las pandillas juveniles. [...] se trata de un fenómeno realmente complejo, en tanto que sus causas, expresiones y consecuencias son múltiples y sus características pluriformes.”

Es de señalar que, como expresión de marginación social, las pandillas de esta región deben mucho a las pandillas juveniles estadounidenses de los últimos 40 años, posteriores a la guerra de Corea (a fines de los años cincuenta) y reforzadas por el término de la guerra de Vietnam en 1975 y las sucesivas oleadas de inmigrantes asiáticos, mexicanos, centroamericanos y caribeños. En este contexto, un país como Nicaragua, que padeció la guerra interna pero no tuvo un flujo migratorio tan importante a los Estados Unidos como el de El Salvador o México, tampoco tiene un problema desmesurado con las pandillas juveniles, limitadas en parte por el peso de las características rurales del país y la incidencia y severidad de la pobreza. Existe una asociación casi automática entre la proliferación de pandillas juveniles y el grado de urbanización cuando éste refleja el contraste visible de la desigualdad de ingresos y la marginación, características de las grandes ciudades.

A diferencia de El Salvador, en México y Nicaragua, el continuo flujo a los Estados Unidos de emigrantes de bajos ingresos y bajos niveles de calificación laboral y salud, aunado al endurecimiento de las condiciones de aceptación en ese país, provocan una rotación permanente que impide la cabal integración a los reductos urbanos segregados de la sociedad estadounidense. La forma de concebir la emigración como una estrategia de supervivencia y los intentos de superar la condición de pobreza familiar, conservando su estructura y asentamiento original, imprime diferencias notables entre las distintas corrientes migratorias según nacionalidades. Las pandillas en México, Nicaragua y Panamá, sin dejar de adoptar estereotipos procedentes de la sociedad estadounidense, se explican fundamentalmente por las formas de marginación según ocurrió el proceso de urbanización y desarrollo excluyente en cada uno de estos países.

En México, las pandillas de jóvenes marginados más conocidas tal vez sean “los Panchitos”, que se localizan en zonas marginales periféricas de la ciudad, desde donde operan la mayor parte del tiempo, en condiciones vinculadas a hechos de violencia y delincuencia organizada. La misma segmentación habitacional y residencial de la ciudad capital atomiza la presencia y el efecto de las pandillas, cuya existencia no se desconoce, pero como fenómeno social se tiende a englobar en el problema general de las zonas marginales, de las redes de la delincuencia organizada y otras manifestaciones de descomposición social. De esta manera las pandillas juveniles, como agrupamiento callejero, resultan relativamente “invisibles” al sector más estructurado de la sociedad. Es posible distinguir entre la extensa población juvenil del Distrito Federal —calculada en 2 405 000 jóvenes para el año 2000— a los grupos de adultos jóvenes en situación de calle, que constituyen agrupaciones itinerantes y que presentan gran vulnerabilidad, descalificados por las instituciones de asistencia social y sin más familia de referencia que ellos mismos. Debido a sus precarias condiciones de subsistencia, estos grupos no descartan el recurso al robo callejero, lo mismo que son presa, relativamente fácil, de utilización por grupos más organizados con actividades más integradas en redes de actividades ilegales o ilegítimas.²⁰

Las pandillas juveniles de Managua, por el tamaño de país y la extensión de la pobreza, son grupos que se dedican al robo de transeúntes y pequeños negocios con intimidación, daño a propiedad privada y prostitución callejera, sin poseer los medios y la organización que alcanzan las “maras” de El Salvador. Tal vez esta misma situación facilita de algún modo la labor de la Policía Nacional que desarrolla un programa para reformar y reintegrar socialmente a jóvenes pandilleros de la zona aledaña al centro de Managua. Este programa, que ha resultado de gran eficiencia, se basa en el acercamiento a las pandillas, la mediación entre los miembros de las pandillas y la comunidad a la que pertenecen, y el conocimiento de las necesidades específicas en términos de educación, salud y vivienda. En este caso particular, la Policía Nacional del Distrito 5 de Managua, que ha impulsado este programa piloto, ha debido modificar su propio recelo, y los prejuicios asociados a la acción delictiva de los jóvenes, para hacer efectivas las oportunidades de reinserción social y el tratamiento más integral del problema.

²⁰ Es importante distinguir “delincuencia”, que se refiere a la acción de cometer un delito tipificado en el Código Penal, y “violencia”, que adopta formas de manifestarse que pueden o no constituir delito (FLACSO, 1999).

En El Salvador, la proliferación de pandillas juveniles —genéricamente conocidas como “maras”,²¹ pero que registran diferencias importantes según su origen, composición y elementos de identificación— ocurre en la primera mitad de los años noventa, después de la firma de los acuerdos de paz (1992) y la deportación masiva de salvadoreños desde los Estados Unidos. La mara, como forma de agrupamiento juvenil para apoyar distintos tipos de esfuerzos y propósitos, con formas de identificación particular, existe desde hace mucho tiempo, incluso antes que estallara el conflicto bélico de los años ochenta. Sin embargo, antes los grupos de jóvenes se organizaban como maras estudiantiles o deportivas, con la finalidad de constituir un grupo complementario de apoyo para animar a sus respectivos compañeros en eventos diversos. Actualmente constituyen la expresión de un fenómeno social que remite más bien a la exclusión y segregación económica y cultural de un sector de población que es percibido como peligroso, agresivo e incontrolable, por lo que se establecen barreras de acceso y se asegura su aislamiento y marginalidad.

La vida de los jóvenes que no tienen una familia constituida, o en la cual alguno de los padres falta, o donde el comportamiento de los mayores suele ser agresivo, violento y amenazador, termina casi irremisiblemente por desenvolverse en la calle, que es donde la juventud marginada encuentra a sus pares. La conformación de pandillas es un fenómeno complejo que no puede ser reducido y explicado solamente por las determinaciones de la estructura económica de la sociedad y la falta de oportunidades, como tampoco puede entenderse únicamente a partir del psiquismo y las reacciones, muchas veces violentas y destructivas, de los miembros de las pandillas (Escobar, 1996). En el caso particular de El Salvador, el fenómeno de las maras alcanza una presencia y organización que las convierten en parte de la estructura orgánica de la sociedad, aun cuando el área formal trata de descalificarlo y velarlo de antemano por su marginalidad y actuar violento.

De manera paradójica, los jóvenes agrupados en pandillas son aquéllos que están más estereotipados desde el punto de vista de su identificación con la violencia, y en calidad de delincuentes sociales. Es precisamente por este tipo de prejuicios y de lugares comunes en la conciencia de amplios grupos de población, que se van estableciendo conductas de intolerancia o preparando la opinión colectiva para su aceptación. En el sentir de los habitantes de las grandes ciudades, se admite que debe haber actividad de los agentes sociales “autorizados” (como la policía, por ejemplo) en contra de los jóvenes que son declarados, sin más, como los primeros responsables de la violencia y la inseguridad. La encuesta sobre violencia conocida como “Estudio Activa” en la zona metropolitana de San Salvador (IUDOP, 1999) arrojó entre sus múltiples resultados que el rango etario menor —el cual está comprendido entre los 18 y 25 años— es el que aglutina la mayor parte de la población victimizada.

Sin pretender reducir a sus manifestaciones más obvias el problema sociológico que representan las pandillas en su forma actual —y en este caso las maras como las más estudiadas—, habría que aceptar la determinación recíproca en la constitución del fenómeno. Así como señala un especialista en el tema:

²¹ Según cita Escobar (1996), en expresión de un entrevistado: “...*mara* es un apócope, una reducción pues, de la palabra *marabunta*. Y *marabunta* es el nombre de unas hormigas que son bien bravas, que siempre andan en bandadas, y que cuando atacan no se les salva nada”.

“La agresividad destructiva de las “maras” es una forma de rechazo a las instituciones de la sociedad —familia, escuela, iglesia, Estado...— a las que, consciente o inconscientemente, culpan de haberles heredado un mundo donde no pueden alcanzar la plenitud como personas. Enfrentar estas instituciones con la agresión es una forma de castigarlas, al amparo del contagio que estimula y del anonimato que resguarda.” (Escobar, 1996.)

La pandilla como grupo de pares entre los niños y los jóvenes puede considerarse un fenómeno natural, espontáneo e incluso funcional en el proceso de socialización en condiciones comunes, esto es, en niños y jóvenes integrados en sus familias y en procesos formales de educación. Lo que transforma la aparición de pandillas en un problema es que están constituidas por jóvenes que desarrollan su vida en condiciones de exclusión del sistema educativo formal, muchas veces también de sus propias familias, y sus actividades evolucionan del esparcimiento y la diversión a estrategias de vida que se consideran amenazadoras en el ámbito integrado y formal de la sociedad.

Las condiciones en las cuales las adolescentes o jóvenes se integran a las pandillas —generalmente después de abandonar sus hogares de origen y con casi nulas posibilidades de reintegrarse— conllevan profundas consecuencias ligadas a la participación en el grupo. En las pandillas urbanas, y en la situación más estudiada de las maras, se ha visto que el número de mujeres jóvenes incorporadas al grupo raramente sobrepasa el 15%, lo que implica una proporción de una muchacha cada seis varones. La situación de minoría numérica supone para las jóvenes un trato generalmente vejatorio, como condición de ingreso a la mara o pandilla, además de las funciones serviles y subordinadas que deben seguir cumpliendo como integrantes de estos grupos, una vez que satisfacen las pruebas de iniciación. De todas maneras, de acuerdo con testimonios directos recogidos en entrevistas (Homies, 1998), las jóvenes pandilleras aprecian sobremanera el clima de amistad, la protección y el apoyo que reciben de sus compañeros del grupo. En este sentido cabe recalcar que las pandillas se someten a la observancia de un código interno de comportamiento y aplicación de la violencia bastante rígido, a la vez que entre los miembros de la misma se procuran apreciables muestras de solidaridad, factores todos que están íntimamente asociados a los requisitos para la supervivencia del grupo.

c) Promiscuidad sexual; embarazo de adolescentes y enfermedades de transmisión sexual (VIH y venéreas)

La vida en común de los pandilleros les hace asumir una temprana sexualidad, frecuentemente promiscua, lo que conduce a los riesgos de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo adolescente en las mujeres. Más aún, es sabido que como parte de los ritos de aceptación e ingreso a las pandillas, se les exige a las jóvenes que soporten el asalto sexual de sus futuros compañeros de pandilla, condición en algunos casos intercambiable por una contundente paliza. Tras el rito de iniciación en el grupo callejero, hay una probabilidad muy alta de que las jóvenes se transformen en servidoras sexuales del grupo, como parte de sus tareas convencionales, o que recurran en forma alterna a la prostitución callejera para obtener ingresos. De manera que entre los y las jóvenes de las pandillas, la promiscuidad sexual —uno de los principales factores para la propagación de las enfermedades sexuales por contagio— es un elemento prácticamente inevitable.

Cabe mencionar que resulta difícil controlar estos hábitos, debido no sólo a la edad y la etapa de vida en que se encuentran los jóvenes, sino también por los elementos culturales, específicamente de relación de poder masculino y tácita aceptación femenina, que subyacen a estas prácticas impuestas. Es de notar la escasa preparación de la mujer para imponer una posición de responsabilidad cuando en realidad se trata de una situación compartida, como es el caso de las enfermedades de transmisión sexual, y particularmente del VIH-SIDA, en que se observan dificultades enormes en el esfuerzo no despreciable para difundir el cuidado y prevención de las jóvenes. En países como El Salvador, la relación de casos hombre:mujer entre los adolescentes (de 12 a 18 años) infectados por el VIH era de 1:1 a mediados de 1999, mientras que en edades mayores de 18 esta relación es de 3:2 (Comité Acción SIDA/PASCA/USAID, 1999).

Al examinar la tasa estimada de prevalencia del VIH por edades, podemos comprobar que entre los jóvenes varones de 15 a 24 años, según datos del organismo internacional que se preocupa del tema, ésta es en promedio superior a la que se estima para los adultos en general (de 15 a 49 años), con grandes variaciones entre los diferentes países. Para las mujeres jóvenes, la tasa de prevalencia se sitúa siempre por debajo de la general y la de sus pares masculinos (véanse los cuadros 10 y 11). También en El Salvador, el número de casos de enfermos del SIDA entre 25 y 30 años casi duplicó a aquéllos cuyas edades están entre los 15 y 24 años y, de acuerdo con las indagaciones, la categoría de transmisión más frecuente (78%) es la heterosexual. También se ha podido comprobar que entre los 15 y 19 años, el sexo femenino contrae y desarrolla el SIDA más que sus compañeros de sexo masculino, lo cual sólo se explica por las conductas culturalmente aceptadas y el escaso adiestramiento:

“En El Salvador contextos socio-culturales exponen a la mujer a la probabilidad de contraer el VIH y desarrollar SIDA; factores como el machismo, la promiscuidad masculina y la posición subordinada de la mujer en las relaciones sexuales, contribuyen a la propagación de este virus...” (Ministerio de Salud Pública, 1999).

En el caso particular de las jóvenes pandilleras, la situación es, la mayoría de las veces, más difícil de tratar debido a la indisposición de éstas por efectos de la droga, o la desinhibición y abandono de precauciones provocados por el alcohol, o también el estado recurrente de depresión y la pérdida de respeto propio en estas circunstancias. No menos importante en las dificultades para acceder a información y medios seguros de prevenir el contagio sexual resulta ser la situación de miseria económica que rodea a estos grupos y que constituye una de las limitaciones más persistentes en su condición. Adicionalmente, tanto el entorno afectivo, condicionado a las pautas del grupo, como las historias personales de rechazo, desafecto y agresión, poco contribuyen a una apertura o receptividad de la información. La difusión de los principios de salud reproductiva y la aplicación de las pautas de sexo seguro en esta población de jóvenes requiere un compromiso personal, difícil de lograr por la baja autoestima que acompaña estos estados. Así, a las limitaciones de tipo económico se agrega la dificultad de defender los espacios de decisión autónoma y las medidas para minimizar riesgos de salud e integridad física.

d) **Drogadicción y alcoholismo; las adicciones en los jóvenes marginados**

Dadas las restricciones vitales a las que se enfrentan los jóvenes marginados y en particular los que están en situación de calle, es muy alto el riesgo que tienen de convertirse en adictos a distintos tipos de drogas y otras sustancias como el alcohol y el tabaco. En las sociedades latinoamericanas, las bebidas alcohólicas y el tabaco no se consideran drogas, sino más bien sustancias que, al margen de sus características adictivas, representan un medio para la distracción, la socialización, e incluso la evasión. Tanto el alcohol como el tabaco son productos bastante accesibles para cualquier joven, incluso para los menores de edad, debido a que no están sujetos a control como sustancias psicoactivas. Es así frecuente que desde el principio de la adolescencia los jóvenes incorporen (o no tengan restricciones para incorporar) el consumo de este tipo de productos que, de acuerdo con estadísticas mundiales y de agencias especializadas, provocan adicciones perniciosas. En el entorno de desmotivación, falta de control y depresión en que sobreviven los jóvenes marginados, el consumo de este tipo de productos es característico del grupo social.

Por otra parte, la droga representa un factor determinante en el proceso de formación de los grupos de la calle, en varios aspectos: como catalizador, porque constituye uno de los motivos importantes en la decisión de abandonar el hogar original, la escuela o el barrio; pero también como factor de cohesión, desempeña una función de identidad y afirmación para el grupo de jóvenes marginados, aunque éstas se realicen sobre una condición de dependencia patológica, como es la adicción al alcohol o a las drogas. Como se señala en un estudio de CONADIC (1999):

“En 1963, la OMS [Organización Mundial de la Salud] decidió abandonar los términos adicción y habituación, para reemplazarlos por dependencia, entendida como:

‘Un estado psicológico y a veces también físico resultante de la interacción de un organismo vivo y una droga, caracterizado por respuestas conductuales y de otro tipo que siempre incluyen una compulsión por tomar la droga de manera continua o periódica para experimentar sus efectos psíquicos y, a veces, para eludir el malestar debido a su ausencia...’ ”

Es ésta una de las características del grupo más difícil de vencer, porque es un elemento de rechazo y estigmatización social, que puede llegar a ser un elemento de necesidad biológica, psicológica y funcional, que para devenir controlable requiere asistencia y apoyo médico especializado.

En todo el mundo se detecta un cambio en la forma de producir y consumir drogas ilícitas.²² La globalización económica, la masificación de los estilos de vida y consumo, y la

²² De acuerdo con la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es: “... cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras” y en el ámbito de las Naciones Unidas se emplea la distinción de droga ilegal o ilícita para aquéllas que están bajo control internacional, con independencia de su uso médico legítimo, por haber sido producidas, traficadas y/o consumidas fuera del marco legal (CONADIC, 1999).

transformación de los valores en que ésta se sustenta, han dado lugar a una utilización más frecuente de este tipo de sustancias y a una edad de inicio más temprana. Entre la juventud marginada de los países latinoamericanos, este fenómeno es todavía más acentuado, ya que han aparecido nuevas sustancias adictivas y el uso de drogas ha variado en términos de la frecuencia y el tipo de droga consumida durante los últimos años. Según estadísticas obtenidas en los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en México, aunque la marihuana sigue siendo la principal sustancia de uso, la cocaína se presenta cada vez más como droga de inicio (aumentó casi 10 veces de 1991 a 1997), y lo mismo la demanda de tratamiento por esta sustancia creció en ese lapso de 8% a 31% (CONADIC, 1999). De igual manera, entre los jóvenes de menores recursos, comienza a detectarse una tendencia creciente a la sustitución de los solventes volátiles o inhalables ²³ —que no están en el control internacional— por el llamado “crack”, producto residual del procesamiento de la cocaína, y las metanfetaminas. ²⁴

En los CIJ mexicanos —que realizan labor terapéutica y de reinserción familiar de jóvenes con problemas de adicciones— se constata que 46% de los jóvenes comenzó a usar drogas entre los 15 y 19 años, mientras que 42% lo hizo a una edad más temprana aún. En combinación con los resultados del estudio realizado sobre niñas, niños y adolescentes trabajadores de 100 ciudades mexicanas ²⁵ se pudo confirmar que existe un sesgo importante en el uso de sustancias ilícitas por los jóvenes, dependiendo de si viven en familia o no, y si pertenecen o no a un hogar constituido. Así, mientras casi 5% de los niños y adolescentes trabajadores que viven con su familia afirmó haber consumido drogas, entre los que abandonaron sus hogares, 28% ha recurrido a las drogas. De esta manera, la vida en familia está considerada un factor de protección frente al problema de la drogadicción, y por ende se acepta que para los jóvenes en situación de calle, cuya vulnerabilidad social y económica es mayor, el riesgo de volverse consumidores asiduos de cualquier sustancia adictiva —cigarro, alcohol o droga— se multiplica varias veces. La relación de jóvenes varones, consumidores de droga, que no viven con su familia, respecto de los que sí permanecen en casa de sus progenitores, es de 6:1 (CONADIC, 1999).

El tipo de actividad laboral es también otro factor que actúa como favorecedor del consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes; aquéllos que se dedican a la mendicidad y la prostitución muestran mayor propensión a usarlas que los chicos que trabajan como empacadores en supermercados, o en otros servicios menos personales. Es evidente que los jóvenes que están integrados en un núcleo familiar difícilmente se prestan a realizar actividades como la mendicidad y la prostitución, a menos que sean obligados por sus padres o tutores, por lo que se consideran actividades características de los jóvenes que se encuentran en situación de calle. En este sentido, en los jóvenes de bajos ingresos, el consumo y la adicción a las drogas involucra todo un patrón de comportamiento y en particular de actividades y espacios accesibles o vedados. La misma situación de vulnerabilidad social en que se encuentran los jóvenes marginados los lleva a adoptar estrategias de supervivencia y una “carrera de vida” previsible en cuanto a sus

²³ Los inhalables incluyen sustancias conocidas como tineres, pegamentos industriales y otros disolventes, que son usados como droga por los grupos más jóvenes, principalmente los niños.

²⁴ Una de las menanfetaminas más conocidas es la llamada “éxtasis”.

²⁵ Estudio realizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 1998.

etapas sucesivas de marginación creciente con respecto al mundo formal, y su culminación con la incorporación a redes organizadas de delincuencia y otras actividades ilícitas.

e) **Ilegalidad, crimen y narcotráfico**

Entre los fenómenos regionales con mayor impacto social durante la década de los noventa, particularmente en Centroamérica, pero también en México, está el aumento de la actividad del narcotráfico en esta región como zona de paso de la droga que es internada al territorio estadounidense.²⁶ Tradicionalmente, tanto el territorio mexicano, por su situación fronteriza con los Estados Unidos, como Panamá, por ser un punto neurálgico de confluencia de vías marítimas y transacciones físicas y financieras, han constituido rutas importantes en las corrientes de la droga destinada al norte. Sin embargo, a mediados de esta década, a consecuencia de la reciente pacificación, comenzaron a cobrar relevancia los países centroamericanos como zona de tránsito de las drogas. El hecho de que estos países comenzaban apenas el proceso de restauración del crecimiento, y que presentaban en su juventud —víctima del conflicto y de la falta de oportunidades posteriores— la situación ideal para la proliferación de este tipo de actividades, pudo influir en que el consumo se expandiera rápidamente. Lo que más sorprende en El Salvador y Nicaragua es que, desde mediados de esta década, tráfico y consumo aparecen como hechos nuevos y como clara señal de la descomposición social que amenaza a sectores cada vez más amplios de la juventud.

Artículos periodísticos y notas de prensa publicados en estos países dan cuenta del efecto nefasto provocado por la influencia de las corrientes de tránsito de la droga, sobre todo en los jóvenes pobres de la región. Hoy en día, Nicaragua y Honduras se han incorporado como una ruta señalada de la droga que ingresa por el estado norteamericano de Florida, mientras Costa Rica, El Salvador y Guatemala están en la vía de paso de la droga hacia México. En todos estos países, pero con mayor énfasis en aquéllos donde las oportunidades económicas o donde los programas institucionales de atención a grupos vulnerables son escasos, se ha registrado un aumento del consumo de droga entre los jóvenes y una notoria descomposición social, visible en la proliferación de la violencia criminal y la prostitución. Aunque resulta difícil establecer las delimitaciones de las distintas actividades que engloba la esfera de influencia del narcotráfico, es necesario recalcar que se trata de una organización en redes que operan en un ámbito mundial, y que ofrece, desde la ilegalidad, formas de actividad, pertenencia, reconocimiento, percepción monetaria y gratificaciones de diversa índole, frente a las cuales la economía y el mundo formal sólo pueden oponer un sistema de valores cada vez más tambaleante.

Una de las características del cambio en el consumo de la droga es que hay cada vez más jóvenes adictos a la cocaína o su producto residual, el “crack”, los que constituyen un grupo emergente como nuevos consumidores de la droga. El estudio del CONADIC (1999) ha detectado que este grupo de jóvenes se vincula al consumo de estas drogas más por sus efectos que por factores de consumo asociado a un estrato social, como otros grupos que también han incrementado el consumo de cocaína. Por lo mismo, entre los jóvenes de escasos recursos no se establecen restricciones en la frecuencia de uso ni en el lugar de consumo. Entre estos jóvenes,

²⁶ Según el *Atlas mondial des drogues* (PUF, septiembre de 1996), aproximadamente 90% de la marihuana y casi 80% de la cocaína que entran a los Estados Unidos provienen de América Latina.

cuya adicción a las sustancias está además diversificada, se da de forma imperiosa la necesidad de procurarse medios para comprarla, por lo que son más proclives a participar en las redes de distribución y venta de la droga y otras actividades ilícitas.

2. Causas de la marginación de los jóvenes urbanos

La marginación social es un asunto complejo de descifrar debido a que participan un conjunto de factores cuyo peso determinante varía en las distintas economías. La importancia de cada factor depende de una estructura de oportunidades y su articulación, a través de los requisitos de acceso, con la capacidad para movilizar y utilizar el capital social propio. Pero no sólo constituye una característica temporal o puntual, sino que como resultado del sistema de estratificación económica y social, existe una dinámica de reproducción de la marginalidad. Como explica Kaztman (1997):

“Los pobres marginales se distinguen del resto de los pobres por su menor capacidad para hacer uso de la estructura de oportunidades existente, ya sea organizándose para satisfacer las demandas de bienes y servicios de la población, utilizando las vías de acceso a los servicios públicos y al crédito o maximizando el aprovechamiento de las ofertas del sistema educativo y las oportunidades del mercado laboral. Su estilo de vida revela la ausencia de un proyecto de incorporación a la sociedad global. Sus actitudes y comportamientos reflejan una baja autoestima y la falta de expectativas respecto a la posibilidad de modificar de manera significativa, a través del propio esfuerzo, su bajo nivel de bienestar.”

En el caso de los jóvenes, el problema de la marginación acusa rasgos todavía más dramáticos, por el mayor desamparo social, la inexperiencia de vida y las presiones económicas y emocionales a las que se enfrentan en su proceso de evolución hacia la vida adulta. La constatación del desajuste o falta de correspondencia entre sus capacidades y las oportunidades de integración al mundo formal suelen tener un impacto profundo en sus expectativas y en la elección de vías alternativas de supervivencia, articuladas desde la marginalidad.

a) Entorno familiar adverso

En lo que a este estudio interesa, la familia es la unidad a partir de la cual se reproduce una situación económica que remite a una posición en la sociedad, a la vez que se trasmite un sistema de valores y normas a partir de los cuales los miembros más jóvenes construyen su propia socialización. En este sentido, para todos aquéllos que aún no son adultos y autónomos económicamente, la familia constituye la unidad básica a partir de la cual pueden formarse, adquirir y desarrollar capacidades que en el futuro les den la posibilidad de independizarse para constituir su propia unidad económica y social.

Por lo tanto, las características del entorno familiar constituyen un factor determinante en la adquisición y consolidación de capacidades que definen la integración o marginación del joven en la transición hacia su vida adulta. Diversas son las causas por las que el entorno familiar, en vez de constituir un medio de potenciación y consolidación de los conocimientos, habilidades y

destrezas para insertarse en el mundo, se convierte en un escollo, limitación e incluso en amenaza al desarrollo individual.

i) Paternalidad y maternidad irresponsables, hijos no deseados. Estudios que actualmente se realizan con un enfoque psicosocial llegan a la conclusión de que afirmaciones como las de atribuir una maternidad temprana o no deseada a las adolescentes y mujeres de escasos recursos, debido a la falta de información o de medios para prevenir el embarazo, no siempre son ciertas. Estas investigaciones, que pretenden completar e incluso rebatir los supuestos sobre los cuales se basan los estudios médico-biológicos, han detectado otro tipo de motivaciones en el aparente descuido de las adolescentes o la falta de prevención en mujeres con un número aceptable de hijos. Si bien desde el punto de vista de la carencia de medios para cubrir las necesidades materiales básicas, de cuidados y afectividad que requiere un menor, se pudiera considerar una decisión irresponsable, ello no es inmediatamente asimilable a la condición de hijos no deseados.

En la cultura latinoamericana —de raigambre machista— tanto la paternidad como la maternidad tienen un valor simbólico y de reconocimiento social que involucra distintas formas de compromiso y de asunción de los deberes y responsabilidades hacia los hijos. Incluso no es de despreciar el efecto que sobre las hijas ejerce el modelo de la maternidad a temprana edad de las progenitoras, a pesar de las nefastas y reconocidas consecuencias que tiene sobre el ciclo de reproducción de la pobreza (CEPAL, 1999a). Así, la legitimidad de los motivos para desear y decidir tener hijos, a pesar de las condiciones de pobreza e insuficiencias de todo tipo, parece ser un asunto arraigado en la cultura, más aún en el caso de las personas o familias pobres que deben contraponer un futuro sin expectativas a necesidades presentes de afirmación social y de roles sexuales.

Por lo que se refiere a la generación actual de jóvenes en los países seleccionados, se puede distinguir claramente dos circunstancias sociales que marcaron el clima en el cual creció y se formó esta juventud de menores recursos. Al momento de su nacimiento, entre 1976 y 1985, todos estos países experimentaron el cambio en el modelo de desarrollo económico que propició el desmantelamiento del proteccionismo estatal y el término de las políticas de redistribución del ingreso a través del gasto social regular. En el caso de El Salvador y Nicaragua este proceso fue tanto más abrupto cuanto que ambos países padecieron conflictos armados internos que se prolongaron durante toda la década de los ochenta. Por este motivo, los jóvenes de estos países constituyen una generación que, más allá de la conciencia de sus padres y los adultos con respecto al sentido de los cambios, estuvo sometida a transformaciones de resultados y alcances imprevisibles en el momento en que ocurrían. En este contexto, hasta avanzada la década de los noventa, se reconocía que la familia no podía, por sí misma, cumplir una función de equidad social, por lo que se afirmaba “la necesidad de la intervención social para compensar las situaciones familiares de mayor vulnerabilidad” (CEPAL, 1994).

Actualmente se atribuye una mayor responsabilidad al individuo en la determinación de las oportunidades futuras y las decisiones que tendrán una repercusión sobre el bienestar social de la persona o la familia. Por ello, más allá del sentido cambiante que puede tener la responsabilidad individual sobre las trayectorias de vida de las familias y sus miembros, no es despreciable la presión económica que pueden ejercer los hijos no planeados o la carga de necesidades que no podrán satisfacerse, más aún con la privatización no esperada de un conjunto de servicios sociales, antes disponibles para el conjunto de la población. El cambio de modelo

económico y el desmantelamiento, así sea parcial, de los servicios sociales públicos, recayó principalmente sobre las familias, con un aumento importante de la presión sobre los ingresos reales, más que nada en las más pobres.

En muchas familias de menores ingresos, esto se tradujo en la incorporación de más miembros del hogar, de preferencia las mujeres y los hijos mayores, a tareas productivas como perceptores de ingreso. En aquellos hogares en que el aumento de aportaciones al presupuesto familiar no se pudo realizar, las respuestas fueron desde el abandono del jefe de hogar hasta la expulsión de las cargas familiares, entre las cuales no faltaron menores de edad. Buena parte de los niños y jóvenes de la calle señalan como factores determinantes en su salida del hogar el clima de violencia intrafamiliar, la agresión o acoso sexual y la expulsión directa por algún familiar a la cabeza del grupo. Estas formas de relación que proliferan en familias extensas²⁷ de escasos recursos son características de las barriadas populares de las grandes ciudades. Así, buena parte del efecto excluyente del modelo económico vigente recae sobre las familias en situación de pobreza, y dentro de éstas sobre los que están en formación y aún no han completado su desarrollo: los niños y jóvenes.

ii) Hogares desintegrados, monoparentales; abandono de los menores. El cambio en las condiciones de bienestar social de las familias tuvo repercusiones en el comportamiento de sus miembros, y particularmente en distintas reacciones de los jefes de hogar frente a la mayor presión económica, para evadir el empobrecimiento acelerado (Katzman, 1992). Precisamente, en la década de los ochenta y principios de los noventa se registra un aumento de la emigración externa —por motivos políticos pero sobre todo por motivos económicos— de habitantes y trabajadores temporales desde el área norte de América Latina hacia territorio estadounidense. La mayoría de las veces se trata de hombres solos que dejan sus familias para aventurarse en el país del norte; otras, son mujeres jóvenes, solas o con algún hijo pequeño, que intentan mejorar sus condiciones de vida empleándose del otro lado de la frontera. En todos los casos, la emigración hacia el exterior entraña una desintegración, aunque sea parcial, del hogar original. Sólo en comunidades campesinas tradicionales puede verse el fenómeno de desplazamiento conjunto de la familia, tal como sucede con comunidades del estado mexicano de Oaxaca que emigran temporalmente a las cosechas del norte de México, o las familias del norte de Nicaragua que migran hacia Costa Rica.

Cada vez se acentúa más la tendencia al debilitamiento de la estructura familiar a raíz de las opciones de trabajo que surgen y la escasa capacidad de aplazamiento de oportunidades. En el caso de los hogares pobres urbanos con jefatura femenina, esta situación se presenta en forma recurrente, por lo que la incorporación de la mujer a tareas productivas de tiempo completo, o bajo un régimen de explotación más intenso que el de los varones, implica un abandono de las tareas domésticas tradicionales y un desplazamiento de éstas hacia otros miembros menores de la familia. Estos cambios establecen un marco de reproducción basado en la pérdida de “activos familiares”, consolidan la situación de carencias recurrentes y tienen efectos en la formación a largo plazo de los hijos, debido al debilitamiento de los roles asumidos por la jefatura monoparental. En estas condiciones, el ámbito de formación familiar y de cohesión social interna

²⁷ Tipo de hogar compuesto por una familia nuclear y varios otros miembros que se han unido a ella, sin que tengan necesariamente lazos de parentesco; se considera un producto social generado por la situación de crisis y por las formas de enfrentarla desde la familia.

se debilita, y los niños o adolescentes en situación de cuasi-abandono han de buscar en la calle a sus semejantes con los que podrán realizar ese proceso de socialización e interacción tan necesario para la definición de una identidad propia.

Entre las familias centroamericanas que emigraron y lograron insertarse en el mercado laboral estadounidense, ya fuera que los hijos se reunieran posteriormente con ellos o que permanecieran en sus lugares de origen al cuidado de otros parientes, los muchachos llegaban siempre a la constatación de que se encontraban prácticamente abandonados por sus padres. La movilidad de los padres —de un país a otro; de la zona rural a la urbana; de una cultura a otra— ha provocado cambios profundos en la relación intergeneracional que han dificultado o bloqueado la transmisión de un sistema de valores y la consolidación de conocimientos y costumbres relacionados con la sociedad de origen. De esta manera, la función de reproducción social de la familia se ha restringido a la transmisión de un patrón desarticulado de valores en un ámbito distorsionado de expresión y vivencia de la afectividad. Como señala Rodríguez (1997): “...existe una cantidad creciente de estudios que demuestran claramente que *el estado socioeconómico de los padres* es un indicador de posibles factores de riesgo psicosociales que pueden ocasionar secuelas en el desarrollo o en la conducta...”, y prosigue: “...En las actuales condiciones socioeconómicas de nuestro país, observamos que existen grupos sociales en los cuales se han agotado, o han desaparecido o se han modificado negativamente, muchos de estos factores de protección y aquellos de riesgo han aumentado, por lo que su vulnerabilidad es elevada”.

iii) Antecedentes de desintegración y cambio de roles familiares; deserción escolar y trabajo infantil. En los países centroamericanos que padecieron directamente el conflicto bélico, la organización familiar experimentó cambios que influyeron no sólo en la estructura de los hogares, sino también en las percepciones de autoridad, seguridad y legitimidad de sus miembros. En este sentido, el proceso de urbanización, en ocasiones acelerado por el conflicto armado, que ocurrió principalmente en áreas rurales, ha influido en el cambio de los roles económicos y reproductivos asignados a las mujeres, al aumentar su participación en el mercado laboral. Esto contribuyó a que se frenara su fecundidad, sobre todo en las familias asalariadas y de menores ingresos. El trabajo femenino fuera de la casa, derivado muchas veces de la necesidad de complementar los ingresos, o de cubrir las carencias provocadas por el desempleo o el abandono del jefe tradicional del hogar, ha generado una desorganización familiar que involucra también a los menores, tanto en sus necesidades cotidianas de apoyo como en sus expectativas para el futuro. Este movimiento hacia el mayor acceso de las mujeres a la vida pública y el reconocimiento a su labor fuera del ámbito doméstico no ha sido acompañado suficientemente con la creación de instituciones que puedan reemplazar su importante papel en la guía de los hijos durante las distintas etapas de formación y socialización.

La población urbana se volvió mayoritaria hacia mediados de los años noventa en El Salvador, Nicaragua y Panamá —cuando 25 años atrás lo era la población rural—, lo que implica un proceso de cambio profundo en las organizaciones básicas de la sociedad y en los estilos de vida de las familias. La conjunción de este proceso con el conflicto bélico en los dos primeros países provocó el resquebrajamiento interno del grupo por incumplimiento de la función de los jefes de familia, además de frustración y debilitamiento de su imagen de autoridad. Las dificultades cada vez mayores para mantener un nivel de ingresos suficiente —que constituye una

de las responsabilidades básicas del jefe de hogar en este esquema cultural—, aunadas al cambio de roles, generaron un aumento de presiones y violencia intrafamiliar.

En los cuatro países seleccionados, el proceso de desintegración familiar devino aún más penoso por la magnitud de la emigración. Creó nuevas situaciones de empobrecimiento, abandono y rechazo hacia los miembros más jóvenes, y relativamente más indefensos, de las familias. Además del costo propiamente económico del traslado, se crearon costos psicológicos y sociales intangibles —de inserción, de pérdidas afectivas y desintegración familiar— que afectaron al comportamiento y la estructura familiar. En estas condiciones, son precisamente las cohortes más jóvenes las que han padecido mayormente el desamparo y la falta de apoyos para la socialización, funciones que antes cumplían la familia y otras instituciones, ahora desmanteladas o inoperantes para los sectores más empobrecidos o los emigrantes de primera generación. La secuela de problemas originados por el proceso de desorganización familiar dejó a la población infantil y juvenil en una situación de aislamiento, descontrol y autonomía difícil de superar en función de sus legítimos intereses y motivaciones.

La falta de apoyos institucionales para la retención escolar y la orientación de los niños y jóvenes hacia tareas fructíferas para su futuro se manifestó en deserción escolar y mayor incorporación de éstos a tareas generadoras de ingresos, muchas veces bajo presión de los progenitores, o como forma de independizarse del hogar que ahora se convertía en fuente de amenazas y agresiones. Para muchos de los chicos y jóvenes más marginados, los que ahora están en situación de calle, el problema de la vulnerabilidad al que tuvieron que enfrentarse se dirimía entre la inseguridad y falta de expectativas para su desarrollo e integridad personal, originados en sus hogares, y la vulnerabilidad de los desamparados que sobreviven en condiciones de privación extrema, pero que se organizan y ayudan como grupos de pares.

iv) Falta de estímulos afectivos; desarticulación de las redes de solidaridad y cooperación intra e interfamiliares. En los estudios que hasta el momento circulan sobre el tema de la violencia y la cultura alternativa que desarrollan los grupos o pandillas de jóvenes marginales, se hace hincapié en que el abandono del hogar está vinculado, en primer lugar, al maltrato familiar, y en segundo término, a la ausencia de alguno de los padres (ya sea por separación de los cónyuges, muerte de alguno de ellos o desvinculación de la familia). En una encuesta realizada entre niños y jóvenes que viven en las calles de la capital mexicana, 56% de ellos señalaron el maltrato de los adultos como causa de abandono de su hogar, y 17% mencionaron la orfandad, el divorcio de sus padres y el abandono de sus mayores (DIF, 2000). También de manera insistente, los “mareros” entrevistados en El Salvador se refieren al abandono de sus padres o a su escasa atención por motivos de trabajo o por secuelas psicopatológicas de la guerra, agravadas siempre por las frustraciones laborales y económicas (Escobar, 1996; Homies, 1998).

En las familias se produce una falta de estímulos afectivos hacia las nuevas generaciones, por múltiples motivos relacionados con la disonancia entre lo que socialmente se considera el comportamiento ideal de los padres y sus posibilidades reales de satisfacer las necesidades y expectativas de todos los miembros de la familia. Y como se señaló antes, estos problemas de falsas expectativas no arrancan de la condición psicológica de los padres, sino de los cambios registrados en las funciones socioeconómicas de los jefes de familia y sus consortes. Así, las funciones de protección y habilitación social que ejercían básicamente los progenitores o los jefes

de familia son ahora inoperantes o relegadas a un ámbito público, impersonal y desvinculado de la afectividad como pueden ser los centros escolares o educativos en general.

Esta renuncia o imposibilidad de las familias urbanas de escasos recursos para ejercer los roles de orientación y transmisión de valores, además de limitar su capacidad de regular el comportamiento de las nuevas generaciones, provoca problemas adicionales. La tarea de proveer un sustituto de familia, derivada a las instituciones educativas, se convierte en otra fuente de frustración, rechazo y aislamiento de los jóvenes que se ven empujados a abandonar la escuela, como paso previo a su identificación y agrupamiento con otros jóvenes en su misma condición. En este sentido, los centros de educación se convierten en espacios de contención temporal de frustraciones, agresividad y falta de expectativas reales.

Debido al carácter estructural del cambio y su aditivo ideológico, se refuerza la atención sobre el individualismo y las posibilidades de desarrollo que hipotéticamente la sociedad ofrece a cada individuo. En este ambiente difícilmente sobreviven los valores de solidaridad y cooperación en la comunidad de familias. Por el contrario, son los valores relativos a la competitividad individual y las soluciones personales los que aparecen como modelo de éxito social. En los hechos, las familias de escasos recursos son impelidas por sus propias circunstancias a construir redes de solidaridad y cooperación (Adler, 1991); sin embargo, no está en la cultura económica del nuevo modelo de sociedad el fortalecimiento de estos lazos, ni la consolidación de estas redes. Si bien los estudiosos de la pobreza no pueden dejar de reconocer el valor de la habilitación social como capacidad para aprovechar las oportunidades de progreso que se presentan, se espera que ésta sea construida a partir de las mismas estructuras familiares, empobrecidas y vulneradas (Irrarázaval, 1995).

v) Desesperanza; círculo vicioso de la pobreza y entorno familiar desfavorable. Por las causas expuestas, entre otras de carácter más personal como pueden ser las agresiones incluso sexuales, los hijos de las familias con mayores privaciones materiales y afectivas se ven compelidos a dejar tempranamente el entorno familiar, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad en estos jóvenes. El mayor aislamiento en el medio urbano genera un sentimiento de desesperanza que contribuye a ahondar la automarginación y así desestimar las escasas posibilidades de romper el círculo de condiciones empobrecedoras y destructivas. Si la pobreza atañe no sólo a las condiciones materiales, sino también a las de tipo emocional y de disposición creativa frente a la adversidad, la situación de los jóvenes marginados pareciera ser de las de menores recursos, en un sentido amplio, para enfrentar una posible rehabilitación y reinserción social.

De acuerdo con un estudio sobre niños y adolescentes que trabajan (DIF-DF, 2000), se ha detectado que la estructura y composición estable del hogar influye fuertemente en las condiciones de vida, aprecio y oportunidades de desarrollo para los menores. Así, el mayor porcentaje de menores que combinan la continuación de sus estudios con la realización de alguna actividad laboral fuera de su casa proviene de hogares constituidos por familias nucleares, monoparentales y extensas, donde la jefatura de hogar y las relaciones de parentesco están más definidas. En estos casos, las estructuras familiares son más fuertes y los niños se constituyen en un valor futuro para su propia familia, por lo que se establece en el presente la necesidad de asegurarle un mínimo bienestar en cuanto a sus necesidades básicas, sin descuidar el aprovechamiento de las oportunidades educativas.

Por el contrario, entre los chicos que pertenecen a familias compuestas —donde las relaciones de parentesco son colaterales— se registra un marcado descenso de la asistencia escolar —casi a la mitad del grupo anterior—, y un ingreso más temprano a la actividad laboral combinado con el abandono de la escuela, que afecta entre el 50% y 80% de estos menores, según su edad. En los hogares de este último grupo de niños y adolescentes predomina el vínculo económico sobre el afectivo, lo que les confiere una extrema vulnerabilidad, ya que la menor satisfacción de sus necesidades esenciales implica una presión mayor para convertirse en perceptores de ingresos. Entre el 60% y 95% de estos jóvenes terminan ubicándose en espacios públicos, en actividades de mayor riesgo físico y de salud, por lo que se concluye que la precariedad afectiva de sus lazos familiares es decisiva para colocarlos en una situación de bajo perfil competitivo, menor aprovechamiento de oportunidades y riesgo extremo de exclusión social. Este entorno familiar de alta vulnerabilidad y pobreza es difícil de superar en la siguiente generación y, por el contrario, la situación tiende a reproducirse con rasgos aún más devastadores para las nuevas generaciones.

b) Entorno social adverso

La forma de establecer relaciones de identidad y diferenciación que se dan a partir de la misma marginalidad, y por la falta de espacios de integración laboral o social, que pudieran contener y encauzar la capacidad de acción y creatividad de los jóvenes, contribuyen a profundizar una situación de segregación y aislamiento con respecto al resto del entorno social. Se crea así un círculo vicioso que alimenta el inconsciente colectivo para tratar de que los jóvenes marginados sean relegados de los espacios de funcionalidad y afirmación positiva. Es así como estos jóvenes, y más aún los que están en situación de calle, aparecen estigmatizados con atribuciones de agresividad, violencia, comportamiento indeseable y otros que desde la partida cancelan cualquier oportunidad real de proyección a partir de su situación real.

i) Falta de programas de retención escolar; escasez de programas de apoyo integral a la educación, incluyendo nutrición y salud. México y casi todos los países centroamericanos han incluido entre las metas principales de los programas educativos nacionales la cobertura universal de la enseñanza primaria, que comprende seis años básicos; Costa Rica y Panamá han extendido este objetivo a los nueve primeros años de educación. Pese a la importancia que se atribuye a esta propuesta, prácticamente ninguno de estos países ha generado programas específicos de retención escolar para niños de familias pobres, excepto la gratuidad de la enseñanza. En México, uno de los programas de más éxito en el combate contra la pobreza es el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), que busca enfrentar las insuficiencias de ingresos y de formación de capacidades, con la creación de un entorno propicio al desarrollo de los escolares en un ambiente de apoyo familiar. Este programa está enfocado a los sectores rurales más empobrecidos del país. El apoyo en especie y servicios —de salud y educación— que se otorga a los niños está limitado hasta que alcanzan una edad entre siete y ocho años. En el caso de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 18 años, los programas de becas para estudios regulares del ciclo medio de enseñanza son escasos y, como se establecen en función del rendimiento escolar del alumno y de las vinculaciones al sistema educativo nacional, no operan para los sectores más desvalidos de la sociedad.

Para jóvenes de escasos recursos existen, en casi todos los países del área, programas de capacitación laboral, que a menudo funcionan de manera inercial, sin una verdadera adecuación de los contenidos de sus programas a las ofertas laborales del mercado, por lo que tienen una efectividad limitada, además de la cobertura restringida. El acceso a estos programas está condicionado a una formación personal previa, además de que algunas veces requiere garantías de reembolso de la beca-crédito, con lo cual resulta inaccesible para jóvenes en situación de marginalidad.

Uno de los ejemplos más estimulantes desde el punto de vista de la reinserción familiar y social de un grupo de jóvenes ex miembros de maras en El Salvador funciona sobre la práctica productiva de talleres organizados como un polígono industrial donde además los jóvenes completan sus estudios básicos interrumpidos y comparten alojamiento durante los días laborables (véase el recuadro 1). La columna vertebral de este proyecto, establecido hace siete años, es el sistema de educación y formación que, por su carácter integral, provee no sólo conocimientos y aprendizaje técnicos, sino también, de manera idónea, la creación de un sistema de valores para la reinserción y habilitación social. Además de que la institución que patrocina el proyecto se encarga también de conseguir el financiamiento para la infraestructura productiva, educativa y deportiva, los muchachos deben comprometerse con un padrino o tutor externo, que financia sus estudios y hace aportaciones para la formación de un capital productivo propio, accesible al término de los estudios.

Recuadro 1

EL POLÍGONO INDUSTRIAL “DON BOSCO” EN SAN SALVADOR

Un grupo de maestros salesianos de la Escuela Unificada “Don Bosco”²⁸ de San Salvador, inspirados en la filosofía de la Doctrina Social de la Iglesia, creó en 1986 un complejo empresarial —el polígono industrial “Don Bosco” (PIDB)— formado por empresas cooperativas y talleres enclavados en una población marginal —la comunidad Iberia— donde viven aproximadamente 40 000 habitantes de escasos recursos. Con el ideal de contribuir a establecer condiciones para una vida digna, procurando cubrir necesidades fundamentales y abriendo cauces a la creatividad de las personas, desde 1991 el PIDB comenzó a atender niños de la calle mediante un programa de asistencia integral llamado “Programa Miguel Magone”. Posteriormente, este programa se hizo extensivo a jóvenes en riesgo —habitantes de las comunidades marginales— y después se incluyó también a jóvenes en conflicto con la ley. Desde 1992, se procuró incorporar a los muchachos a un proceso formativo integral mediante su inscripción a cursos regulares del ciclo básico en escuelas públicas o de la misma institución salesiana. También desde 1995, el polígono comenzó a aceptar la incorporación de muchachas de la comunidad vecina, que se encontraban en situación de calle o de gran vulnerabilidad económica y social, principalmente aquéllas que habían abandonado sus familias para incorporarse a la mara.²⁹ Este programa, llamado “Laura Vicuña”, ha atendido hasta mediados de 2000, un total de 29 jóvenes, de las cuales 16 se han reincorporado a sus hogares y cuatro decidieron establecer nuevos hogares.

/Continúa

²⁸ Fundada en 1985.

²⁹ En este caso, se trata de una pandilla juvenil conocida como la mara Salvatrucha (MS) que es la que domina sobre el territorio donde se asienta la comunidad Iberia.

Recuadro 1 (Continuación)

Entre las características más singulares del proyecto se encuentra la metodología de trabajo integral con los muchachos, cuyas edades fluctúan entre 14 y 21 años, a los que se trata de formar como futuros microempresarios cooperativistas. En términos de financiamiento, tanto las instalaciones de la escuela como el pensionado y los talleres que conforman el polígono industrial se han construido con aportes de fundaciones empresariales nacionales y regionales, e instituciones privadas de asistencia (Superbingo); el equipamiento de maquinaria, en buena parte de alta tecnología, fue proporcionado por la cooperación externa de España, Alemania y Canadá. El gasto corriente de manutención, formación, e incluso la visita de fin de semana de los jóvenes a sus hogares, se ha financiado, algunos años, mediante becas otorgadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o por la Suprema Corte de Justicia. Desde marzo de 1998 se han ampliado las becas mediante fondos derivados de un convenio con el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, como forma de cumplir su obligación gubernamental de apoyar la reinserción social de los menores infractores.

Desde 1991 hasta mediados de 2000, el programa ha atendido a 146 varones, de los cuales 42 eran jóvenes de la calle, 20 eran muchachos en situación de riesgo y 84 jóvenes en conflicto con la ley. Estos dos últimos grupos arrojan los mejores resultados en cuanto a reinserción social, ya que 16 muchachos en riesgo y 71 del grupo de infractores de la ley lograron integrarse a sus hogares de origen, con actividad laboral remunerada y un proceso de progresión promedio de tres años de escolaridad, respecto de su nivel al momento de ingresar al PIDB. En cuanto a la reducción al mínimo del consumo de drogas, los resultados son todavía mejores, beneficiando a nueve de cada 10 jóvenes en situación de riesgo o en conflicto legal, y al 60% de los jóvenes de la calle. En cuanto a las mujeres, la totalidad de ellas, en el caso de situación de alto riesgo y en conflicto con la ley, superaron su hábito de consumo de droga, en tanto de las jóvenes de la calle sólo dos de seis lograron terminar su adicción. En este último grupo, el hecho de que la droga más habitual sea la piedra de coca³⁰ y que, por ser mujeres, sea menos factible la reinserción y aceptación de las chicas en sus familias de origen, torna más difícil el cambio hacia una vida normalizada y sin adicciones.

El polígono industrial funciona cotidianamente como un conjunto de talleres a través de los cuales los jóvenes aprenden y desarrollan oficios diversos, algunos de ellos relacionados con alta tecnología y medios computarizados. La formación se realiza en una perspectiva integral, con mentalidad empresarial, aunque a través de una visión de compromiso con el desarrollo de su comunidad, y de progreso de ellos y su trabajo por medio de lazos de solidaridad. En la jornada matutina, los jóvenes trabajan en sus respectivos talleres, y durante las tardes se incorporan a la educación formal, cuyas instalaciones están en el mismo polígono. Los talleres establecidos son nueve, donde se han formado entre varones y mujeres: mecánica (45), carpintería (32), aluminio (10), plásticos (8), matricería³¹ (5), calzado (15 y 12), serigrafía (13 y 2), panadería (9 y 8) e imprenta (9 y 7); de éstos sólo los cuatro últimos admiten aprendices del sexo femenino debido al tipo de proceso productivo y la capacidad de fuerza requerida.

Los talleres constituyen la segunda etapa de un proceso que comienza con la captación de muchachos a través del deporte y la utilización de este medio para infundir valores de trabajo en equipo y mentalidad cooperativa. La tercera etapa consiste en el establecimiento de empresas, para lo cual los jóvenes cuentan con el Centro Salvadoreño de la Pequeña Empresa para el Desarrollo (CESPED) sustentado por la fundación EDYTRA que se encarga de obtener la ayuda financiera. Desde que los jóvenes ingresan al ciclo de bachillerato de la escuela formal, empiezan a crear un fondo patrimonial que sólo podrán utilizar al momento de instalar su empresa. Este capital se crea con los aportes de un padrino externo, el que contribuye con el equivalente a 55 dólares mensuales.

/Continúa

³⁰ Residuo barato del procesamiento de la cocaína que causa fuerte adicción.

³¹ Elaboración de moldes de acero (con torno electrónico) para fabricación de recipientes u objetos plásticos o de otro material.

Recuadro 1 (Conclusión)

Por último, cabe señalar que desde 1991, cuando se abrió el programa para jóvenes de la calle, hasta ahora, sólo siete muchachos se han fugado de las instalaciones del polígono y tampoco se han producido choques o peleas entre distintas maras. Hay un efecto de cierto respeto que inspiran las autoridades del polígono y un reconocimiento del beneficio que produce su acción para el conjunto de la comunidad; tampoco es de despreciar la imagen que proyectan los líderes *mareros* rehabilitados. Recientemente, en el Congreso de Perú, el PIDB fue calificado y premiado como una de las siete experiencias más exitosas de toda América Latina, en cuanto al trabajo con adolescentes infractores y en riesgo.

ii) Inserción laboral de baja calidad; trabajo informal y de escasa remuneración. Entre los cambios sustantivos que han afectado a la relación de los jóvenes con sus familias, durante las dos últimas décadas, se encuentra el alargamiento del período de escolarización y estudios, durante el cual no se les reconoce a los estudiantes capacidad alguna para desempeñarse laboralmente. Así, cuando éstos tienen que abandonar sus estudios para convertirse en proveedores del hogar, lo hacen a expensas de una inserción laboral de baja calidad, ya sea por problemas de productividad o de percepciones reducidas o incompletas. El cambio en las responsabilidades familiares de los jóvenes y su costo en educación no garantiza que sus aportes logren liberar a la familia de las privaciones asociadas a la pobreza, debido a que en general se insertan en un régimen no contractual y en condiciones salariales desventajosas.

De acuerdo con los datos disponibles, hacia fines de la década de los noventa, los jóvenes de 15 a 24 años que no estudian y pertenecen a hogares pobres tienen un peso muy semejante tanto en México como en Panamá, entre 65% y 66%, esto es, dos tercios de la población de esta edad en los respectivos países (véase el cuadro 12). Más allá de lo que esto representa en términos de desatención de recursos humanos potenciales, es de notar que en el transcurso de la década, esta proporción habría empeorado en Panamá. Las tasas de desempleo registradas para este sector de población —jóvenes pobres al margen del sistema educativo— reflejarían importantes diferencias, con 19% en México y casi 44% en Panamá, lo que de todas maneras constituye una situación alarmante porque, en el primer país, incluso los que están en condiciones de subempleo se consideran personas ocupadas. Estas cifras reflejan una proporción varias veces superior a las tasas de desempleo general que corresponden a las áreas urbanas de México (5.5%) o la región metropolitana de Panamá (15.4%) de los años respectivos. El alto índice de desempleo entre jóvenes de escasos recursos, por añadidura, contribuye a una desvalorización de la fuerza de trabajo juvenil, más aún si se tiene en cuenta que se trata de sectores con fuertes deficiencias educativas en comparación con los años de estudio que en promedio tienen los jóvenes que buscan trabajo en México (casi 9 años) y en Panamá (10 años).

iii) Falta de estímulos sociales; exclusión temprana, sin reconocimiento de su capacidad creativa y sin consideración de su entorno familiar. En los hogares en situación de pobreza, la familia se constituye en una estructura que limita el acceso a oportunidades y restringe la consolidación de capacidades de algunos de sus miembros, sobre todo porque obliga a acortar los tiempos de estudio, que se consideran una pérdida de ingresos inmediatos. La forma en que opera esta organización familiar que no posibilita progresar sobre las condiciones de pobreza y

carencias esenciales, no siempre es explícita, sino que está parcialmente contenida en las limitaciones económicas, así como en los patrones culturales, discriminatorios y excluyentes que se establecen en las propias familias.

Esta situación, frecuente en los hogares de escaso nivel educativo y cultural, afecta particularmente a los miembros menores del grupo, que son catalogados como los más débiles o los que merecen menos consideración en función de su valor proyectado al futuro, generalmente las jóvenes y los varones con peor desempeño escolar. Las primeras son tempranamente relegadas a cumplir tareas de servidumbre doméstica, en sus hogares de origen o como empleadas en casas o establecimientos, cuando no actividades ilícitas y de prostitución. Los varones adolescentes son encauzados hacia capacitaciones técnicas y oficios, la mayoría de las veces ya obsoletos, lo que contribuye a una pronta desilusión con respecto a sus verdaderas posibilidades futuras de subsistencia. En los jóvenes que abandonan sus hogares está la percepción de que no hay correspondencia entre sus capacidades y atributos y las exigencias productivas y sociales del sistema formal, que los descalifica de antemano.

Por otra parte, es de notar que cada vez más, en todos los países del área, la posibilidad de acceso a puestos de trabajo, y sobre todo para los que buscan por primera vez, está condicionada al nivel de estudios alcanzado y al círculo de relaciones del entorno familiar. En este sentido, mientras más pobre y excluido sea un hogar, mayor será la probabilidad de que los jóvenes tengan que enfrentar situaciones de obstáculos al acceso y marginación de oportunidades, debido a su procedencia familiar. El mercado funciona de acuerdo con la segmentación social, con una eficiencia que impide la colocación de jóvenes de escaso nivel educativo o dudosa formación y procedencia en empleos formales, seguros y adecuadamente remunerados.

iv) Marginación participativa y política; limitaciones en la consideración ciudadana de los jóvenes de escasos recursos. Mientras la incorporación al mercado laboral se da de manera temprana para los niños y adolescentes, la marginación de cualquier ámbito de participación civil o ciudadana es proporcional a la intensidad de la pobreza del hogar. En esta descalificación para participar en las instancias de representación y decisión políticas no intervienen sólo las características de pobreza, sino también aquéllas raciales o que se vinculan a la etnia de origen, así como a los ambientes culturales de procedencia. Debido a que la participación en las tareas propias de los adultos ocurre como una asunción temprana de roles, y en condiciones de informalidad y explotación exacerbada entre los jóvenes más pobres y marginados, se da también una ausencia total de consideración de sus derechos de participación ciudadana y como grupo especial de población y juventud.

Los cambios ocurridos en toda la región, en cuanto a la flexibilización de las condiciones contractuales del mercado de trabajo, y específicamente en cuanto a la limitación de los derechos laborales de los trabajadores, ha posibilitado que éstos sean excluidos de las instancias de participación incluso en asuntos relativos a sus propias condiciones de trabajo. Para los jóvenes marginados esta situación es todavía más grave porque raramente están organizados y menos aún cuentan con una estrategia de integración a la sociedad, además de que no poseen las calificaciones formales. Ante la estratificación de la educación y, en consecuencia, la segmentación del mercado laboral, los jóvenes de escasos recursos están excluidos de antemano. Estas dos vías —la educación de calidad y el empleo formal— son mecanismos del sistema que operan para conferir carta de ciudadanía y participación a quienes están integrados.

Tradicionalmente, la juventud ha estado excluida de los espacios de poder y decisión debido al predominio de los adultos, económica y socialmente consolidados en sus puestos. Por ello, es de pensar que en el caso de la juventud marginada se da una doble exclusión derivada, por una parte, de su condición de jóvenes y, por otra, de su particular situación de segregación por las carencias que entraña la pobreza. En el caso particular de las jóvenes de menores recursos, la discriminación y el grado de postergación de sus necesidades, materiales y emocionales, suele colocarlas en una situación completamente desfavorecida. Casi no existen mecanismos instituidos para reconocer, en condiciones normales de existencia, los derechos de las jóvenes adolescentes y ofrecerles la posibilidad de forjarse una situación de independencia económica y de participación en decisiones o hechos que, cuando ocurren, modifican toda su vida. Esta situación es todavía más lastimosa en las jóvenes urbanas de poblaciones marginales o en las indígenas que no tienen a quién recurrir en situaciones, bastante frecuentes, de agresión sexual o de violencia intrafamiliar.

La mayoría de las organizaciones que atienden jóvenes adolescentes están enfocadas a ofrecerles orientación y apoyo médico y emocional, una vez que ya han sufrido alguna desgracia personal que afecta a su integridad física y psicológica, además de poner en riesgo su salud. Generalmente este tipo de sucesos termina por trastocar su entorno afectivo, sus posibilidades y condiciones de subsistencia económica, y hasta su curso de vida futura —como en el caso de los embarazos no deseados, las violaciones y la paternidad no reconocida—; las jóvenes marginadas que padecen esta situación terminan estigmatizadas y aún más rechazadas que antes. De esta manera, la pobreza se transmite a la siguiente generación en condiciones todavía más agudas y excluyentes; las oportunidades que estas jóvenes mujeres tienen de participar en la política contingente son todavía inexistentes, pese a su gran necesidad de expresión de carencias y solución de las críticas situaciones que padecen.

c) Responsabilidad individual

Uno de los temas más controvertidos, tanto en términos legales como en cuanto a conducta social, es la definición de un marco de responsabilidad individual, a partir del cual el sujeto respondería por actos y situaciones generados a partir de sus propias circunstancias y de un sistema de valores particular. Incluso en la mayor parte de las sociedades, se entiende que la etapa de juventud está definida por un proceso de afirmación de la individualidad previa a su aceptación como ser adulto, comprometido con la reproducción de la sociedad a la que pertenece y la de su núcleo social. Se trataría, por ende, de encauzar la responsabilidad individual en el proceso de maduración a partir del cual el individuo puede reconocer las consecuencias de sus actos y el límite de la permisividad social de éstos.

En este estudio, la responsabilidad individual, a partir de la situación de marginación definida por la sociedad, se entiende como un conjunto de situaciones o mecanismos adversos —y hasta cierto punto, inconscientes— a través de los cuales un individuo puede acentuar o agravar su situación de exclusión y marginalidad social. En todo caso, es difícil determinar en general cuándo esos mecanismos son reforzados por la sola acción individual o cuándo se trata de una respuesta del individuo en el límite de la preservación social.

i) La desesperanza y la ilegalidad como fuente de reproducción de la exclusión. La violencia juvenil se asocia con frecuencia a la reacción frente “a la situación de pobreza, exclusión social y consiguiente frustración que sienten los jóvenes [...] la que emana de las estructuras de una sociedad excluyente e inequitativa” (Agudelo, 2000a). El entorno social e institucional de los jóvenes marginados es tan sistemáticamente excluyente y discriminatorio —esto es, que abarca todas las instancias de la vida— que puede provocar una reacción de desesperanza con respecto a las posibilidades de alterar la condición de exclusión. Parece absurdo, pero el discurso que los medios de comunicación y la sociedad dirigen a los jóvenes, tanto en cuestiones triviales como trascendentales, se enfoca a la exacerbación del individualismo y de la capacidad de la voluntad. Por ello, cotidianamente los jóvenes están sometidos a una situación contradictoria en términos de las insuficiencias y limitaciones de su entorno real, mientras las perspectivas virtuales les presentan que los medios les remiten a la frustración y la desesperanza respecto de sí mismos.

Frente a la presión social del logro y la suficiencia de ingresos, los jóvenes marginados, que no tienen espacio y posibilidades en la estructura de oportunidades reales, acuden, dependiendo de los valores internalizados, a las oportunidades que les ofrece el sector informal, o de manera más peligrosa, pero también con mayores posibilidades de ingresos, a las redes de delincuencia organizada. No es éste un proceso inmediato, ni es consecuencia natural de la percepción de fracaso o exclusión social. Antes bien, es toda una involución de decadencia social y reemplazo paulatino de valores, que termina en la adhesión a otro entorno, pero que proporciona al individuo condiciones de validación económica y social que de otra manera les están negados.

El fenómeno de organización entre jóvenes, mencionado más arriba, no da lugar a un ente aislado, puesto que los grupos de niños y adolescentes se conectan entre sí y con grupos de otras edades. Al ligarse a otras organizaciones, los jóvenes obtienen seguridad personal, medios de subsistencia y sentido de pertenencia que no podían lograr por otros medios. Desde esta perspectiva, la progresión marginal que realizan los jóvenes desde su agrupamiento en pandillas hasta su integración en organizaciones delictivas parece responder a una trayectoria de la exclusión y la necesidad de afirmarse y reproducirse en la marginación.

ii) La imagen propia y de la marginación como fracaso social. En los estudios de campo realizados con jóvenes de la calle o pandilleros, se aprecia una notoria resistencia de los jóvenes a la devaluación de la imagen propia, cuando el encuentro y la comunicación ocurren en condiciones conscientes.³² Esta animosidad corresponde a un rechazo de las clasificaciones y prejuicios que se pretenden imponer a los grupos marginados, que son recibidos y contestados con agresividad, como una de las reacciones más típicas de las pandillas, hacia lo externo y hacia lo diferente al grupo. Con referencia a las maras de El Salvador —que constituyen el ejemplo más organizado y agresivo de las pandillas en la región—, señala un estudioso del fenómeno (Escobar, 1996) “...lo que priva es la actitud contestataria de quienes han quedado en situación de marginalidad material o espiritual en el sistema, es decir, sin posibilidades reales para

³² Por problema de adicciones múltiples, y la misma situación de hambre, exposición a las inclemencias, insalubridad, falta de atención médica, y todas las carencias que caracterizan la vida de los jóvenes en la calle, una parte importante del tiempo de vida es empleado por ellos para evadirse de sus circunstancias por medio de las drogas, principalmente los inhalantes y la marihuana.

concretar y realizar un proyecto de vida válido y digno”. Y más adelante: “...estas “maras” agreden como forma de revancha por todo lo que las instituciones —generalmente la familia— les ha negado, o como medio para adquirir la notoriedad que sus psiquismos precisan para labrarse una identidad y un reconocimiento en la vida”.

La marginación representa la condensación del fracaso social y la negación de cualquier esfuerzo para remontar las condiciones adversas, por lo que sólo queda la alternativa de contestar desde la elaboración de códigos y preceptos propios que los identifiquen y singularicen respecto del resto de la sociedad. Las posibilidades de integración social y las oportunidades factibles de mejorar sus condiciones de vida futura, que se ofrecen a los jóvenes marginados a través del estudio o la capacitación laboral, están vacías de significado para ellos y no representan opciones de proyección personal. A partir de la misma marginación, los jóvenes han constituido una subcultura, que tiene múltiples formas de manifestación y que expresa una ruptura con la socialización que le asignan el sistema económico y sus medios oficiales de reproducción. Así, desde un proceder diferente y con un alto riesgo, los jóvenes delimitan territorios, inventan formas de comunicación, establecen la agresión como práctica común, en un esfuerzo cotidiano y desesperanzado por oponerse al estigma del fracaso social, a través de prácticas que pueden colocarlos fácilmente más allá de las normas vigentes en el conjunto de la sociedad.

La marginalidad y su expresión como fracaso social constituyen un mecanismo de reproducción social: los grupos de jóvenes, integrados o no a redes de delitos organizados, dedicados o no a pequeñas actividades legales o ilegales, reproducen su propia situación, y en forma aún más acusada, a partir de la integración continua de un número aparentemente inagotable de niños y jóvenes que comparten su situación.

iii) La vulnerabilidad social y económica como factor permanente. El punto más conflictivo del problema de la marginación tal vez sea el comportamiento y las prácticas delictivas, como medio de supervivencia material e identidad personal y colectiva, ya que constituyen una forma extrema de ruptura con la sociedad. A partir de ese punto, la evolución de los grupos y su reproducción se dirime como confrontación con el orden establecido, y el terreno de este enfrentamiento entre lo legal y lo ilícito es necesariamente violento y destructivo. Es por ello un gran desafío para cualquier sociedad —pero sobre todo para éstas del norte de América Latina— la aceptación de la responsabilidad social con respecto a la falta de oportunidades para el logro social de este capital humano que son los jóvenes de cada país.

La pobreza suele considerarse una situación altamente vulnerable de por sí, es decir, que la sola probabilidad de ser pobre o pertenecer a un hogar pobre configura inmediatamente una situación de vulnerabilidad en aspectos esenciales de la vida. La precariedad económica y el debilitamiento del capital social, a través de la exclusión de oportunidades que padecen las familias más pobres, aumentan la irrupción de todo tipo de riesgos, que afectan internamente a la estabilidad y el desarrollo de sus miembros, entre los cuales se incluye la salud en un sentido integral, incluida la salud mental. Esta vulnerabilidad crea nuevos sujetos de la marginalidad, proclives a afecciones y adicciones difíciles de tratar y curar como fenómenos aislados. Como señala un especialista del tema: “...la condición de la pobreza es una situación determinante de vulnerabilidad, una situación de mucho riesgo para ciertas condiciones, las enfermedades mentales, por ejemplo” (el subrayado es del autor) (Rodríguez, 1997).

Pero también la pobreza hace vulnerables a las familias frente a los riesgos externos. La extrema vulnerabilidad con que la población de menores recursos debe soportar los desastres naturales constituye una evidencia del tremendo contrasentido propagado por un estilo de desarrollo que reproduce las condiciones de una pobreza ampliada y cada vez más distanciada de las condiciones de bienestar material y espiritual de la sociedad. Ni la readaptación social, ni la rehabilitación individual pueden garantizar la disminución de la vulnerabilidad, en tanto se siga reproduciendo la pobreza, con la privación de capacidades y medios legítimos para acceder a condiciones de vida que aseguren el desarrollo humano y la dignidad a uno de los grupos sociales más olvidados, como son los jóvenes marginados.

IV. LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LA JUVENTUD MARGINADA

El Plan de Acción Juvenil de Braga³³ establece como punto de partida de sus recomendaciones de acción que: "...la gente joven y las organizaciones juveniles [...] no son obstáculos, sino recursos indispensables al desarrollo. La juventud está construyendo la sociedad civil y el capital social para el siglo XXI". Este tipo de declaraciones debería conllevar un reconocimiento de las virtudes de la juventud como generación de recambio y liderazgo en el futuro. Por el contrario, lo que se percibe en la sociedad, con los grupos de jóvenes que constituyen la mayoría, es su relegación por factores de inercia y otros que derivan de la amenaza que representan para la cultura imperante y las formas de poder establecido. A los jóvenes, que declarativamente son considerados la promesa del mañana, en los hechos, la sociedad adulta les obstaculiza el acceso a múltiples medios de desarrollo y participación. En el caso de los jóvenes marginados, las razones objetivas para su descalificación son tan contundentes que las de tipo ideológico y generacional son redundantes en función de la exclusión.

1. Una mano de obra abundante, disfuncional y desempleada

Los jóvenes marginados son, ante todo, disidentes; disidentes de un sistema de enseñanza, muchas veces, obsoleto; disidentes de un sistema social que les niega su apoyo porque no los considera necesitados y vulnerables; disidentes de un núcleo familiar que no los protege y, por el contrario, reproduce las carencias sociales que afectan a su desarrollo. Esta exclusión, que podría catalogarse como problema o ruptura social, está enraizada en las condiciones económicas que prevalecen para un alto porcentaje de población pobre en la región, pero sobre todo para los jóvenes de escasos recursos, a quienes las carencias e insuficiencias afectan más intensamente.

Es casi un lugar común de nuestros días que la creación de empleos productivos es una de las grandes limitaciones con las que progresa y se instala el nuevo modelo de crecimiento económico. En este sentido, la OIT atribuyó al mercado informal, durante el año 1999, la creación de la totalidad de los nuevos puestos que se generaron en las economías de la región latinoamericana (OIT, 1999), ya que este sector registró 4.1% de aumento de la ocupación, mientras el empleo en el sector moderno se habría reducido 2.6%, lo que indirectamente señala la insuficiencia de la economía formal en este sentido. El dinamismo del producto interno bruto (PIB) fue, en todos los casos registrados, inferior al crecimiento de la PEA, todavía muy dependiente de las tasas de fecundidad de fines de los setenta y principios de los ochenta, en que la transición demográfica y el descenso de la fertilidad recién comenzaba.

Entre 1991 y 1999, la producción interna de México y Panamá creció a tasas promedio anuales de 3.2% y 4.7% respectivamente, mientras la población en edad de trabajar y que buscaba trabajo, lo hizo a tasas de 3.9% y 5.4%, por encima del dinamismo de la economía

³³ Tercer Foro Mundial de la Juventud del Sistema de las Naciones Unidas, celebrado del 2 al 7 de agosto de 1998 en Braga (Portugal).

formal. En cuanto a la ocupación general en estos países, entre 1990 y 1998, México creció a una tasa promedio anual apenas por debajo de la PEA, mientras en Panamá el aumento del empleo superó cada año en un promedio de 0.8% la expansión del número de nuevos trabajadores potenciales, lo que para este último país resultó en una reducción de la tasa de desocupación, aunque acompañada de una menor calidad del empleo.

El problema del desempleo en los países de la subregión ha evolucionado de manera dispar según se refiera al ámbito rural o urbano. En el primero se ha mantenido estable debido al recurso de la emigración, más utilizado por esta población, y a la integración, en algunas zonas, de otras actividades distintas de las propiamente agrarias. Por lo general, en las áreas urbanas, los problemas de desempleo han tendido a agravarse, en virtud de la insuficiencia señalada de la recuperación económica. Desde mediados de la década de los noventa, en que el desempleo urbano logró porcentajes menores que los del inicio del decenio, la situación para la mayoría de estos países —entre los cuales están El Salvador, Costa Rica y Honduras— ha empeorado levemente (véase el cuadro 13). En el caso de México, después de la crisis de 1995 se observa una recuperación constante del empleo urbano en términos relativos, aunque es probable que este indicador refleje en alguna medida la contracción en el crecimiento de la oferta de trabajo, que se da por distintas razones. Resulta de gran interés la observación que realiza el organismo especializado, aun cuando es una aseveración para el conjunto de la región: “El ajuste recesivo en curso está teniendo serios efectos sobre el mercado de trabajo, aumentando la vulnerabilidad del mismo [...], aun cuando el crecimiento de la oferta laboral se modera por el retiro de la fuerza de trabajo desalentada.” (OIT, 1999.)

En un esfuerzo por reseñar de manera más precisa la evolución del empleo urbano, el último informe regional de la OIT sitúa a México entre los países con un nivel de informalidad intermedia (49.6%), mientras que la de Panamá sería baja (38.5%), lo que explicaría, en parte, la buena evolución del empleo en 1999 en ambas economías, ya que el sector informal se convirtió este último año en el principal generador de empleos en el conjunto de la región, “dado que seis de cada 10 nuevos empleos corresponden a este sector en el período 1990-1998” (OIT, 1999), pese a la reducción de puestos de calidad en ambas economías. Todavía en Panamá, el peso del empleo en las empresas privadas de todos los tamaños (39.7%) es superior a la gravitación de la informalidad sobre el empleo total, mientras la empresa mexicana sólo genera 28.7% de la ocupación global. Esta característica estructural determinará una oferta más restringida de oportunidades para los jóvenes mexicanos con menor nivel de escolaridad promedio, aunque los canales de incorporación a la economía informal pudieran ser más amplios y el acceso más fácil.

La segmentación del mercado laboral por efecto del tipo de destrezas y habilidades requeridas y las posibilidades efectivas de los trabajadores potenciales para realizar ese proceso de adaptación y calificación, es uno de los cambios estructurales de mayor impacto sobre el grupo de población seleccionado: los jóvenes de menores ingresos. De hecho, aunque entre los trabajadores de menor nivel educativo y calificación el salario real ha descendido más aceleradamente, no se percibe una mayor demanda de este tipo de trabajo o incorporación a la actividad laboral (Rendón y Salas, 2000). Esto se refleja sobre todo en la penalización que el mercado de trabajo realiza con los más jóvenes; es así como las tasas de desempleo juvenil en las áreas urbanas más que duplican las del promedio de la población activa en estas zonas (véase nuevamente el cuadro 13). En los casos en que se cuenta con información más desagregada por tramos de edades, como en México, es posible detectar la menor demanda laboral hacia los más

jóvenes (entre 12 y 19 años), lo que sugiere que los esfuerzos por completar la formación y capacitación pudieran ser vías adecuadas para sortear la situación de pobreza, o mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Entre los hechos sociales protagonizados por jóvenes de escasos recursos en el último tiempo, el conflicto estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde abril de 1999 hasta febrero de 2000, encabezado por los sectores estudiantiles de menores recursos, tenía entre sus objetivos principales preservar una matrícula prácticamente gratuita³⁴ para todos los estudiantes, en consideración a la función social y no sólo académica que esta casa de estudios cumple. La pertenencia a la institución y los procedimientos de selección e ingreso a la misma constituyen un mecanismo de calificación laboral y movilidad social que para algunos sectores de ingresos medios o bajos sería imposible de lograr y sostener, de no existir las condiciones de apertura indiscriminada y gratuidad que se mantienen.

El descenso de la participación de los jóvenes de 15 a 24 años en el mercado laboral de la subregión entre 1990 y 1997, como es el caso de México y Costa Rica, se debe principalmente a la disminución de la presencia de los jóvenes ubicados en los dos cuartiles de mayores ingresos, pero sobre todo de los que pertenecen al 25% de los hogares más ricos (véase el cuadro 14). Esta retracción probablemente corresponda al prolongamiento del período estudiantil, una situación de inactividad productiva, lo que resulta impracticable para los sectores más postergados y necesitados de ingresos. En todos los países para los que se registra esta información —México, Panamá, Costa Rica y Honduras—, las jóvenes pertenecientes al cuartil de más bajos ingresos y, por ende, mayoritariamente en situación de pobreza,³⁵ registran una tasa de participación en el mercado laboral por debajo del promedio urbano nacional para las jóvenes. Presumiblemente en este caso se verifica un proceso común a este sector social, de autoexclusión adelantada, debido a la percepción de falta real de oportunidades laborales.

En el transcurso de la década, en los países más vulnerables a las crisis externas y desastres naturales, como son México y Honduras, las jóvenes de escasos recursos han debido de aumentar su participación en el mercado. Esto reflejaría la reacción de las jóvenes pobres ante el deterioro de las condiciones económicas, estimuladas por el impulso de la maquila y la expansión de los servicios. En sociedades con predominio de población joven, menor de 24 años, las opciones de participación laboral para las mujeres aparecen con relativa mayor frecuencia y disponibilidad, sobre todo en sectores de baja productividad y comercio informal. Pese a que, en general, las percepciones de las mujeres son entre 43% y 22% menores que las de los varones, la diferencia para las jóvenes se reduce sustancialmente a rangos de 16% en México, 3% en El Salvador, 27% en Nicaragua y 18% en Panamá (CEPAL, 2000e).

Por lo general, el desempleo juvenil, con excepción de México, afecta en mayor medida a las mujeres y en particular al 50% de la población de menores ingresos, que exhiben tasas de desocupación por encima del promedio nacional prevaleciente para las jóvenes en cada país

³⁴ La cuota de inscripción o matrícula semestral es de 20 centavos de peso, equivalentes a 2 centavos de dólar estadounidense.

³⁵ De los cuatro países mencionados, sólo en Costa Rica el coeficiente de hogares urbanos en pobreza llegó a 17% en 1997, mientras que en México fue de 31%, y en Panamá y Honduras alcanzó entre 25% y 67%, por lo que la población del primer cuartil es seguramente pobre en estos últimos.

(véase el cuadro 15). En el caso de los jóvenes que pertenecen al cuartil de mayores ingresos, en casi todos los países, la tasa de desempleo abierto se reduce a menos de la mitad de la que corresponde al promedio por sexo. En todos los países del área durante 1997, la tasa de desocupación de los jóvenes de menores ingresos multiplica varias veces el coeficiente de desempleo de la juventud de mayores ingresos: en México se triplica para jóvenes de ambos sexos; en Panamá se duplica para los varones y se cuadruplica para las mujeres; en Costa Rica se quintuplica en los hombres y más que duplica para las mujeres; y en Honduras es 10 veces superior en los hombres y 20 veces en las mujeres. Esta tremenda disparidad no podría señalar solamente un problema de exceso de mano de obra; más bien, las características que acompañan indefectiblemente a la pobreza —como el bajo nivel de escolaridad y preparación general, escasa formación laboral, falta de experiencia y entrenamiento— deberían explicar, aunque fuera parcialmente este resultado. Nuevamente el problema de desempleo juvenil en los sectores de ingresos más deprimidos de estas sociedades, remite a la ineptitud de la fuerza laboral ante las necesidades efectivas de la demanda.

La inadecuada formación para el empleo resulta ser uno de los obstáculos más recurrentes para la contratación de nuevos empleados, en tanto hay también una fuerte resistencia de las generaciones mayores para ceder espacio y oportunidades a los más jóvenes. Los cambios formales ocurridos en el mercado laboral durante las últimas décadas parecen favorecer a las nuevas generaciones, más ágiles y mejor adaptadas a las innovaciones, en tanto los cambios referidos a la desregulación de los mercados y de las condiciones contractuales perjudican fuertemente la valorización de la fuerza de trabajo juvenil y las condiciones de estabilidad en el empleo y de las prestaciones a futuro. De manera que hay razones objetivas para un relativo desencanto ante la posibilidad de insertarse entre los demandantes de empleo por primera vez. Entre los jóvenes de mayores ingresos, esto se encubre por la prolongación de la dependencia económica del hogar de origen y la continuación indefinida de los estudios más allá de los 12 años de la enseñanza básica y media.

Para los jóvenes por debajo de la línea de pobreza, que en todos estos países incluye al primer cuartil de la población, las opciones están severamente restringidas, tanto en el plano institucional y del mercado laboral como en las propias familias. Cabe recordar que existe una proporción importante de estos hogares que estimulan la participación de los menores de edad y adolescentes en trabajos fuera de sus casas —como los empacadores de abarrotes en supermercados— o en tareas de apoyo a actividades propias de la misma familia en la economía informal —como el comercio ambulante—. Para los jóvenes con este tipo de experiencia anterior puede resultar más estimulante la inserción laboral temprana o la continuidad en los negocios familiares. También en este aspecto, la situación más extrema se presenta en los jóvenes marginales, que ante la evidencia de rechazo y segregación del mercado de trabajo, se sustraen de este ámbito anticipadamente.

Entre los problemas más señalados del empleo en la economía informal, por sus repercusiones en el conjunto de la sociedad, está la baja productividad que caracteriza a ese tipo de actividades, comparada con la eficiencia media de la economía. Prácticamente en todos los países de la subregión con datos disponibles, durante toda la década de los noventa el crecimiento de la ocupación se basó en un descenso de la productividad del trabajo, lo que señala el predominio de los empleos de baja calificación (OIT, 1999). El problema en general con el descenso de la productividad económica es que remite a una serie de ineficiencias que redundan

en una disminución del salario real, ya sea por menor percepción de ingresos, por extensión de la jornada de trabajo o por depreciación del valor del trabajo frente a los otros productos transables. De esta manera hay una aparente solución al problema de la desocupación, a través del subempleo de una parte de los que están sin trabajo, mientras se genera otro tipo de problemas sociales y económicos que remiten a la estratificación del mercado de trabajo.

En el caso de los jóvenes, se producen también distintas reacciones hacia las nuevas exigencias de capacitación y condiciones generales de contratación, según el sector de ingresos al que pertenezca el afectado. En los países que disponen de información, se puede ver que la mayor proporción de jóvenes que buscan empleo por primera vez pertenece al 25% de los hogares con menores ingresos (véase el cuadro 16); más de la tercera parte de la juventud panameña que ingresa al mercado laboral proviene de hogares pobres, proporción que aumenta a 44% en Costa Rica y a 42% en Honduras. Pese a que registra junto a la de Costa Rica los mejores niveles de escolaridad en la subregión, la juventud panameña es la que soporta mayores niveles de rechazo para emplearse por primera vez, con un desempleo que llega a 43%. Pudiera ser ésta una de las razones por las cuales sólo poco más de la cuarta parte de los jóvenes continúa estudiando entre los 15 y los 24 años; más allá de la oferta institucional, se impone el desencanto por la falta de correspondencia entre los años de estudios y las oportunidades reales de emplearse y mejorar así sus ingresos.

La estructura de oportunidades y la cultura de habilitación para afrontar el mercado laboral condicionan en buena medida la actitud que, como generación, se tenga frente a la educación y la búsqueda de una mayor formación. La proporción de jóvenes entre 20 y 24 años que, pese a no haber completado su educación media, tampoco continúa estudios, es superior a la mitad de la población de esa edad en algunos países de la subregión; en México, 55%; en Nicaragua, 50%, y en Honduras, 59%. Aunque el porcentaje de esos jóvenes que con menos de 10 años de instrucción no continúa estudios es menor en El Salvador (43%) y también en Costa Rica (41%), sólo en Panamá alcanza un nivel inferior al 30%, si bien en los varones está un poco por encima (véase el cuadro 17). Nuevamente, esto podría indicar, para los países con más altos coeficientes de deserción educacional, que la oferta institucional no se ajusta a la demanda o que faltan estímulos para la inversión personal en educación, lo que de cualquier modo indica la existencia de un rezago importante en la preparación y capacitación laboral, que necesariamente condiciona la calidad de los empleos a los que se puede aspirar y afecta a la productividad general y a las expectativas de trabajo.

En países como Panamá, cuya fuerza de trabajo juvenil registra el promedio de años de estudio más alto de la subregión (10 años), se percibe que el desempleo para los jóvenes con ocho o más años de estudio es también el más elevado, situación que se disipa para los jóvenes con 12 o más años de estudio (véase el cuadro 18). De igual manera, en los países restantes —cuya fuerza laboral juvenil tiene entre siete y medio y casi nueve años de escolaridad—, el riesgo de desempleo para los que tienen 12 y más años de estudio es menor. Por consiguiente, la aptitud de la fuerza de trabajo está también relacionada con el nivel general de educación, de preferencia del grupo etario que constituye la competencia efectiva en el mercado laboral. Por lo mismo, la situación de vulnerabilidad de los jóvenes es directamente proporcional a la edad de abandono del sistema escolar y al tiempo en que permanezcan marginados, sin integrarse a la sociedad.

Por último, la estructura productiva del país condiciona en buena parte el nivel de calificación y escolaridad de la futura mano de obra. Por ejemplo, la economía panameña, cuyo núcleo de actividad se estructura en torno a los servicios formales, financieros y comerciales, proporcionó empleo en ese sector a poco más del 70% de los jóvenes en 1997. En los otros países, aunque en menor medida, también el sector de comercio y servicios registró, por sí solo, la mayor cantidad de puestos de trabajo para la juventud: 59% en 1996 en México, y 62% y 48% en Costa Rica y Honduras, respectivamente, en 1997 (véase el cuadro 19). Se requeriría información más desagregada para especificar el origen de la demanda laboral en este sector de servicios que resulta ser el más dinámico en términos de empleo, porque en países donde el peso del sector informal, como en México (50%) y en Honduras (58%) es superior al de Panamá (39%) y Costa Rica (45%), los trabajadores independientes o por cuenta propia representaron 25% y 37%, respectivamente del empleo urbano de 1998. Es encomiable el papel de agente empleador y civilizador que realiza el gobierno a través de la función pública, que tanto en México como Panamá genera casi 22% del empleo global en zonas urbanas (OIT, 1999). Es éste uno de los sectores donde la mayor demanda de empleo juvenil se orienta hacia el personal femenino. Con excepción de la agricultura y la minería, que en todos los países parece haber disminuido la captación de jóvenes empleados en zonas urbanas, los demás sectores —como manufactura, construcción y comunicaciones— han evolucionado en conjunto generando una mayor proporción de empleo para la juventud. No deja de ser esperanzador que los sectores tradicionales de la economía, algunos de ellos mejor adaptados tecnológicamente, sigan siendo importantes proveedores de ocupación.

2. Insuficiencia de recursos públicos para programas para la juventud

El efecto de una alta proporción de juventud desempleada y sin opciones para reincorporarse al ámbito estudiantil debería generar acciones o programas de inserción social por parte de cualquier gobierno interesado en mantener un desarrollo social equilibrado. Los desajustes de los mercados de trabajo que se mencionaron más arriba merecen acciones dirigidas hacia los grupos de mayor vulnerabilidad, en este caso los jóvenes marginales, que están en situación de calle o que pertenecen a los hogares más pobres en cada país. Sin embargo, no se les ha concedido la importancia que requieren como uno de los sectores de población más vulnerados a raíz de los cambios y fenómenos socioeconómicos ocurridos en los últimos dos decenios.

Es éste un sector que se encuentra a la deriva en términos sociales, culturales y económicos y, por el solo hecho de existir, ocasiona presiones sobre el presupuesto gubernamental, en formas que abarcan desde los programas emergentes de capacitación para la reinserción de desempleados hasta los programas de salud para rehabilitación de fármaco-dependientes y drogadictos. La eficacia del gasto que actualmente se realiza depende en gran medida de la evolución hacia programas preventivos de habilitación social, inserción laboral y contra las adicciones, pero ante todo, del reconocimiento del origen múltiple del fenómeno, en gran medida atribuible a la descomposición social y a la descomposición familiar.

En las páginas anteriores se ha mencionado el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes de familias de escasos recursos, sometidos a frustraciones, situaciones de violencia continua y falta de oportunidades, que los inducen a una mayor marginalidad y asociación con los que se encuentran en las mismas condiciones y situación. Es fácil presuponer

el riesgo y la presión a los que se encuentran sometidos estos jóvenes para incorporarse a bandas y grupos delictivos con un grado de organización y operatividad que los involucra en la criminalidad. Tanto es así que en un reciente estudio sobre la violencia en la región latinoamericana (Arriagada y Hopenhayn, 2000) se reconoce que existe "...un sesgo policial incriminatorio hacia los jóvenes". De hecho, más que de una presunción comprobada, se trata de la anticipación de riesgos que, con una alta probabilidad, existen en este sector de la juventud. Sin embargo, es también una forma ya frecuente de deslindar una responsabilidad colectiva, llevándola al terreno de las opciones y decisiones individuales, como si la situación de conflicto social o de crisis económica resultara del comportamiento personal.

En la situación de la juventud marginada de El Salvador, extensamente estudiada y diagnosticada en razón de la violencia social imperante en esa nación, se han logrado distinguir cuatro tipos de jóvenes que alimentan las bandas urbanas de delincuentes (Umaña, 1998): a) los deportados por delitos cometidos en los Estados Unidos; b) los desmovilizados de la guerra, después de los acuerdos de paz (1992); c) los mareros, que proceden de deportaciones estadounidenses, pero encarnan una respuesta adaptativa para la supervivencia como excluidos, y d) los niños y adolescentes de la calle, producto de la desintegración familiar y la rápida urbanización de la capital. De hecho, estos cuatro grupos identificados como la zaga del conflicto bélico, que se prolongó más de una década desde 1979, se caracterizan por ser grupos excluidos de la sociedad. Para ellos no hay programas de seguimiento, para controlar y apoyar sus opciones de reinserción social; incluso, los proyectos de apoyo a los desmovilizados por el fin de la guerra fueron abandonados poco después de que se determinó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en 1996. Actualmente, según la Policía Nacional Civil, y de acuerdo con su propia información estadística, la mayor parte de los jóvenes involucrados en bandas delictivas son precisamente los desmovilizados de la guerra.

También en Nicaragua, un sector de lo que hoy constituye la juventud padeció directamente los efectos de la guerra interna, a través de los desplazamientos, la participación de sus familiares y posiblemente la orfandad. Son grupos de jóvenes para los cuales el escaso dinamismo económico y la discontinuidad de la recuperación no ofrecen posibilidades de reinserción social productiva y con dignidad. Por lo demás, como son jóvenes que, al igual que muchos de sus pares salvadoreños, han crecido y se han formado en un entorno marcado por la violencia y las posibilidades de sobrevivir gracias al ejercicio de la misma, están habituados al uso de las armas y conocen sus redes de abastecimiento. Tal vez sea ésta la peor herencia de la guerra, la familiaridad con los métodos violentos para dirimir los conflictos y los abusos en el uso de la fuerza contra las personas. Aunque estas características no son privativas de las sociedades que han padecido conflictos bélicos abiertos, representan un factor de inseguridad y una propensión mayor a la violencia para el conjunto de la población.

En virtud de la situación creada, los gobiernos de El Salvador y Nicaragua se han visto obligados a destinar atención primordial y financiar procesos de reforma legal a los códigos civiles que regulan las responsabilidades penales de los adolescentes. Además, en ambos países, las policías nacionales respectivas han debido establecer programas específicos para procurar la reinserción, o al menos el control social, de los jóvenes de la calle en su condición de delincuentes potenciales. Las repercusiones de estos programas están limitadas a un radio de acción pequeño y con carácter aún experimental, por lo que resulta prematuro evaluar sus resultados, si bien tiene un efecto estimulante entre los policías con más educación, ya que

reconocen la capacidad de demostración o persuasión que tienen, no sólo entre los jóvenes excluidos, sino también entre los potencialmente marginables, que en estas sociedades abundan.

a) Sobrecarga de los gastos de salud y asistencia públicas

En virtud de los distintos foros internacionales surgidos para velar por los acuerdos de lucha contra la pobreza, por el desarrollo con equidad de todos los sectores y las personas de ambos sexos, y por proteger a los menores de edad y otros, los gobiernos de la región han establecido compromisos y mecanismos de seguimiento del estado de los mismos. Por ello han mantenido programas de recuperación de adictos, de formación de monitores en áreas de salud reproductiva y contra las adicciones, mientras se realizan campañas informativas y preventivas sobre la violencia intrafamiliar y el contagio del VIH-SIDA. De esta manera se han abierto nuevos campos de acción gubernamental, sobre todo en el área de salud pública, para atender a jóvenes en situación de riesgo.

Sin embargo, en el área de la asistencia pública, los programas de reinserción social para jóvenes marginados son escasos; incluso en los países en que el ministerio de salud tiene programas de formación de líderes juveniles y elevación de la autoestima, como en El Salvador, el impacto es limitado, pese a los buenos resultados del programa que existe desde hace más de dos décadas. También el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) mantienen diferentes programas de capacitación laboral, integración social de jóvenes en situación de calle y trabajo contra adicciones desde las coaliciones juveniles, cuya eficacia es limitada. Entre los problemas, se detecta un radio de acción limitado y el hecho de que los recursos no llegan precisamente a los sectores más afectados, por defectos burocráticos o inhabilitación de los jóvenes para aprovecharlos.

Los CIJ y el Fideicomiso para Niños de la Calle contra las Adicciones (FINCA) en México, ambas instituciones de asistencia pública, mantienen un nivel de atención notable hacia los sectores más vulnerables, y dentro de éstos a los niños y adolescentes drogadictos que viven en la calle. Ambas instituciones se enfocan a un trabajo más integral de recuperación a través del grupo familiar y la recomposición de su situación económica y psicológica. Sin embargo, su labor resulta insuficiente ante la magnitud del problema, por lo que buena parte de la acción de recuperación y asistencia a los jóvenes y niños ha de derivarse hacia organizaciones privadas y religiosas.

b) Depreciación del capital social del país

Si se atiende a la población de jóvenes que no estudian ni trabajan, en algunos países la proporción ha mejorado relativamente en los últimos años, como es el caso de Panamá, Costa Rica y Honduras. Sin embargo, en casi todos sobrepasa el 20% de la población urbana entre 15 y 24 años. Si se atiende al sexo de los afectados, las mujeres que no estudian ni trabajan representan una proporción mucho mayor que los varones en igual condición (véase el cuadro 20). En función del desarrollo social y educativo de los países, sería conveniente incentivar la continuación de estudios de la población femenina. Todos los estudios sociales realizados en la región demuestran que a un nivel promedio más alto de educación de las mujeres corresponde un

mayor control de las variables sociales, como fecundidad y condiciones de salud, a la vez que se fortalecen las condiciones económicas de la integración familiar. En países que no otorgan una atención continua o primordial a los asuntos educativos, la proporción de jóvenes inactivas afecta a cerca de la tercera parte de la juventud femenina, como es el caso de México, en que llega al 35%.

La situación de inactividad de las mujeres jóvenes trae aparejada un conjunto de factores condicionantes que están directamente relacionados con la reproducción de la pobreza y la profundización de la situación de marginación en que se encuentran las más pobres. Por una parte, el abandono de los estudios en sí mismo remite a una situación de mayor vulnerabilidad, dado que la escolaridad exigida a las mujeres para cualquier empleo similar al de los varones es en promedio de dos años más; así que de partida se configura una situación de menor retribución ante cualquier posibilidad de empleo. Por otra parte, cada año de permanencia en el ámbito estudiantil retrasa en dos años la edad de comienzo de la fertilidad, por lo que se considera como una medida estratégica para controlar la reproducción de la pobreza.

Para los varones jóvenes de la subregión, la inactividad abarca entre el 10% y 15% de la población. El porcentaje más alto se registra en Nicaragua, con 17% de hombres jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta situación es grave por cuanto la función como proveedores de ingresos, ya sea potencial o actual, es primordial para los varones, no sólo por la efectividad material sino también desde la perspectiva de la validación social y la autoestima, y aún más importante en los sectores marginados. Esta condición de exclusión laboral y educativa genera situaciones que están relacionadas con el malestar que provoca la marginación y son la antesala de la segregación social. Precisamente una de las labores más difíciles pero absolutamente necesarias para la restitución de un entorno adecuado y una vida con sentido y perspectivas dignas consiste en crear un espacio continuo de producción laboral y de recuperación escolar o educativa. Ambas son complementarias y constituyen un soporte duradero en las experiencias de recuperación de jóvenes pandilleros (véase nuevamente el recuadro 1).

La mayor importancia de estas actividades —estudio y trabajo— cobra su verdadera dimensión en función del carácter constructivo que representan para cualquier vida, pero sobre todo en función de la participación al interior de cualquier grupo, sea éste la familia, el grupo de estudiantes o la sección laboral. El entorno y la forma de inclusión social se ven inmediatamente modificadas en un sentido positivo a partir de la realización de cualquiera de estas dos actividades. Por ello no es exagerado considerar que para la juventud que está marginada de estas actividades, se verifica un proceso de depreciación de sí mismos, del entorno familiar y social que acompaña esta exclusión, y también de lo que se considera el capital social del país. La articulación de un conjunto de recursos culturales y humanos que, en otras condiciones, determinan la forma de estructurar colectivamente una estrategia de subsistencia, en los jóvenes marginados se encuentra fragmentada. Así, la restricción de accesos a la juventud y la falta de oportunidades para ejercer o mejorar sus capacidades, representa una forma de desvalorización y pérdida del capital social del país, o al menos de una parte del mismo que se reproduce cada vez más pobre y marginado, a menos que opte por integrarse a las redes de la delincuencia organizada, lo que en términos de riesgo social adopta la forma de una amenaza cumplida.

V. ALCANCE DE LAS INSTITUCIONES VIGENTES PARA LA JUVENTUD MARGINADA

Las instituciones que tradicionalmente se ocupan de los grupos de jóvenes marginados tienen por lo general una apreciación que podría considerarse “de frontera” o de última instancia, en el sentido de que prestan asistencia y atención a la juventud en situaciones críticas, mas no a la población en condiciones regulares o integradas socialmente. De esta manera, las circunstancias en que vive y se reproduce la juventud marginada no constituyen objeto de atención o tratamiento preventivo. Así, las acciones emprendidas en coyunturas más graves que las habituales revisten un carácter asistencial y perentorio.

En consideración a que los jóvenes marginados constituyen no sólo una respuesta de supervivencia material, como grupo excluido de las instancias formales, sino también una forma de construir una identidad cultural como generación específica y segregada, han surgido programas y proyectos de atención que tomen en cuenta de manera integral la situación de vida que enfrentan estos jóvenes. En el área de acción de las organizaciones de desarrollo mundial y regional —como las agencias del Sistema de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, así como los organismos no gubernamentales, ha prosperado cada vez más la idea de una perspectiva de conjunto para atender los problemas de la juventud, sobre todo en las áreas marginadas.

Por otra parte, desde principios de la década de los noventa se ha avanzado activamente en la suscripción de normas y la adecuación de la legislación interna de cada país a las reglas internacionales relacionadas con las regulaciones y protecciones establecidas para los menores y los adolescentes. Así, todos los países del área han adherido y ratificado, principalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); algunos han tomado en cuenta para sus formulaciones las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de Riad), lo que ha permitido una actualización más coherente de la legislación para adolescentes (Krauskopf y Preinfalk, 2000).

Tipo de instituciones y políticas de atención a la juventud marginada

Las instituciones de atención a la juventud marginada pertenecen tanto al ámbito gubernamental como al de la sociedad civil. El nivel de las instancias en que se manifiestan las políticas públicas hacia la juventud, y en particular a los más afectados por la pobreza o la marginación, depende directamente de la importancia que el gobierno asigne a las políticas sociales de combate contra la pobreza y a la integración social de los grupos vulnerables al desarrollo del país. Con las instituciones de carácter privado, la definición más importante se presenta en términos de la población objetivo que establezcan los programas, y lo que se señale como causa o factores de origen del problema. Generalmente, en las instituciones privadas se trata de reformar o reintegrar el entorno familiar, mientras se intenta restituir la salud física y el equilibrio emocional de las personas asistidas. Aunque en los dos tipos de institución se reconoce la importancia del núcleo

familiar y sus condiciones de vida, son radicalmente distintos el enfoque, el radio de acción y la metodología de trabajo, que en ocasiones tienden a complementarse para mayor efectividad.

Una de las primeras constataciones acerca de los organismos gubernamentales que atienden o formulan programas para jóvenes es que se encuentran vinculados a instituciones de salud pública o promotoras de la familia. En este sentido, se considera que la juventud es un grupo de edad en una situación transitoria cuya vulnerabilidad es de tipo circunstancial, derivada de la fase de desarrollo por la que atraviesa, de las circunstancias que la rodean y de las capacidades que pueda o no incorporar en esta etapa de crecimiento hacia el ser adulto. Por lo mismo, la mayoría de los programas se orientan a la reinserción de los jóvenes marginados en el entorno familiar y comunitario, con la premisa de que se habría verificado una desviación de la conducta por efecto de múltiples factores psicológicos que no cooperan para la aceptación del entorno y de los objetivos socialmente estipulados para esa etapa de vida. En la mayor parte de los programas públicos enfocados a la juventud marginada, el énfasis recae en la salud y las condiciones que aseguren la supervivencia personal y del grupo.

Como apreciación muy general, se puede anticipar que tanto en las instituciones públicas como en las organizaciones no gubernamentales son escasos y específicos los programas de cualquier tipo —incluso de capacitación laboral— enunciados para mayores de 21 años. Si para la formulación de estudios sobre juventud, o propuestas de encuentros, debates e intercambios políticos y culturales, se considera a los jóvenes incluso hasta la edad de 29 años, no sucede lo mismo con aquellos jóvenes que se encuentran en una situación de segregación social. Los marginados son catalogados como adultos, sin posibilidad de acogerse a programas estipulados desde la perspectiva de jóvenes en transición hacia ese estado, desde que alcanzan la mayoría de edad legal (21 años).

a) Enfoque general de las instituciones para juventud vulnerable o en riesgo

Existen pocas instituciones de gobierno que identifiquen al sector de juventud marginada como su objetivo central. Sí es común que existan dependencias, a veces de nivel ministerial o adscritas a algún ministerio que, desde una propuesta de atención integral a la juventud, impulsan programas de salud, de educación y capacitación, de formación y liderazgo, de derecho jurídico, de empresas juveniles y otros, que se realizan en coordinación con otras dependencias gubernamentales, pero cada una en su área respectiva. En realidad, la situación de marginación se entiende como una excepción, y en todos los programas generales hay proyectos que se orientan a la “población de alto riesgo”, que es como se identifica a los jóvenes marginados. Los programas públicos se encargan de atender diferentes aspectos de la marginación —infecciones venéreas y VIH-SIDA, embarazo precoz, adicción a drogas, educación sexual, capacitación laboral, recuperación psicológica, asistencia legal, entre otros—, mas difícilmente abordan la condición de marginación como una situación estructurada a distintos niveles y que constituye un sistema de vida para quienes están en ella.

Sólo más recientemente, y en parte por el avance realizado en términos de la legislación para protección de los niños y los adolescentes en función de sus derechos humanos, algunos gobiernos han comenzado a concebir la situación de los jóvenes marginados como un derivado de la situación de pobreza, la violencia social y la desintegración familiar. A partir de un

reconocimiento del fenómeno como resultado de los cambios y convulsiones registrados en todo el sistema económico y social, se han ideado e impulsado proyectos piloto con un sentido más integral, y algunas veces situados en los lugares en que viven y operan estos grupos marginales.

También las instituciones privadas de la sociedad civil, de carácter religioso o caritativo, que participan en actividades de apoyo a la recuperación física y emocional, así como a la reinserción social de los jóvenes —estableciendo muchas veces la adolescencia como límite de edad (12 a 18 años)—, trabajan con parámetros de atención en situaciones extremas. En esta concepción de la juventud marginada subyace la idea de la vulnerabilidad en función de sus limitaciones para lograr independencia relativa de los adultos, acceso a los medios para forjarse un futuro llevadero y aceptación de las condiciones regulares de vida y competencia que la sociedad les asigna. Estas instituciones realizan su labor con objetivos poco ambiciosos en función de su impacto sobre el entorno social más amplio, ya que se plantean sobre todo recuperar casos, con un efecto demostrativo sobre el conjunto. Sin embargo, cada vez más asiduamente participan organizaciones no gubernamentales, con fondos de la cooperación externa, que impulsan o privilegian la colaboración con programas que buscan incidir en las pautas culturales y transformar el entorno de violencia y escasez de recursos que caracteriza a la población marginada.

Por otra parte, los organismos multilaterales han comenzado a plantearse la necesidad de aportar fondos más directamente para “programas de servicios sociales y de prevención para menores en riesgo y adolescentes que viven en las calles” (BID, 1999) y ya no sólo en la línea tradicional, acorde a las áreas de atención de los gobiernos. En este planteamiento se reconoce la necesidad de desarrollar el capital humano y social de los jóvenes, y que esto no sólo requiere educación de calidad, sino también participación de los jóvenes en la formulación de los proyectos, personales y comunitarios, así como un énfasis en la prevención de las situaciones de riesgo. La Primera Conferencia Mundial de Ministros de Responsables de la Juventud, auspiciada en Portugal (1998) por el Sistema de las Naciones Unidas, tuvo una función catalizadora, ya que a los compromisos de los gobiernos en el sentido de fortalecer las políticas hacia la juventud se agregó el acuerdo de promover una mayor participación juvenil en todos los ámbitos de la vida política, y de manera excepcional, se acordó comenzar a tratar el uso de drogas y estupefacientes. Tal vez la mayor novedad provenga del hecho de reconocer oficialmente la necesidad de elaborar programas integrales de asistencia a la juventud más afectada por la pobreza, los que deberían elaborarse desde las propias organizaciones juveniles.

El renovado interés de los mismos gobiernos por conocer las condiciones en que se encuentra y vive la juventud, así como sus aspiraciones, obstáculos, carencias, valores y necesidades, ha estimulado la elaboración de encuestas nacionales dirigidas exclusivamente a este grupo de población. En Nicaragua, una consultoría (Borge y Asociados) realizó por primera vez en 1998 la *Encuesta Nacional sobre la Adolescencia y la Juventud* que ha llenado un gran vacío respecto del conocimiento de las circunstancias en que se desenvuelve la juventud nicaragüense, y también ha permitido conocer “...los imaginarios de los jóvenes, descubrir y analizar su percepción del mundo, y sus actitudes frente a las distintas temáticas” (Agudelo, 1999). También en México, durante agosto de 2000, el IMJUVE levantó por primera vez la

Encuesta Nacional de la Juventud. ³⁶ A principios del año 2000, apareció la selección realizada por el Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud del mismo organismo, que da cuenta del estado del conocimiento sobre la juventud mexicana entre 1986 y 1999. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México —de orientación ideológica distinta al gobierno de la República— había iniciado en colaboración con el DIF, tres años antes, una serie de estudios, basados en entrevistas directas de los afectados, sobre la condición de los niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades, incluida la capital del país. Todos estos esfuerzos ilustran la voluntad de lograr una mejor aproximación al problema, y una formulación más adecuada y efectiva de los programas para jóvenes segregados o en la pobreza.

Por diversas manifestaciones, se percibe una evolución de parte de las autoridades gubernamentales, en la segunda mitad de los noventa, para abordar el problema de la marginación juvenil como un asunto más integral y a partir del entorno mismo en que se genera. En el área centroamericana prevalece una gran preocupación por la irrupción, cada vez más frecuente, de la violencia en distintas manifestaciones y espacios de la vida civil, percibida como un receptáculo de la juventud disconforme —llamada “antisocial”— y como antesala de su incorporación a redes de crimen organizado. De esta manera, en El Salvador y Nicaragua se puede apreciar una mayor integración del tema de los adolescentes en situación irregular o de riesgo al debate de la política social y su vinculación con las nuevas formas de violencia civil.

En El Salvador, la Secretaría Nacional de la Familia (SNF) y en Nicaragua, el Ministerio de la Familia y la Secretaría de Acción Social, operan como entidades de coordinación del trabajo realizado por los distintos institutos y comisiones (Instituto de Protección al Menor (ISPM) y de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), y la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña, respectivamente en cada país). Cada vez más estas instancias han comenzado a trabajar coordinadamente con organizaciones de la sociedad civil, y a incorporar proyectos de salud sexual, género y violencia, y derechos humanos (poco más del 70% de los proyectos salvadoreños) dentro de los cuales la preocupación por los derechos de las jóvenes adolescentes, las opciones ante el embarazo precoz y la prevención de la prostitución juvenil, son cada vez más importantes. También en Panamá, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, aunque identifica un problema relevante en los focos marginales de juventud de las zonas periféricas a la ciudad capital y en la zona de Colón, ha identificado como principal problema de los jóvenes la falta de programas de retención escolar, de oportunidades adecuadas de capacitación laboral e inserción laboral, por lo que sus proyectos se orientan hacia el área de formación para el trabajo y establecimiento de centros juveniles para reunión e intercambio de los mismos jóvenes.

El cambio de enfoque, que progresivamente va ganando adeptos entre los funcionarios comprometidos con el trabajo junto a los grupos de jóvenes marginados, constituye un avance sustantivo por cuanto abre más espacios para la interacción y una perspectiva más humana en el tratamiento de los múltiples problemas que derivan de la marginación. En cuanto a la

³⁶ Este proyecto se realizó bajo la coordinación del Director de Estudios del IMJUVE, Sr. José Antonio Pérez Islas, y con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para lo cual se programó levantar la encuesta en 54 000 hogares. La encuesta cuenta con cuatro módulos: 1) la transición de la educación al empleo; 2) la transición a la familia propia; 3) la vinculación con la sociedad civil y la formación de redes, y 4) los problemas de salud y adicciones.

recuperación de la autoestima y de la confianza en una vida más digna, con este enfoque más integral los jóvenes pueden constatar que existe un espacio para ellos y que lo pueden mantener con una participación activa de varones y mujeres, en las opiniones y decisiones que les afectan. Este proceso, realizado desde los espacios del sector de juventud más estigmatizado y rechazado, tiene también el valor de recuperar canales de comunicación, acción conjunta y entendimiento con la comunidad en la cual conviven los jóvenes, lo que contribuye a crear un mejor clima de reinserción social.

b) Políticas de reinserción en un medio de vida legal y digno

Las políticas de reinserción pueden distinguirse en función de los medios que se consideren centrales en el proceso de reintegración social, y que pueden ser la familia, la escuela o el trabajo. En el caso de los jóvenes marginados, la única forma de realizar una integración duradera al medio es a través de la percepción de ingresos propios o la reincorporación a una familia, que permita un consumo por encima de lo que se considera de subsistencia, y acceso a medios de superación y desarrollo personal. En este sentido, se requieren estímulos afectivos, de formación personal, de reconocimiento social y materiales, para sostener una recuperación continua de los jóvenes en una perspectiva integral. Y aunque la iniciativa de particulares y asociaciones civiles en esta tarea pueda resultar ejemplar, su ámbito de acción y el proceso lento de aprendizaje a partir de la experiencia diversificada pueden aminorar el impacto social de los proyectos. Tanto en su concepción como en su ejecución, los programas deberían asumir un enfoque integral y un alcance universal dada la magnitud del problema.

De acuerdo con la evolución económica e institucional de los países y según las características culturales de la región, la familia sigue siendo uno de los entornos fundamentales para la readaptación social de la juventud. De ahí que la mayoría de las políticas enunciadas para los jóvenes estén estrechamente asociadas a directrices generales que existen para promover el desarrollo de las familias, así como para impulsar medidas específicas de combate a la pobreza. Tanto la edad de los jóvenes beneficiarios de las políticas —en gran parte enunciadas para menores de edad³⁷— como el insuficiente desarrollo de las bases legales y materiales, propicia que la mayoría de las políticas estén orientadas a favorecer la reinserción familiar del joven marginado. Este proceso, casi siempre se acompaña de apoyo psicológico y tratamiento para abatir la fármaco-dependencia, aunque pocas veces está vinculado a la capacitación para reinserción en el mercado laboral, y a oportunidades reales de participar en el mercado de trabajo. Esto otorga un rasgo de gran vulnerabilidad a las políticas de reinserción que no llegan a ser integrales a causa de estos desajustes e insuficiencias, que dejan a un lado un aspecto tan importante como la necesidad de sustento e independencia económica de los jóvenes.

De hecho, la reinserción en la escuela formal es casi imposible para los jóvenes que han desertado y que en su mayoría ya han repetido algún grado básico. En el marco de los programas y recursos oficiales, la oferta educativa trata de orientar a los jóvenes hacia la educación para el trabajo y la capacitación laboral de acuerdo con los antecedentes escolares y la proyección del necesitado. De todas maneras, si esta etapa no está apoyada en la reinserción familiar o en un

³⁷ Los países considerados en este estudio establecen legalmente la mayoría de edad en términos de responsabilidad política a los 18 años, y de responsabilidad total como adultos a los 21 años.

vínculo fuerte con la integración a tareas productivas, de manera que el joven cuente con un ingreso regular y estable o pueda formar su propia familia, difícilmente podría pensarse en una reinserción satisfactoria. Existe todavía una gran debilidad de las propuestas en el vínculo entre la formación para la vida como restitución de un sistema de valores y la conclusión de la educación básica para lograr una capacitación laboral que sea funcional. Pero también la debilidad de los encadenamientos hacia la ubicación laboral tienen que ver hoy en día con la calidad deficiente y la falta de adecuación del entrenamiento y preparación que ofrecen los programas públicos, lo que no hace más que reforzar la desesperanza de los jóvenes.

En las políticas hacia la juventud se refleja de un modo patente que la noción de integridad de los programas de reinserción no está suficientemente desarrollada en nuestro medio. Por una parte, la vinculación y concatenación entre las distintas características que reviste la población marginada no se considera en la dimensión de un sistema de supervivencia, de protección, de identificación que, si se va a sustituir por otro, debería ofrecer una propuesta más completa, por encima de medidas aisladas o esporádicas. Por otra parte, no hay una concertación efectiva entre las instituciones públicas y las entidades privadas para afianzar la vinculación entre educación de calidad e inserción productiva. Tampoco subyace en los programas públicos que la juventud es una etapa de definición social muy importante en la vida de cualquier persona y que en este caso se trata de hacer efectivas las oportunidades de proyectarse como adultos para jóvenes tradicionalmente excluidos. Para alcanzar sus objetivos, las políticas actuales dependen en gran parte de la inserción familiar que alcancen los jóvenes. La fragilidad de los logros obtenidos con estos programas es evidente, debido, entre otros factores, a la misma vulnerabilidad de las familias en situación de pobreza a la que generalmente pertenecen estos jóvenes.

En cuanto al foco de la reinserción, es notorio que la mayoría de los proyectos se articulan con acciones de recuperación o atención médica en situaciones límite como es el caso de los jóvenes drogadictos o aquéllos que se han infectado por contacto sexual y que solicitan atención médica y apoyos psicológicos. Sin embargo, los programas no avanzan desde ese punto hacia una comprensión o contención del problema de la marginación en los jóvenes. Como no se logra una mayor integración de políticas en aspectos diversificados, se inducen las condiciones de una pronta reincidencia. Por ejemplo en México, el FINCA reconoce que sólo alcanza un 10% de recuperación³⁸ entre la población de niños (de 6 a 18 años) y jóvenes (de 12 a 30 años), los que después del régimen de internación regresan a sus casas bajo la supervisión de psicoterapeutas familiares. En este caso, se espera que a partir de una recuperación de la autoestima, después de un proceso de desintoxicación y acercamiento a la familia, los jóvenes sean capaces por sí solos de retomar sus actividades previas —escuela o trabajo— y reincorporarse a la vida habitual.

Otro caso en que las políticas públicas no han alcanzado un grado superior de eficacia, pese a que el tratamiento es de consulta externa e involucra la coordinación de varias entidades relacionadas con el tema de las adicciones y la desintegración familiar, son los CIJ, también de México. Incluso se reconoce que en esta última institución las familias que acuden a solicitar ayuda tienen un nivel de conocimiento, información y disposición de apoyo superior en todos los aspectos al de los jóvenes marginados. Por otra parte, desde el IMJUVE —la dependencia estatal mexicana para los asuntos de juventud— se articula una oferta de programas que desde el mismo

³⁸ Según estimación del Director General del FINCA, en entrevista realizada en julio de 2000.

Instituto, o coordinado con algunas direcciones de la Secretaría del Trabajo, ofrecen bolsa de trabajo, proyectos de capacitación y créditos microempresariales para jóvenes que acuden a solicitarlo, con lo cual se sitúan en un nivel accesible a sectores que están por encima de la marginación. En convenio con organizaciones civiles, el IMJUVE impulsa trabajo comunitario enfocado a la educación y formación en asuntos de liderazgo y de derechos humanos, además del trabajo que realizan específicamente con jóvenes marginados, en información sobre adicciones, embarazo de adolescentes y capacitación en oficios tradicionales. Sin embargo, se puede inferir que parte de las limitaciones en el alcance de este trabajo deriva de que se consideran algunos aspectos de la marginación de los jóvenes, pero no se contempla la necesidad de la reinserción económica como un asunto central de la autonomía individual y de la capacidad de responsabilidad social de todo ser adulto.

Uno de los proyectos más difundido del gobierno mexicano es el de “Las Comunas” o “Misiones locales” aplicado por el gobierno francés en las municipalidades desde 1982, y que actualmente forma parte de la estructura social francesa. Este programa fue impulsado como respuesta al creciente desempleo que impuso el nuevo desarrollo tecnológico entre los sectores con menores recursos; se trató de emplear a jóvenes menores de 25 años en nuevas ocupaciones según las características de las comunidades donde se establecieron, dándoles la oportunidad de reorientar sus vidas y quehaceres de acuerdo con sus aptitudes y destrezas. Con un coeficiente de 20% de rechazo o imposibilidad de conseguir la reinserción social, este proyecto ha resultado tan exitoso que, en 1997, fue aprobado en la Asamblea francesa el programa basado en esta experiencia, denominado “Nuevos Empleos, Nuevos Servicios”, cuyo objetivo es otorgar empleo a 350 000 jóvenes.

El gobierno de la Ciudad de México, a través del proyecto mencionado de “Las Comunas”, que se impulsa en las delegaciones Iztapalapa —donde existe un fuerte componente de juventud marginada y violencia callejera— y Miguel Hidalgo —con mejor nivel socioeconómico y menor propensión a la violencia—, intenta cubrir la deficiencia de los programas anteriores hacia este sector de juventud. Se trata de ofrecer alternativas de formación y vinculación para jóvenes desempleados que quieran insertarse en la actividad productiva o creativa y proporcionarse medios de vida independiente. El programa, a través de profesionistas voluntarios o comisionados, otorga atención personalizada a jóvenes que acuden a los módulos de empleo en las delegaciones mencionadas. Este programa está dirigido específicamente a jóvenes que han abandonado los estudios y que buscan emplearse de forma productiva o encontrar algún medio lícito para obtener ingresos regulares; algunas veces se evalúa la posibilidad de otorgar asesoría y seguimiento en opciones de autoempleo.

El nivel actual de intermediación con las empresas que pudieran capacitar y emplear a jóvenes con antecedentes de adicciones y comportamiento antisocial no es prometedor, ya que las mismas empresas carecen de programas de formación laboral y tampoco están en disposición de establecer convenios con el gobierno de la Ciudad de México, además de que se da una desconfianza mutua entre los empresarios y los jóvenes marginados. Por todo ello, el proyecto de “Las Comunas”, que arrancó a principios de 1999, debe considerarse de maduración lenta debido al consenso y la cooperación social que requiere para funcionar.

c) Experiencias positivas de reinserción social de jóvenes marginados

La mayor parte de las experiencias exitosas se encuentran atomizadas, ya que su esfera de influencia y propagación es limitada, como ocurre con las acciones impulsadas por iniciativas particulares u organizaciones no gubernamentales, vinculadas a órdenes religiosas o de cooperación externa, con presupuesto limitado y personal reducido. Quizá el modelo de reinserción más exitoso sea el que procura reproducir condiciones comunitarias y, hasta cierto punto, familiares de convivencia, mientras se reafirma la individualidad de cada persona y el desarrollo de sus capacidades para desempeñarse en condiciones normales de trabajo, de estudio y de esparcimiento. Una experiencia ejemplar en este sentido es la realizada en el polígono industrial “Don Bosco” de San Salvador (véase de nuevo el recuadro 1), tanto por la situación de riesgo y conducta extremos en que se encuentran los jóvenes que acuden a este centro como por la proyección integral que logran los jóvenes rehabilitados a través de la creación de microempresas. A pesar del efecto ejemplar que este tipo de proyectos ejerce en la comunidad, no cuenta con los recursos financieros y de personal especializado para difundirse a una escala mayor. Este tipo de proyectos está todavía sujeto al apoyo que diferentes instancias de la iniciativa privada le proporcionan a través de grandes acontecimientos especiales, organizados con carácter internacional, o de contribuciones regulares, pero de menor cuantía. Podría lograrse una mayor difusión de este tipo de iniciativas y de la experiencia de recuperación de los jóvenes si se considerara el entorno que ellos requirieron para lograr una reinserción social efectiva, y lo mismo que las adaptaciones al funcionamiento de la Ley del Menor Infractor, para otorgarles un espacio efectivo para reformarse.

En la opinión de quienes trabajan en el ámbito de la marginalidad, la solución menos costosa en términos sociales y personales frente a los riesgos de desintegración social sería la preservación de la familia y los apoyos que ésta requiere para proporcionar un entorno adecuado, en términos básicos, para la formación de los niños y adolescentes. En lo que pudiera considerarse una labor preventiva, aunque originada por motivos distintos, se presenta la experiencia del grupo coral de “Los Niños Cantores del Valle de Chalco-Solidaridad”, establecido en una zona de población marginada colindante con la Ciudad de México (véase el recuadro 2) que incluso ha logrado autofinanciar sus actividades y apoyar parcialmente la construcción de un pequeño centro de ensayo y reunión en la misma comunidad. Una de las ideas motrices que subyace en este exitoso proyecto es el efecto creativo y de desarrollo a un nivel íntegramente humano, basado en la expresión artística y en la práctica de cualquiera de sus disciplinas, incluso entre niños y jóvenes que han crecido en un medio de carencias y de estímulos escasos en sus primeros años.

Recuadro 2

LOS NIÑOS CANTORES DEL VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD, A. C.

Aunque bastante conocidos entre los amantes de la ópera, en México y otros países de América Latina, Europa Central y los Países Bajos donde se han presentado, los Niños Cantores del Valle de Chalco —que constituyen el mejor grupo musical de México en su tipo— son casi desconocidos en su comunidad. La zona cuenta en la actualidad con aproximadamente 1 200 000 habitantes, que se caracterizan por su bajo perfil educativo, escasez de recursos materiales y culturales, constituyendo una población que los conocedores califican de “amusical”. Son pobladores de una zona marginada que se constituyó en asentamiento de familias depauperadas y posteriormente beneficiadas por el programa gubernamental “Solidaridad”. Éste fue impulsado hacia mediados de la década de los ochenta para atender problemas de falta de servicios básicos en una población con mínimas oportunidades de empleo que no sean las que ellos mismos puedan proporcionarse a través de sus propios negocios-talleres. En este contexto, y de una manera un tanto fortuita, los maestros Leszek Zawadka (director musical) y Antonio Suárez (escenógrafo y coordinador general) conformaron el grupo de los Niños Cantores, integrado inicialmente por 40 miembros y ahora por 60 chicas y chicos del lugar, el que se ha mantenido y desarrollado a lo largo de más de 10 años.

Como azarosa fue la manera en que se abrió la oportunidad para estos niños y jóvenes —a partir de la selección de un grupo de 40 niños, en enero de 1990, que cantarían en español y polaco, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Valle de Chalco en junio de ese año—, han sido pródigos el esfuerzo y la vocación sostenidos por los fundadores, para adiestrar y presentar a estos jóvenes artistas en distintos escenarios, sorteando todo tipo de dificultades. El talento y excelente desempeño vocal de niñas y niños les ha permitido compartir escenario con grandes exponentes de la ópera mundial, pero sobre todo crear una fuente de autoestima y valoración que no es propia o producto del entorno natural en que sus familias se desenvuelven, por más cariño y voluntad de traspasar sus adversidades que en ellas exista. Este proyecto ha funcionado gracias a la adaptación de los maestros Zawadka y Suárez a las múltiples limitaciones de la situación en que viven sus discípulos, y en especial al empeño conjunto y la firme convicción de los mentores respecto de la gama de potencialidades que emergen al abrigo del arte. En la experiencia del maestro Zawadka, el arte estimula otras sensibilidades y desarrolla otros aspectos de la personalidad que se reflejan en actitudes vitales positivas y en actos que les permiten trascender su particular situación de pobreza. Es por ello que este tipo de trabajo, que acerca y hace participar a niñas y niños en el arte, tiene repercusiones sobre toda su vida juvenil y adulta; en el conjunto de participantes y sus familias, produce un efecto de superación que permite calificar el gasto realizado en este tipo de actividades como una inversión social con auténtico impacto comunitario.

Una mención más detallada merece la calidad de las realizaciones de los Niños Cantores de Valle de Chalco. Los participantes en el grupo no sólo están comprometidos a mantener un promedio de calificaciones por encima de 8³⁹ en sus cursos regulares, sino que muchas veces, por exigencia de su participación en el Coro, han de cantar con perfecta dicción en más de 10 lenguas distintas al español. Hasta la fecha, han grabado cinco discos compactos y tres cassettes, contando entre sus logros que la grabación que ellos hicieron de “Gloria” (Vivaldi) formara parte de la banda sonora de la película *Nixon*.⁴⁰ Actualmente el grupo prepara una gira por países del Caribe y Centroamérica, mientras ensayan la grabación del sexto disco compacto, alternando con la representación de la ópera infantil *Brundibár*⁴¹ durante la temporada de vacaciones escolares.

/Continúa

³⁹ En una escala de 0 a 10, donde 6 es la nota mínima de aprobación.

⁴⁰ Película estadounidense, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Anthony Hopkins.

⁴¹ Compuesta en 1938 por Hans Krása, músico judío de Praga.

Recuadro 1 (Conclusión)

Especial atención merece el hecho de que el grupo se ha autofinanciado durante 10 años con ingresos obtenidos de sus representaciones. Incluso las giras al exterior se han efectuado con recursos propios, con los cuales el grupo ha pagado los gastos de traslado a diferentes países. Además, el nuevo centro musical donde funciona el Coro —inaugurado a comienzos de 2000— se financió con recursos propios y sólo en parte se aceptaron donaciones, en su mayoría a título privado. Durante el año en curso, el grupo ha contado con recursos extraordinarios y el auspicio del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, ya que en 1998 el Coro se hizo acreedor a la “Presea en Artes y Letras”. Esta distinción se otorga a la persona o grupo de la entidad mexicana más destacado en el ámbito artístico.

Los jóvenes de la primera generación de niños cantores, que precisamente por la edad y el cambio de voz debieron dejar el Coro, han podido utilizar su experiencia y aptitudes personales para abrirse paso en otras actividades de provecho. En el caso de las jóvenes, por influencia del entorno social, la mayoría de ellas se orientó a tareas domésticas, pero aquellos jóvenes que optaron por su vocación artística han contado con la guía y contactos proporcionados por los maestros Zawadka y Suárez para continuar carreras de danza, de música y técnicas afines en instituciones de renombre. Estos jóvenes retribuyen al mismo Coro con su aporte como instructores en sus respectivas especialidades. De esta manera, las expectativas de los maestros, en su labor de acercamiento de los niños a la cultura a través de la música, se han visto más que satisfechas, ya que la participación de los chicos en el Coro les ha permitido abrirse un espacio en el mundo y les ha brindado el amor propio y la seguridad para esforzarse por lograr una vida digna para ellos mismos.

Desde la perspectiva de lo que el arte o la aproximación a la realización artística puede hacer para encauzar a los jóvenes y ayudarles a recuperar su autoestima y el valor de sus vidas, hay dos programas que, con diferentes matices, funcionan en este sentido para tratar de reorientar a jóvenes que sobreviven en la calle. En el primero de ellos, el “Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Calle”,⁴² el trabajo está enfocado precisamente al grupo de jóvenes que han dejado de ser niños, mayores de 18 años, y que se encuentran en la calle —muchas veces, desde hace más de 10 años— como una opción para sobrevivir, con apoyos solidarios de los que comparten su situación y que igualmente carecen de reconocimiento e identidad social. La propuesta de orientación de los jóvenes, que se asume como una tarea de tipo preventivo y de rehabilitación psicosocial, es encontrar a través del arte un camino propio de identificación y elaboración de su situación de exclusión. Este proyecto, que se inicia en septiembre de 1999 en las delegaciones Coyoacán y Benito Juárez, parte de un planteamiento integral en cuanto a propiciar el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes como individuos partícipes de su existencia y en corresponsabilidad con la comunidad. De momento, el Programa ha avanzado en la detección de grupos de jóvenes en la calle y sus respectivos entornos comunitarios, así como en la evaluación psicosocial y el establecimiento de espacios de intervención y encuentro para iniciar los procesos reparadores que permitan nuevas formas de identificación y proyección social.

⁴² Promovido desde la Dirección de Equidad y Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México.

El otro programa, “Coaliciones Juveniles”,⁴³ se asemeja al anterior en el estímulo al establecimiento de áreas de creatividad que permiten a los jóvenes un alejamiento de las adicciones, sin recurrir al internamiento en centros de asistencia, sino desde su entorno específico. Este trabajo, formulado también como una estrategia de intervención preventiva de adicciones, para grupos de jóvenes desde los 12 hasta los 24 años, impulsa el trabajo comunitario en contra de las adicciones a partir de las organizaciones ya constituidas por los jóvenes. Hasta el momento se ha creado el proyecto del “Quetzalpapalotl” como casa de la cultura itinerante dirigido a jóvenes, con grupos musicales de chavos-banda que realizan presentaciones en los distintos barrios de zonas urbanas marginadas como Ciudad Nezahualcóyotl e Iztapalapa, y también se han constituido talleres de aeropintura, cuyos trabajos en murales y camisetas se exponen o comercializan en mercados que funcionan como puntos de encuentro e intercambio específicamente para jóvenes de la cultura marginada. Conjuntamente con el IMJUVE se ha establecido un proyecto para apoyar a jóvenes que emprendan tareas contra las adicciones hasta por un monto de 200 000 pesos (equivalentes a cerca de 21 000 dólares), con lo que se trata de fortalecer las opciones de cultura juvenil que se construyan al margen de las adicciones y desde las propias organizaciones de la juventud en las áreas urbanas marginadas.

En Centroamérica, uno de los aportes metodológicos más trascendentales por parte de los organismos no gubernamentales, obtenido en los proyectos de recuperación y reinserción de jóvenes marginados y con problemas de embarazos adolescentes, adicciones e infecciones de transmisión sexual, ha sido la educación preventiva y continua en la cultura de la no violencia y los derechos humanos básicos de todo individuo (Rädda Barnen, 1999). Los programas en los distintos países se han formulado atendiendo a la edad de los niños y jóvenes participantes y tienen como objetivo principal cambiar los paradigmas de relación intrafamiliar que dan lugar a la violencia y al abuso contra los menores indefensos. Entre los jóvenes se trabaja en la capacitación de líderes juveniles que puedan ser transmisores de imágenes y valores de respeto, y en oposición a la agresión en las relaciones familiares, que se ha identificado como uno de los problemas generadores de la exclusión y marginación posterior de los jóvenes y su propensión a la violencia.

En El Salvador, entre los programas gubernamentales más exitosos de atención a jóvenes pertenecientes a “maras” o pandillas, la mayoría de las veces adolescentes, se encuentra el “Programa Creciendo juntos y juntas”, a través del cual se trata de recuperar las capacidades de los jóvenes para reincorporarse al sistema educativo y social y al trabajo. Se otorga particular énfasis a la necesidad de proporcionar un entorno seguro para el desarrollo de los hijos de madres adolescentes solteras, ex integrantes de pandillas. Otro programa de gran impacto entre los grupos de jóvenes sin recursos, aunque impulsado desde la Asociación Demográfica Salvadoreña, como organización no gubernamental, es el de “Atención Integral a Adolescentes” que a través de una clínica-hospital y un centro de documentación especializado otorga servicios de salud y formación de multiplicadores de salud sexual y reproductiva, para jóvenes entre 14 y 20 años, y fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo entre los jóvenes.

Otra de las variantes de trabajo con jóvenes marginados que involucra a sectores tradicionalmente reacios a la realización de un trabajo de recuperación y reintegración a la

⁴³ Establecido desde la Subdirección de Capacitación en el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

familia de procedencia, es el que cuenta con la participación de la policía, lo que puede observarse en algunos distritos con población marginada tanto en San Salvador como en Managua. Se presentan experiencias novedosas como la acción conjunta de funcionarios del Ministerio de Acción Social y la Policía Nacional en un Distrito de Managua,⁴⁴ que han ejecutado conjuntamente, desde septiembre de 1999, un plan de recuperación de pandilleros jóvenes entre 13 y 23 años, todos ellos con algún tipo de adicciones, que han perpetrado algún delito y provienen de hogares monoparentales y desintegrados. Los grupos de pandillas, en reconocimiento a su cohesión, se transforman en clubes 4-S (salud-sentimiento-saber-servicio) que asumen funciones de liderazgo en la propagación de nuevos valores; actualmente existen 30 clubes con cerca de 25 a 30 jóvenes cada uno, y clara preponderancia masculina. Este programa ha debido contar con un compromiso de acción social de los funcionarios públicos que supera con mucho la actitud pasiva que por lo general manifiestan ante cualquier situación difícil. Además, el personal de la Policía Nacional asignado a estas tareas, adicionalmente a la formación adquirida durante etapas anteriores en que se involucraban también con la población,⁴⁵ ha tenido que capacitarse en términos psicológicos y sociológicos para responder constructivamente en las situaciones de violencia que se generan en un primer momento, por la resistencia y desconfianza de los pandilleros ante su presencia y participación.

En el trabajo que se realiza en Nicaragua con los jóvenes de las pandillas tiene un lugar preponderante el tratamiento de la violencia y la inclusión de la perspectiva de género, como rasgos principales contrapuestos a la cultura de la guerra agravada por la pobreza. Así, con el patrocinio del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) se implementa desde enero de 1999 el módulo de “Violencia de Género y Seguridad Ciudadana” donde participan distintas organizaciones juveniles no gubernamentales (bajo el programa “Dos Generaciones”) y la Policía Nacional, con una clara conciencia de que la adolescencia constituye la última oportunidad para provocar un cambio de mentalidad y comportamiento con respecto a la violencia como forma recurrente de los varones para descargarse de problemas y frustraciones, actuando en contra de la mujer y de los menores indefensos.

En Panamá, los programas para juventud que distinguen positivamente a los grupos de jóvenes marginados o en riesgo social son prácticamente inexistentes. Por una parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realiza una investigación para conocer las características de las pandillas juveniles, y el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia ha iniciado un proyecto piloto con grupos de pandilleros en enero de 2000 en la periferia de la capital. El proyecto “Nueva Gente” aprovecha el grado de entendimiento al que llegaron las distintas pandillas, en el sentido de no continuar agrediendo y masacrándose mutuamente, si bien no se ha avanzado en términos de integración social. Asimismo, la vinculación del gobierno con las distintas ONG para proyectos identificados de adicciones o salud reproductiva entre adolescentes es todavía incipiente. El Consejo de la Juventud, que se creó a mediados de 1999 para promover la presencia y participación de la juventud en distintos foros civiles y políticos, está impulsando los Cabildos de la Juventud, y las Casas de la Juventud como lugares y espacios de encuentro juvenil.

⁴⁴ Se trata del Distrito V de Managua, situado en el centro de la capital.

⁴⁵ Durante el gobierno sandinista, la policía estaba más involucrada en la organización de la vida civil.

Entre los proyectos panameños con mayor éxito se encuentra la ONG “Nueva Identidad” que surgió hace 19 años, formada por mujeres adultas para su capacitación en asuntos de género, violencia intrafamiliar, comunicación, salud reproductiva y otros relacionados con cambios de su condición social femenina y subordinada. En este proceso de formación aparecen las hijas, que con los años se convierten en adolescentes y, con ello, necesitan capacitación para cubrir funciones de liderazgo en los temas tradicionales de sus madres y otros nuevos, propuestos por ellas mismas, como el de la igualdad de oportunidades, que se incorporó en 1999. Aunque éste no es un trabajo de recuperación, constituye un ejemplo importante de trabajo preventivo en contra de la desintegración familiar y a favor de la afirmación de valores de equidad que reflejan una gran autoestima. La difusión de estos valores y mensajes se realiza a través de representaciones teatrales en la comunidad a la que pertenecen.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una de las principales conclusiones que se derivan del tipo de vida, de las características de grupo y de las estrategias de supervivencia de la juventud marginada, es que de ninguna manera constituyen comportamientos esporádicos. Las circunstancias en que se desenvuelven los jóvenes excluidos de la sociedad formal los han compelido a constituir una cultura de identidad alternativa y un sistema de vida que les proporciona mecanismos de defensa, de manutención y de reproducción. Desde esta perspectiva, la respuesta de los jóvenes ante la situación de vulnerabilidad en que los ha colocado la marginación no debería considerarse transitoria; más bien es una estructura básica de relaciones económicas y sociales que enmarca sus vidas. Un sistema de vida sólo puede ser sustituido por otro que ofrezca una estructura completa y permita articular las diversas necesidades de personas que atraviesan por una fase de definición personal y social tan importante como es la juventud.

El caso particular de los jóvenes marginados del norte de América Latina, con grandes carencias de desarrollo y fuertes segregaciones sociales, configura una situación difícil de tratar, pues generalmente sólo trasciende de ellos el cúmulo de problemas y carencias que sufren y el peligro que éstos representan para el resto de la sociedad. La relación que se establece entre las instituciones y los programas sociales de atención a la juventud marginada, identificada como población “en riesgo”, reviste el carácter de asistencia coyuntural en situaciones críticas, lo que constituye una forma limitada o parcial de tratar el problema de la marginación en este sector de juventud. Este tipo de servicios genera más bien rechazo y resistencia entre los jóvenes excluidos, para quienes las verdaderas oportunidades se configuran a partir de su vida y su actividad como miembros de la pandilla o la organización callejera. El desarrollo de capacidades, una vez marginados de las estructuras formales —escuela, familia, barrio—, se da a partir de la construcción de identidad y relaciones alternativas en el grupo de pandilleros. Los programas que atiendan sólo aspectos parciales del fenómeno, sin una perspectiva integral de vida, no ofrecen una alternativa a la vida en pandilla.

Junto con el mayor interés que comienzan a concitar estos grupos de jóvenes marginados, hay implícita o en ciernes, la voluntad de reconocer que éste es un fenómeno específicamente social provocado por la configuración de una estructura social en la que ciertos hechos, como la guerra o el cambio de modelo económico, han contribuido a acentuar las carencias y la situación de pobreza y marginación. Es un fenómeno que debe conocerse con más profundidad y estudiarse para dar cuenta del alcance de la marginación juvenil sobre el conjunto de la sociedad. Se percibe la falta de indicadores estadísticos y de conceptos homogéneos para avanzar en la identificación y medición del problema.

Es evidente, para las mismas instituciones sociales involucradas, que no se pueden suprimir estas manifestaciones en tanto son formas de existencia en la marginación, que constituye el núcleo del problema y para el cual no se han propuesto soluciones globales. De esta manera, la destrucción de las formas de organización que la juventud marginada ha sabido procurarse para su supervivencia como grupo excluido sólo puede proceder de los jóvenes mismos. Cualquier alternativa viable de reintegración social debería considerar la elaboración de

trayectorias de vida y formas de reinserción laboral, a partir de las mismas organizaciones juveniles. Se trata de una labor continua y de largo plazo para recomponer esta parte del capital humano, que en sus potencialidades ha permanecido, por tantos años, dañado y olvidado del resto de la sociedad.

Se vislumbra un área de acción importante a partir de lo que se podría considerar como políticas preventivas o de atención temprana a las manifestaciones de marginación y de vulnerabilidad, sobre todo las más drásticas y que tienden a ser cada vez más frecuentes entre la población infantil y preadolescente, como son el abandono de hogar y la deserción escolar. Estas opciones extremas de los futuros jóvenes marginados se podrían atribuir a la pérdida de funcionalidad de la familia y de la sociedad como fuente del desarrollo de las potencialidades, adquisición de capacidades y de relaciones que permitan el desenvolvimiento e inserción de los jóvenes en distintos ámbitos de la vida. De ahí la importancia de conformar una institucionalidad que pueda cumplir esas funciones.

Por lo mismo, los programas de erradicación de la pobreza deberían incluir las acciones necesarias para promover, además de fuentes legítimas de ingreso, hogares integrados y con paternidad responsable, ya que constituyen el tejido básico para el desarrollo y formación de las capacidades de la población infantil. En este sentido, los proyectos de atención materno-infantil que integran los componentes de ayuda en ingresos, asistencia de salud y educación deberían extenderse, rebasando la primera infancia, y abarcar hasta la adolescencia temprana que coincide con la educación secundaria, como medidas preventivas de la deserción escolar. Asimismo, las campañas para la erradicación de la violencia intrafamiliar y la preservación de hogares integrados, aunque de efecto a largo plazo, constituyen un esfuerzo necesario de transformación de patrones culturales, que de todas maneras deben estar apoyados en soluciones estables al problema de generación de ingresos adecuados. Son necesarios programas comunitarios y de asentamientos pequeños para fortalecer las familias y los principios de convivencia comunal, en función de un entorno estimulante para los niños y jóvenes.

1. Propuesta económica incluyente

La primera constatación a partir de la situación de la juventud marginada es que su mayor vulnerabilidad proviene de la exclusión y el aislamiento con que el conjunto de la sociedad trata a este sector de jóvenes. Es evidente que constituyen un sector de la sociedad sobre el cual, a la vulnerabilidad general que provoca la condición de pobreza, se suman otras limitaciones derivadas de la marginación, y que se resumen en que no existen accesos viables a las oportunidades de empleo, de capacitación, de formación laboral, y todo lo que pudiera constituir una fuente de ingresos lícita y ajustada a las necesidades básicas de su desarrollo vital. Resulta esencial, en función de un desarrollo equitativo, la elaboración de una propuesta económica incluyente, que considere a los jóvenes marginados como participantes en la sociedad. Se necesita establecer un fondo revolviente para sostener una labor institucional permanente en cada país, que consista en ir hacia los jóvenes marginados y proporcionarles un espacio de expresión que desemboque en la elaboración y aplicación continua de programas afines a sus intereses. Con el establecimiento de una institución central encargada de la juventud, se podría impulsar la realización de encuestas específicas para medir, aunque fuera de manera indirecta, la incidencia y características de los jóvenes marginados, así como otros factores de interrelación social.

Probablemente por la forma de constituirse como grupo marginal y la trayectoria escolar y de vida previa, este sector de juventud no pueda incluirse entre los recursos más dinámicos de la sociedad, pero el hecho mismo de que se les conciba como un grupo problemático los convierte en tal. En la medida en que la sociedad percibe a estos jóvenes como una carga social, se convierten efectivamente en un cúmulo de necesidades insatisfechas y exigencias de financiamiento prácticamente irrecuperables. Por ello es importante para los grupos de jóvenes marginados, y para la sociedad en su conjunto, que se les considere sujetos de capacitación y de inclusión íntegra en la sociedad a la que pertenecen, a través de medios dignos. El Estado debe asumir la responsabilidad que tiene para con este sector específico de la sociedad, más aún en esta etapa que es crucial para su inserción social. Es responsabilidad de cada Estado establecer las condiciones y las medidas de política que preserven a la sociedad de la desintegración y de la anomia.

Cada gobierno debería formular políticas integrales y focalizadas no sólo para el conjunto de los jóvenes, sino en particular para este grupo desfavorecido que requiere medidas específicas para acceder en términos equitativos a las oportunidades de integración social. Es necesario tener en cuenta que, con políticas y medidas aisladas lo mismo que con programas sectoriales, poco se puede lograr en cuanto a recuperación e integración de jóvenes que ya han constituido sus propias organizaciones y mecanismos para sobrevivir. Los programas que se ofrezcan deben tener como objetivo la recuperación íntegra del ser social, hombre o mujer, y restituirlo en sus capacidades para que pueda desenvolverse como un ser autónomo e independiente, que pueda generar sus medios de subsistencia como miembro de la sociedad, cubriendo sus necesidades como ser humano.

En ocasiones, es tan profundo el grado de aislamiento social y de hostilidad desencadenados en los círculos marginados, que el establecimiento de programas de recuperación o tratamientos específicos, no es suficiente y éstos no son accesibles a los jóvenes, que los perciben como una afrenta más, o como un medio para desestabilizar su propio sistema. Los jóvenes marginados difícilmente pueden ser integrados a través de organizaciones que ya abandonaron una vez, menos aún si las perciben como fuente de agresión y represión. Así, uno de los desafíos estratégicos que se plantea para la integración social de la juventud excluida es llevar los programas y servicios a las propias organizaciones de los jóvenes, y desde sus situaciones y motivaciones particulares, empezar a restituir capacidades y funciones con un sentido de integración a la normalidad. Los programas deben ofrecer alternativas integrales que permitan a los jóvenes avanzar más allá del mundo marginal de la supervivencia y sus fronteras inestables.

2. Nutrición y salud

Los jóvenes marginados, no tanto por edad como por su condición de pobreza y marginación, han padecido desnutrición desde la primera infancia, con las secuelas que esto provoca en el desarrollo de las capacidades físicas y mentales. La desnutrición crónica afecta al comportamiento y limita el campo relacional, lo que repercute constantemente sobre sus vidas y sus proyecciones (Rodríguez, 1997). Esta desnutrición se relaciona incluso con las adicciones, como recurso para paliar temporalmente carencias de alimentación tan extremas. Por ende, el tratamiento integral de las adicciones debe incluir un programa de nutrición que permita

compensar desequilibrios actuales, por la abstinencia de drogas, y anteriores, por la insuficiencia crónica de sustancias nutritivas esenciales.

Los problemas de salud relacionados con la dependencia de sustancias adictivas —drogas, alcohol y tabaco— y con las infecciones de transmisión sexual, como las venéreas y el VIH-SIDA, constituyen una fuente de vulnerabilidad entre los jóvenes marginados debido al predominio de las prácticas rituales en las pandillas, donde ambos elementos constituyen factores de cohesión del grupo. En el caso del tratamiento de adicciones, un programa de rehabilitación debe ser integral para lograr su cometido. La relación entre la persona adicta y la sustancia adictiva en cuestión involucra parte del funcionamiento biológico así como un pseudo control emocional en situaciones vitales, por lo que se debe procurar la sustitución del sistema de equilibrio fisiológico y, de manera esencial, el acompañamiento emocional y la motivación a través de la restitución de la autoestima. Así, tanto los tratamientos de adicciones como los de las infecciones adquiridas por contacto sexual —y tanto más las de tipo terminal, como el VIH-SIDA— remiten a la necesidad de atenciones de largo plazo y con fuerte apoyo psicoterapéutico, no sólo del enfermo directo sino de sus familiares y allegados. Incluso entre las jóvenes la necesidad de un apoyo completo es todavía más indispensable, ya que muchas veces se trata de un embarazo a temprana edad, sin contar con medios para la crianza, sin la ayuda de quien las embarazó, y enfrentando a menudo el rechazo familiar y social, con una responsabilidad para la cual no están preparadas ni material ni emocionalmente.

Por último, con respecto al complejo tema de la salud entre los adolescentes y jóvenes, resulta imprescindible referirse a la necesidad de un programa de salud sexual y reproductiva que sea permanente y se apoye en disposiciones legales y mecanismos instituidos para delimitar responsabilidades y dar protección a los más vulnerables, por edad, condición social o sexo. Para establecer criterios de salud en áreas que son terreno de expresión de poder y sumisión es imprescindible definir normas que permitan validar las decisiones y opciones de los más débiles. Por ello, no sólo se trata de proporcionar información y transmitir conocimiento, sino también de crear mecanismos legales, medios materiales y condiciones de respeto igualitario para que los jóvenes puedan efectivamente tener acceso a la salud sexual.⁴⁶ Debe procurarse una acción paralela y concertada de las instancias legislativas y ejecutivas para avanzar en la difusión de información, la educación y el respeto a los derechos, así como el cambio en las pautas culturales que actualmente segregan a los jóvenes pobres.

3. Educación y capacitación

La capacitación laboral debe corresponder a oportunidades reales, y no sólo virtuales, de la economía a la que se quiere integrar a los jóvenes; es éste un sentido de racionalidad mínimo que debería prevalecer para dar un carácter eficiente al gasto público y una motivación verdadera a quienes hacen el esfuerzo de encauzarse en este aspecto. Los programas de capacitación laboral, además de un contenido y entrenamiento de alta calidad, deberían permitir la continuación de los estudios básicos, a la vez que se podrían establecer vinculaciones específicas con empresas

⁴⁶ Aunque las campañas de salud sexual y protección con preservativos consiguen llegar a más del 90% de la población urbana, por diferentes razones las personas sólo se protegen aproximadamente en un 30% de las ocasiones recomendadas.

dinámicas y puestos de trabajo existentes. El sistema educativo debería ofrecer a los jóvenes marginados la posibilidad de recuperar niveles de escolaridad y tener la opción de continuar el aprendizaje y la formación con desplazamientos desde el área técnica hacia la educación más formal, respetando siempre los requisitos académicos. Se debería otorgar mayor importancia al presupuesto y la ampliación de la oferta de capacitación técnica actualizada, con becas subsidiadas por el Estado y las agrupaciones empresariales.

En tanto los jóvenes no se vinculen a actividades productivas, sería conveniente que contaran con un sistema de becas integrales, que cubriera gastos de colegiatura, de materiales de aprendizaje, y comida, vestuario, transporte y diversos. En la medida en que la capacitación esté efectivamente vinculada a propuestas de inserción real en la economía, puede existir un sistema de becas-crédito o becas reembolsables a futuro, cuando el estudiante se transforme en perceptor de ingresos. Entre jóvenes de escasos recursos sólo un sistema de becas puede asegurar estudios continuos y de buen nivel, sin detrimento de las posibilidades futuras de lograr una inserción laboral adecuada, de calidad e ingresos suficientes. La combinación de estudio y capacitación en forma, coordinada con el cumplimiento de una jornada laboral para manutención, permite el aprovechamiento pleno de las capacidades y un rendimiento superior.

4. Empleo productivo

Uno de los mayores desafíos para la sociedad actual consiste en ofrecer empleos efectivos para los jóvenes, ya que la insuficiencia de empleos productivos se ha convertido en un problema estructural de la región. Para otorgar oportunidades reales de trabajo a los jóvenes marginados, se debe procurar una reactivación económica a escala de cada país, así como considerar las necesidades laborales de ellos. La misma dinámica del modelo exportador ha creado la segmentación de mercados en virtud de la cual buena parte de los productos manufacturados que consumen los jóvenes marginados y los pobres en general se comercian en el mercado informal, mientras este mismo sector económico es el que otorga la mayor parte de oportunidades de empleo a esta población. Se requeriría un esfuerzo deliberado por parte de cada gobierno, en concertación con pequeños y microempresarios, para crear una red de talleres o empresas que provean a medianas y grandes empresas, lo mismo que al mercado interno de manufacturas tradicionales para los sectores de menores ingresos.

El gobierno debería promover iniciativas y protecciones económicas para favorecer sectores productivos competitivos en el mercado interno, y ofrecer así empleos productivos en gran escala a los jóvenes. Las otras posibilidades se relacionan con los estímulos fiscales que el gobierno pueda proporcionar a la iniciativa privada para impulsar proyectos productivos con la participación de jóvenes en proceso de reintegración social. De igual manera, se puede pensar en la posibilidad de articular proyectos educativos y de formación para jóvenes marginados con empresas exportadoras que compitan en el mercado internacional satisfaciendo la demanda de mercados específicos y reducidos, lo mismo que en el mercado local. En estos dos últimos casos, se trataría de programas en menor escala, sujetos a decisiones y posibilidades de los empresarios locales o de los mismos jóvenes constituidos en cooperativas de producción con crédito inicial subsidiado.

Se podría considerar la promoción de empleo en maquiladoras de exportación, entre jóvenes excluidos y de escasos recursos, cuando el gobierno se constituya en el garante de los derechos laborales —aprobados y ratificados de antemano—, para asegurar un trato salarial justo y el otorgamiento de beneficios apegados a las normas internacionales.

Junto con las opciones reales de inserción laboral, se deberían promover campañas para desestimular la emigración externa porque conlleva riesgos que son inversamente proporcionales a los recursos con que cuenta el emigrante. Tanto es así que instituciones oficiales y otras no gubernamentales invierten preferentemente sus recursos en campañas para promover el abandono de este cometido, en lugar de fomentarlo.

5. Reintegración social

La reintegración social de los jóvenes marginados representa sin duda un desafío complejo en la medida en que requiere que se cumplan una serie de etapas y que se consolide el proceso de recuperación de la marginación y exclusión social. No solamente se trata de restituir la salud, dar continuidad a la formación educativa, proporcionar alternativas de reinserción laboral en tareas productivas, o ganar espacios comunes de creación y recreación, rescatar y restablecer una participación social. También hay que establecer programas que conciban la situación de marginación juvenil como un sistema de vida, y que a partir de ese punto se plantee la reintegración social como un resultado legítimo y como solución alternativa en todos los aspectos de la vida de los jóvenes marginados. Aun así, el problema más profundo que representa la reintegración social es: ¿hasta qué punto la trama social, producto del nuevo modelo económico de las dos últimas décadas, puede apoyar y contener las medidas necesarias que propicien esta superación de la marginación y la inserción social con plenitud de derechos y oportunidades para la juventud marginada?

BIBLIOGRAFÍA

- Adler de Lomnitz, Larissa (1991), *Cómo sobreviven los marginados*, Siglo XXI, 11a. edición, México.
- Agudelo Builes, Irene (1999), *El rápido tránsito. Imágenes de la adolescencia y la juventud en Nicaragua*, Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, Managua, abril.
- Arriagada, Irma y Martín Hopenhayn (2000), “Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina”, CEPAL, División de Desarrollo Social, *Serie de Políticas Sociales No. 41*, Santiago de Chile, octubre.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1999b), *Seminario Juventud para el Desarrollo: Desarrollo para la Juventud*, Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil, Diálogo “Por un desarrollo para todos”, Washington, D. C., 8 y 9 de noviembre.
- Cardoso, Fernando Enrique (1971), “Comentario sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad”, en la *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, Nos. 1-2, Santiago de Chile, 1971.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) (1994), *Familia y futuro: un programa regional en América Latina y El Caribe* (LC/G.1835-P), Santiago de Chile, octubre.
- _____ (1998), *Uso productivo de las remesas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua* (LC/MEX/R.662), elaborado por el consultor Federico Torres, México, D. F., 2 de septiembre.
- _____ (1999a), *Panorama Social de América Latina, 1998* (LC/G.2050-P), Santiago de Chile, abril.
- _____ (1999b), *Costa Rica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998* (LC/MEX/L.373), México, D. F.
- _____ (1999c), *El Salvador: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998* (LC/MEX/L.371), México, D. F.
- _____ (1999d), *Guatemala: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998* (LC/MEX/L.370), México, D. F.
- _____ (1999e), *Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998* (LC/MEX/L.367), México, D. F.

- _____ (1999f), *Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998* (LC/MEX/L.372), México, D. F.
- _____ (2000a), *La brecha de la equidad: Una segunda evaluación* (LC/G.2096), Segunda Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Santiago de Chile, 15 al 17 de mayo.
- _____ (2000b), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe* (LC/L.1339), Vigésimo octavo período de sesiones, México, D. F., 23 de marzo.
- _____ (2000c), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Síntesis y conclusiones* (LC/G.2084 (SES.28/16)), Vigésimo octavo período de sesiones, México, D. F., 25 de febrero.
- _____ (2000d), *Informe y declaración final del encuentro: "Mejores prácticas en proyectos con jóvenes del Cono Sur"* (LC/R.1970), División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 24 de febrero.
- _____ (2000e), *Panorama Social de América Latina, 1999* (LC/G.2068), Santiago de Chile, agosto.
- CEPAL-BID (2000), *Un tema del desarrollo: La reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres* (LC/MEX/L.428), México, D. F., marzo.
- Comité Acción SIDA de El Salvador/PASCA/USAID (1999), *Factores de riesgo para adquirir el VIH entre mujeres amas de casa en San Salvador*, El Salvador, agosto.
- CONADIC (Consejo Nacional contra las Adicciones) (1999), *El consumo de drogas en México: diagnóstico, tendencias y acciones*, Secretaría de Salud (SSA), México, D. F.
- CONAPO (Consejo Nacional de Población) (1999), *La situación demográfica de México*, varios autores; "La revolución silenciosa; descenso de la fecundidad en México, 1974-1999", de Virgilio Partida y Constanza Rodríguez; "Perspectivas futuras de la emigración de mexicanos a los Estados Unidos", de Rodolfo Tuirán, Virgilio Partida y José Luis Ávila; "Proyecciones de la población nacional 1995-2050", de Virgilio Partida; "El ingreso de los hogares en México: una visión de dos décadas", de Rosa María Rubalcava; "La transición demográfica y el curso de vida de las mujeres mexicanas: los desafíos presentes y futuros", de Rodolfo Tuirán; México, D. F., julio.
- Cortés, Fernando (2000), *Procesos sociales y desigualdad económica en México, Siglo XXI* editores, Umbrales de México, D. F., 30 de marzo.
- DIF-DF/Gobierno del Distrito Federal (2000), *Niñas, niños y jóvenes trabajadores en el Distrito Federal*, Estudio conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y la Dirección General para el desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal, México.

- DIF-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) (1999), *Yo también cuento. Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades. Resultados definitivos. Informe Ejecutivo*, coordinado por Francisco Robles Berlanga y Eduardo Rodríguez Silva, México, D. F., noviembre.
- Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe/UNFPA (2000), *Diagnóstico sobre salud reproductiva de jóvenes y adolescentes en América Latina y El Caribe*, Documento preparado por José Miguel Guzmán, Ralph Hakkert y Juan Manuel Contreras, con la colaboración de Martha Falconier de Moyano, Reunión de Planeación Regional en Población, México, D. F., 21a 25 de febrero.
- Escobar, Francisco Andrés (1996), “Por mi madre vivo y por mi barrio muero. Una aproximación al fenómeno de las maras”, *ECA Estudios centroamericanos*, Revista de extensión cultural de la Universidad “José Simeón Cañas” No. 570, Año LI, San Salvador, abril.
- FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) (El Salvador) (1999), *El fenómeno de las pandillas en El Salvador. Hacia un Sistema de Justicia Juvenil*, Programa Internacional/UNICEF, San Salvador.
- Germain, Gino (1973), *El concepto de marginalidad*, Nueva Visión, Argentina.
- Homies Unidos, Instituto Universitario de Opinión Pública, Rädä Barnen de Suecia, Save the Children of Estados Unidos (1998), *Solidaridad y violencia en las pandillas del gran San Salvador. Más allá de la vida loca*, UCA Editores, San Salvador, El Salvador.
- Irrarázaval, Ignacio (1995), “Habilitación, pobreza y política social”, en *Estudios Públicos No. 59*, Santiago de Chile, invierno.
- IUDOP (Instituto Universitario de Opinión Pública) (1999), Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (1999), *Normas culturales y actitudes sobre la violencia. Estudio Activa*, San Salvador, El Salvador, mayo.
- Kaztman, Rubén (1992), “¿Por qué los hombres son tan irresponsables?”, en *Revista de la CEPAL No. 46*, Santiago de Chile, abril.
- _____ (1997), “Marginalidad e integración social”, en *Revista de la CEPAL No. 62*, Santiago de Chile, agosto.
- Krauskopf Roger, Dina y María Luisa Preinfalk (2000), *Proyecto Servicios Integrales para Adolescentes en Condición de Pobreza. Estudio de casos en tres países de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala y El Salvador. El caso de El Salvador*, Fernández Editoras, San José Costa Rica, mayo.

- Maguid M., Alicia (1999), *Esfuerzos de las poblaciones para la integración regional: las migraciones internacionales en Centroamérica*, en I Informe sobre Desarrollo Humano Sostenible en Centroamérica, Proyecto Estado de la Región, PNUD-Unión Europea, Costa Rica, julio.
- Martínez Pizarro, Jorge (2000), “Emigración internacional de jóvenes latinoamericanos y caribeños: protagonismo y vulnerabilidad”, Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas), *Serie Población y desarrollo No. 3*, CEPAL, Santiago de Chile, julio.
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador (1995), *Impacto socio-económico del VIH/SIDA en El Salvador*, Programa ETS/SIDA, San Salvador, El Salvador.
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador/Comité Acción SIDA, Proyecto Acción SIDA de Centroamérica, PASCA (1999), *Situación del VIH/SIDA en El Salvador*, San Salvador, El Salvador, junio.
- Nun, José (1969), “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, en la *Revista Latinoamericana de Sociología*, Vol. V, No. 2, 1969.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (1999), *Panorama Laboral '99. América Latina y El Caribe* (<http://www.oit.org.pe>), Perú.
- Rädda Barnen de Suecia (1999), *Hablemos pues. Ni golpes que duelen, ni palabras que hieren*, Revista para la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, No. 2, San Salvador, El Salvador, diciembre.
- Rendón, Teresa y Carlos Salas (2000), “Educación y empleo juvenil”, en *Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La investigación sobre Juventud en México 1986-1999*, Tomo I, Coordinador José Antonio Pérez Islas, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, México, D. F., enero.
- Rodríguez Ajenjo, Carlos (1997), “Nuevos sujetos: nuevas enfermedades?”, *Tramas II* Subjetividad y procesos sociales, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, junio.
- Umaña, Carlos (1998), *Los jóvenes en situación de exclusión social. Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de El Salvador*, Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), San Salvador, El Salvador, octubre.
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (s/f), *Situación de los derechos de la niñez y la adolescencia salvadoreña. A diez años de la Convención sobre los derechos del niño*, San Salvador, El Salvador.
- _____ (1987), *Ajuste con rostro humano: protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*, Siglo XXI de España, Madrid.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Los documentos siguientes se consultaron durante la elaboración del estudio, aunque no aparezcan mencionados en el texto del mismo.

Agudelo Builes, Irene (2000a), *Niñez...un recuento sobre su estudio*, mimeo, Managua, mayo.

_____ (2000b), *Diagnóstico sobre las representaciones sociales acerca de la niñez y adolescencia. Análisis de los medios de comunicación escritos*, mimeo, Managua.

_____ (2000c), *Familia*, mimeo, Managua, junio.

Agudelo Builes, Irene y Regine Meyer (2000), *Fomento de jóvenes y prevención de la violencia*, Proyecto de cooperación entre OPS y GTZ (en preparación), Estudio base para Nicaragua, mimeo, Managua, mayo.

Araujo Monroy, Rogelio y Fernando Montoya (1999), “Sistemas familiares adictivos: el continente de los olvidos”, en *Nuestro futuro depende de su presente. La niñez ante los riesgos de las adicciones*, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)-Oficina Regional para México y Centroamérica, México, D. F., diciembre.

Avilés, Victoria de, Blanca Estela de Rodríguez, Ricardo Quiñónez y Rafael Ayala (1999), *Informe desde la sociedad civil sobre el cumplimiento de los derechos del niño*, Rádda Barnen de Suecia, San Salvador, El Salvador, septiembre.

Banco Mundial (2000), *Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y estrategias para la reducción de la pobreza*, Serie de estudios del Banco Mundial sobre países, Panamá, abril.

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1999a), *Pobreza y Desigualdad en América Latina y El Caribe. Tendencias de la pobreza en la década de 1990*, Departamento de Desarrollo Sostenible, Diálogo “Por un desarrollo para todos”, Washington, D. C., 8 y 9 de noviembre.

Cazés, Daniel (1998), *La perspectiva de género*, “Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles”, Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), México, D. F., mayo.

CEPAL (1998), *Participación de la juventud en las actividades laborales y en el proceso de toma de decisiones en América Latina y El Caribe. Desafíos a las políticas de juventud y a los actores sociales juveniles* (LC/R.1777), preparado por John Durston, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 17 de julio.

_____ (1999), *Panamá: Evolución económica durante 1998* (LC/MEX/L.383), *Nicaragua: Evolución económica durante 1998* (LC/MEX/L.385), *El Salvador: Evolución económica durante 1998* (LC/MEX/L.388), *México: Evolución económica durante 1998* (LC/MEX/L.391), México, D. F., julio-agosto.

_____ (2000), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Problemas, oportunidades y desafíos* (LC/G.2113-P), Santiago de Chile, diciembre.

CEPAL-FNUAP (2000), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Problemas, oportunidades y desafíos*, Santiago de Chile, diciembre.

CEPREV (Centro de Prevención de la Violencia) (1999), *Hogar y calle. La violencia como sistema*, Informe sobre el Proyecto de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 1997-1998, Lic. Valeria López y Lic. Carmen Bolaños, Managua, Nicaragua.

CESPED (Centro Salvadoreño de la Pequeña Empresa para el Desarrollo) (2000), *El Polígono: una respuesta*, Polígono industrial Don Bosco/Fundación EDYTRA, San Salvador, El Salvador.

Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia (1999), *Ley de promoción del desarrollo integral de la juventud nicaragüense*, Asamblea Nacional/ASDI, Suecia/Consejo de la Juventud de Nicaragua, Managua, Nicaragua, octubre.

Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña/República de Nicaragua (1997a), *Memoria. Semana de la Niñez Nicaragüense*, Managua, Nicaragua, junio.

_____ (1997b), *Informe sobre la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Nicaragua 1997*, Managua, Nicaragua.

_____ (1998a), *Código de la niñez y la adolescencia*, Managua, Nicaragua, septiembre.

_____ (1998b), *Convención sobre los derechos del niño. La política de la niñez y la adolescencia y el código de la niñez y la adolescencia*, NORAD, Managua, Nicaragua, diciembre.

_____ (1998c), *Plan de acción nacional a favor de la niñez y la adolescencia 1997-2001*, Managua, Nicaragua, diciembre.

_____ (1998d), *Memoria 1997-1998*, Managua, Nicaragua, diciembre.

- Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña/República de Nicaragua/UNICEF (1998a), *Código de la niñez y la adolescencia*, Managua, Nicaragua, noviembre.
- _____ (1998b), *Estadísticas de adolescentes de quienes se alega han infringido la ley y de adolescentes infractores*, Managua, Nicaragua, diciembre.
- Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña/República de Nicaragua/Ministerio de Educación, Cultura y Deportes/UNICEF (s/f), *Hablemos sobre el código de la niñez y la adolescencia*, Managua, Nicaragua.
- CONAPO (Consejo Nacional de Población) (2000), *Situación actual de las y los jóvenes en México. Diagnóstico sociodemográfico*, Comité Especial sobre Población y Desarrollo, Vigésimoctavo período de sesiones de la CEPAL, México, D. F., abril.
- Consejo Nacional de la Juventud (s/f), *La juventud es el presente y el futuro del país*, Panamá.
- Contraloría General de la República de Panamá (1998), *Encuesta continua de hogares*, Vol. 1, Dirección de Estadística y Censo, Panamá, agosto.
- _____ (1999), *Estadística panameña. Avance de cifras*, Boletín No. 8/99, Panamá, octubre.
- Coordinadora Nicaragüense de Organismos no Gubernamentales que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (1998), *Directorio*, Managua, Nicaragua, abril.
- Cornia, Giovanni Andrea, Richard Jolly, Frances Stewart (1987), *Ajuste con rostro humano; protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*, Vol. 1, Siglo XXI de España Editores, S.A., Madrid.
- Cruz, José Miguel, Álvaro Trigueros Argüello y Francisco González (2000), *El crimen violento en El Salvador. Factores sociales y económicos asociados*, IUDOP, San Salvador, El Salvador.
- Durston, John (1992), "Tesis erradas sobre la juventud de los años noventa", *Revista de la CEPAL*, No. 46, Santiago de Chile, abril.
- ECOSOC (Consejo Económico y Social), Naciones Unidas (1995), *Proyecto definitivo de programa de acción mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes (E/1995/123)*, Reanudación del período de sesiones sustantivo de 1995, Nueva York, 16 de octubre.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (1999), *La juventud contra el hambre*, Día Mundial de la alimentación, Roma, 16 de octubre.
- FLACSO-UNICEF (1998), *El fenómeno de las pandillas en El Salvador*, Serie Adolescencia 2, San Salvador, El Salvador.

Flor de Piedra, Asociación de Mujeres (1999), *Investigación diagnóstica de grupos focalizados de mujeres en situación de prostitución*, San Salvador, El Salvador, diciembre.

Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia/Gobierno de Nicaragua (s/f), *Niñas y niños de mi país*, Managua, Nicaragua.

Fundación PANIAMOR, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2000), *Proyecto Servicios Integrales para Adolescentes en Condición de Pobreza. Estudio de casos en tres países de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala y El Salvador. El caso de El Salvador*, Dina Krauskopf Roger y Ma. Luisa Preinfalk Fernández, Editoras, San José Costa Rica, mayo.

García, María de la Paz de (2000), *Inventario de las instituciones y organizaciones dedicadas al trabajo con población adolescente en pobreza, identificadas por el Proyecto Servicios Integrales para Adolescentes en Condición de Pobreza, El Salvador*, Fundación PANIAMOR/Banco Interamericano de Desarrollo/Organización Panamericana de Salud, San José, Costa Rica, mayo.

Gobierno de la Ciudad de México (1999a), *Las Comunas (Memoria)*, Dirección de Empleo y Capacitación, Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, mimeo, México, D. F., octubre.

_____ (1999b), *Programa de las Comunas*, Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Empleo y Capacitación, Dirección de Promoción al Empleo, Subdirección del Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados, mimeo, México, D. F.

_____ (2000), *La Comuna, un programa para jóvenes en la Ciudad de México*, Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Empleo y Capacitación, Dirección de Promoción al Empleo, Subdirección del Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados, agosto.

Gobierno de Nicaragua (2000), *Revista El Rostro Humano del Gobierno*, Año 1, No. 4, Managua, del 2 al 7 de mayo.

Gobierno del Distrito Federal (2000a), Dirección de Programas para la Juventud, *Aproximaciones a la problemática de la juventud del Distrito Federal*, México, D. F.

_____ (2000b), *Construyendo la ciudad para las y los jóvenes. Elementos metodológicos para la organización juvenil*, México, D. F.

_____ (2000c), *Un rol con jóvenes por la ciudad. Plan. Relatos teóricos, metodológicos y vivenciales*, México, D. F.

_____ (2000d), *Un rol con jóvenes por la ciudad. Recuperación. Relatos metodológicos, vivenciales y teóricos*, México, D. F.

- _____ (2000e), *Un rol con jóvenes por la ciudad. Memoria. Relatos vivenciales, teóricos y metodológicos*, México, D. F.
- _____ (2000f) *La juventud en la Ciudad de México. Políticas, programas, retos y perspectivas*, México, D. F.
- _____ (2000g), *Programa de Atención a Adultos Jóvenes en situación de calle. Proyecto piloto de intervención psicosocial*, Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social, mimeo, México, D. F., julio.
- Gobierno Nacional, República de Panamá (1999a), *Pacto nacional por la juventud*, Panamá, abril.
- _____ (1999b), *Nuevo enfoque estratégico frente a la pobreza 1998-2003 (resolución de Gabinete No. 134 de 17 de septiembre de 1998)*, Segunda Edición, julio.
- _____ (1999c), *Gaceta Oficial*, del 28 de agosto de 1999, Panamá.
- _____ (2000), *Políticas y estrategia de desarrollo social 2000-2004*, Panamá, marzo.
- IICA/GTZ (2000), *Encuentro regional sobre juventud rural, retos y desafíos para una agenda rural en el nuevo milenio*, San Salvador, El Salvador, enero.
- IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud) (2000), *Los jóvenes y el trabajo. La educación frente a la exclusión social*, Programa y resúmenes del Simposio Latinoamericano organizado con la Universidad Iberoamericana Santa Fe, México, 7 a 9 de junio.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (1998), *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1996*, impreso y disco compacto, Aguascalientes, México.
- INIM (Instituto Nicaragüense de la Mujer, República de Nicaragua) (s/f), *Experiencia en la elaboración de indicadores en el tema mujer adolescente y joven*, Programa Mujeres Adolescentes/Unión Europea, Managua, Nicaragua.
- _____ (1998), *Plan nacional mujer adolescente y joven*, Unión Europea/Programa Mujeres Adolescentes/UNICEF, Managua, Nicaragua, octubre.
- _____ (1999), *¿Qué más podía hacer, sino tener un hijo? Bases socioculturales del embarazo de las adolescentes en Nicaragua*, Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Managua, Nicaragua.
- Instituto Salvadoreño de Protección al Menor-UNICEF (1998), *Trabajo infanto-juvenil y educación en El Salvador*, Serie Adolescencia No. 3, San Salvador, El Salvador, octubre.
- Krauskopf Roger, Dina (1996), *Juventud en Centroamérica. Una propuesta de acción*, Consejo de la Integración Social Centroamericana (SICA), Panamá.

- López, Carlos Emilio (1999), *Chavalas y chavalos en primera plana*, publicación auspiciada por “Save de Children” (Noruega), Managua, Nicaragua, noviembre.
- Martínez, Mara (1999), *¿Ángeles o demonios? Experiencia del personal de salud capacitando a adolescentes en riesgo*, Managua, noviembre.
- Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá (1999), *Perfil y características de los pobres en Panamá. Estudio de niveles de vida (ENV)-1997*, Dirección de Políticas Sociales, Panamá, marzo.
- Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1999), *Encuesta nacional de niveles de vida en Panamá*. Proyecto Estudio de Niveles de Vida Pan/96/003, Panamá, febrero.
- Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá-Dirección de Políticas Sociales/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000), *Distribución del ingreso en Panamá. Resumen ejecutivo*, Panamá, marzo.
- Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (1998), *Marco de referencia para la formulación de políticas y plan de acción con la juventud panameña*, Panamá, diciembre.
- Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1997), *Jornada de consulta para la formulación de políticas y plan de acción con la juventud panameña*, Panamá.
- Naciones Unidas (1999), *La Tecnología y su repercusión en la familia*, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (ST/ESA/266), División de Política Social y Desarrollo, Nueva York.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo)/Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)/Sistema Regional de Información sobre Trabajo Infantil (SIRTI) (1998), *Trabajo infantil en los países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá*, San Salvador, El Salvador.
- Orellana, Soledad de (1997), *Situación general de la violencia juvenil en El Salvador*, Reunión sobre violencia en adolescentes y pandillas juveniles, Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, San Salvador, El Salvador, mayo.
- Pineda, Gustavo (1999), *La fuerza emergente. La juventud, un desafío de la sociedad nicaragüense*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nicaragua, mayo.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2000), *El desarrollo humano en Nicaragua 2000. Equidad para superar la vulnerabilidad*, Managua, Nicaragua.

Policía Nacional de Nicaragua (1999), *Plan Nacional PANDILLAS. Etapa-I-MANAGUA*, mimeo.

Programa Interinstitucional hacia un Sistema de Justicia Juvenil (2000), *Niñez, Adolescencia y Justicia*, Revista No. 1, San Salvador, El Salvador, enero-abril.

_____ (2000) *Niñez, Adolescencia y Justicia*, Revista No. 2, San Salvador, El Salvador, mayo-agosto.

Robles Berlanga, Francisco, José Luis Navarro Paredes, Jorge Llanes Briseño, Ma. Elena Castro, Mónica Margáin Castro (1999), *Modelo preventivo de riesgos psicosociales para menores, adolescentes y sus familias*, CHIMALLI-DIF, en “Nuestro futuro depende de su presente. La niñez ante los riesgos de las adicciones”, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)-Oficina Regional para México y Centroamérica, México, D. F., diciembre.

Save the Children U.S./El Salvador (s/f), *Cambiando paradigmas de género y violencia*, San Salvador, El Salvador.

SEP (Secretaría de Educación Pública)/Instituto Mexicano de la Juventud (2000), *Jóvenes e instituciones en México, 1994-2000. Actores, políticas y programas*, José Antonio Pérez Islas (coordinador), México, D. F., noviembre.

_____ (2000), Encuesta nacional de juventud 2000. Resultados preliminares, México, D. F., noviembre.

_____ (2000), *Métodos de intervención juvenil comunitaria. Miradas en la ciudad*, Roberto Merlo y Efremilanes (coordinadores), Colección Jóvenes No. 8, México, D. F., noviembre.

Sistema de las Naciones Unidas (s/f), Panamá, *Foro mundial de la juventud*, Panamá.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) (2000), *Niñas, niños y jóvenes trabajadores en el Distrito Federal*, con la colaboración del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones (FINCA), México, D. F.

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE)-UNICEF (2001), *La justicia penal juvenil de El Salvador en debate. Consulta sobre la Ley del Menor Infractor*, San Salvador, El Salvador.

Uzquiano de Schroeder, Karina (2000), *Análisis situacional de las mujeres adolescentes en El Salvador*, Programa Interagencial de “Empoderamiento de las mujeres adolescentes en El Salvador”, San Salvador, abril.

Zamudio Soriano, Juan Daniel (1999), *De joven a joven: ¿en qué te puedo ayudar? Una experiencia interactiva entre jóvenes*, en “Nuestro futuro depende de su presente. La niñez ante los riesgos de las adicciones”, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)-Oficina Regional para México y Centroamérica, México, D. F., diciembre.

Anexo estadístico

Cuadro 1

POBLACIÓN JOVEN RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL

(Miles de habitantes)

	Población joven de 15 a 24 años			Población total			Participación de la población joven en el total (%)			Aumento de la población joven	Tasa acumulada de crecimiento (%) población joven
	1990	1995	2000	1990	1995	2000	1990	1995	2000	1900-2000	1990-2000
México	18 341.2	19 948.9	19 942.2	83 226.0	91 145.3	98 881.3	22.0	21.9	20.2	1 601.0	8.7
El Salvador	1 064.3	1 271.5	1 333.6	5 110.2	5 668.6	6 276.0	20.8	22.4	21.2	269.3	25.3
Nicaragua	769.9	906.6	1 077.8	3 827.4	4 425.7	5 074.2	20.1	20.5	21.2	307.9	40.0
Panamá	496.3	512.8	526.5	2 397.5	2 631.0	2 855.7	20.7	19.5	18.4	30.1	6.1
Costa Rica	582.3	661.9	771.2	3 048.7	3 553.9	4 023.5	19.1	18.6	19.2	188.9	32.4
Guatemala	1 716.8	2 023.2	2 368.9	8 749.0	9 975.9	11 385.3	19.6	20.3	20.8	652.2	38.0
Honduras	987.2	1 146.1	1 338.5	4 878.8	5 653.5	6 485.5	20.2	20.3	20.6	351.3	35.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del *Boletín Demográfico No. 63*, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Cuadro 2

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA
POBLACIÓN JOVEN RESPECTO DE LA PEA

(Miles de habitantes)

	Población joven (15 a 24 años)			PEA (15 a 64 años)			Participación de la población joven en la PEA (%)		
	1990	1995	2000	1990	1995	2000	1990	1995	2000
México	18 341.2	19 948.9	19 942.2	47 843.4	54 888.2	61 434.3	38.3	36.3	32.5
El Salvador	1 064.3	1 271.5	1 333.6	2 810.2	3 955.4	3 729.5	37.9	32.1	35.8
Nicaragua	769.9	906.6	1 077.8	1 949.3	2 301.6	2 747.1	39.5	39.4	39.2
Panamá	496.3	512.8	526.5	1 432.2	1 614.9	1 803.9	34.7	31.8	29.2
Costa Rica	582.3	661.9	771.2	1 808.8	2 161.4	2 516.0	32.2	30.6	30.7
Guatemala	1 716.8	2 023.2	2 368.9	4 451.7	5 145.2	6 016.4	38.6	39.3	39.4
Honduras	987.2	1 146.1	1 338.5	2 528.3	3 000.5	3 561.0	39.0	38.2	37.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del *Boletín Demográfico No. 63*, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Nota: PEA: población económicamente activa.

Cuadro 3

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: HOGARES POBRES POR ZONAS,
POR GRUPOS DE EDAD Y POR SEXO

(Porcentajes)

	Pobres			No pobres		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México, 1996						
Urbana	38			62		
15 a 19 años	50	50	50	50	50	50
20 a 24 años	43	39	47	57	61	53
Rural	53			47		
15 a 19 años	63	63	63	37	37	37
20 a 24 años	57	57	56	43	43	44
El Salvador, 1997						
Urbana	39			61		
15 a 19 años	47	46	48	53	54	52
20 a 24 años	38	36	40	62	64	60
Rural	62			38		
15 a 19 años	67	65	69	33	35	31
20 a 24 años	60	55	66	40	45	34
Panamá, 1997						
Urbana	25			75		
15 a 19 años	25	23	26	75	77	74
20 a 24 años	19	17	21	81	83	79
Rural	34			66		
15 a 19 años	49	49	50	51	51	50
20 a 24 años	39	32	45	61	68	55
Costa Rica, 1997						
Urbana	17			83		
15 a 19 años	20	19	20	80	81	80
20 a 24 años	13	8	18	87	92	82
Rural	23			77		
15 a 19 años	21	18	25	79	82	75
20 a 24 años	16	13	19	84	87	81
Honduras, 1997						
Urbana	67			33		
15 a 19 años	70	71	69	30	29	31
20 a 24 años	66	63	68	34	37	32
Rural	80			20		
15 a 19 años	82	82	82	18	18	18
20 a 24 años	78	75	81	22	25	19

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, en CEPAL (2000), *Panorama social de América Latina y el Caribe, 1999-2000*, y CEPAL (2000), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe* (LC/L.1339), marzo.

Cuadro 4

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESEMPLEO DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, ZONAS URBANAS a/

(Porcentajes)

País	Año	Tasa de participación en la actividad económica		Tasa de desempleo		Porcentaje de jóvenes en la PEA total	Porcentaje de desempleados jóvenes en el desempleo total	tasa de desempleo juvenil y tasa de desempleo total
		Total	Jóvenes	Total	Jóvenes			
México	1989	53	43	3.3	8.1	27.8	69.0	2.45
	1994	57	47	4.5	9.4	26.9	55.8	2.09
	1996	59	47	5.1	12.5	25.2	61.6	2.45
El Salvador	1990	64	51	9.9	19.3	26.1	51.0	1.95
	1995	62	48	6.8	14.0	25.1	51.6	2.06
	1997	60	43	7.3	14.6	21.9	43.8	2.00
Nicaragua	1997	61	45	13.1	20.9	25.8	41.1	1.60
Panamá	1989	65	47	27.0	37.1	22.7	31.2	1.37
	1994	62	51	15.7	31.0	23.7	47.0	1.97
	1997	63	50	15.4	31.5	22.0	45.1	2.05
Costa Rica	1990	57	51	5.3	10.5	25.3	49.8	1.98
	1994	57	47	4.2	9.7	22.0	50.6	2.31
	1997	58	47	5.8	13.0	21.9	49.1	2.24
Honduras	1990	60	48	6.9	11.2	28.9	46.7	1.62
	1994	60	48	4.1	7.1	29.4	51.7	1.73
	1997	65	55	5.2	8.9	29.4	50.1	1.71

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Nota: PEA: población económicamente activa.

a/ Incluye empleados domésticos que habitan en el hogar.

Cuadro 5

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: JÓVENES POBRES URBANOS POR GRUPOS DE EDAD, NIVEL DE POBREZA DE LOS HOGARES Y SEXO

(Porcentajes)

	Económicamente activos que asisten a la escuela			Económicamente activos que no asisten a la escuela			No económicamente activos que asisten a la escuela			No económicamente activos que no asisten a la escuela		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México, 1996												
15 a 19 años	6	8	4	36	44	27	39	40	38	19	8	32
20 a 24 años	4	4	3	55	81	35	11	10	11	30	4	51
El Salvador, 1997												
15 a 19 años	6	8	3	23	34	13	54	51	58	17	7	27
20 a 24 años	5	7	4	58	76	42	12	12	12	25	5	42
Panamá, 1997												
15 a 19 años	5	6	3	22	33	13	61	54	66	13	7	18
20 a 24 años	8	8	8	60	81	42	9	6	12	22	5	38
Costa Rica, 1997												
15 a 19 años	9	13	4	22	28	15	47	38	57	23	21	24
20 a 24 años	6	6	6	37	71	21	10	12	10	46	11	62
Honduras, 1997												
15 a 19 años	8	10	6	37	52	23	37	28	46	18	10	26
20 a 24 años	6	7	5	59	81	44	8	6	10	26	5	41

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, en CEPAL (2000), *en América Latina y el Caribe* (LC/L.1339), marzo.

Cuadro 6

ESTADOS UNIDOS POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO, 1994 Y 1996

(Miles de inmigrantes)

	1994				1996			
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Relación de masculinidad	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Relación de masculinidad
Mesoamérica								
15-19 años	122.2				90.3			
20-24 años	183.6				136.9			
Total de jóvenes	305.8				227.2			
Total de inmigrantes	2 190.5				1 808.5			
% jóvenes/total inmigrantes	14.0				12.6			
México								
15-19 años	18.6	9.8	8.8	112.6	23.8	12.6	11.2	112.0
20-24 años	15.2	7.6	7.6	99.1	21.1	11.1	10.0	111.0
Total de jóvenes	33.8	17.4	16.4	106.3	44.9	23.7	21.2	111.6
Total de inmigrantes	111.4	49.2	62.2	79.1	163.5	69.9	93.6	74.7
% jóvenes/total inmigrantes	30.4	35.4	26.4		27.5	33.9	22.7	
El Salvador								
15-19 años	4.0	2.0	2.0	101.7	3.1	1.6	1.5	103.5
20-24 años	1.9	0.9	1.0	94.0	2.0	1.0	1.0	100.6
Total de jóvenes	5.9	2.9	3.0	99.1	5.1	2.6	2.5	102.4
Total de inmigrantes	17.6	8.0	9.6	84.0	17.9	7.9	10.0	78.6
% jóvenes/total inmigrantes	33.6	36.6	31.1		28.8	33.1	25.4	
Guatemala								
15-19 años	1.3	0.7	0.6	107.0	1.3	0.7	0.6	117.6
20-24 años	0.8	0.4	0.4	95.2	1.0	0.5	0.5	94.6
Total de jóvenes	2.0	1.0	1.0	102.4	2.3	1.2	1.1	107.2
Total de inmigrantes	7.4	3.4	4.0	83.9	8.8	4.1	4.7	87.4
% jóvenes/total inmigrantes	27.7	30.7	25.2		26.1	29.0	23.6	

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de CEPAL (2000), *Migración internacional de jóvenes latinoamericanos y caribeños: protagonismo y vulnerabilidad* (LC/L.1407-P), de Jorge Martínez Pizarro, julio.

Cuadro 7

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN JUVENIL QUE EMIGRA A
LOS ESTADOS UNIDOS, CENSO DE 1990

(Población de 18 a 24 años, en miles)

Nivel educativo	Nivel medio o secundario incompleto	Algún grado universitario o superior	Graduado universitario o superior	Total niveles medio y superior	Total de emigrantes 18 a 24 años	Porcentaje de emigrantes con nivel medio o superior
Región o país de nacimiento						
Mesoamérica	201.3	127.4	14.4	343.1	1 032.1	33.2
México	160.2	94.2	10.0	264.4	843.5	31.3
El Salvador	17.5	11.9	1.2	30.6	90.3	33.9
Nicaragua	6.8	5.6	0.7	13.1	25.6	51.3
Panamá	2.9	3.9	0.8	7.6	9.5	79.3
Costa Rica	1.3	1.6	0.4	3.3	4.5	71.8
Guatemala	8.6	6.4	0.9	15.9	41.6	38.3
Honduras	4.0	3.8	0.4	8.2	17.1	48.1

Fuente: CEPAL (2000), *Migración internacional de jóvenes latinoamericanos y caribeños: protagonismo y vulnerabilidad* (LC/L.1470-P), de Jorge Martínez Pizarro, julio.

Cuadro 8

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN ZONAS URBANAS, 1990-1997

(Porcentajes)

País	Año	Hogares bajo la línea de pobreza en zonas urbanas	Hogares encabezados por mujeres, según estrato de pobreza		Distribución de hogares encabezados por mujeres bajo la línea de pobreza			Participación en el ingreso en zonas urbanas		Hogares urbanos con ingreso menos que el promedio
			Indigentes	Pobres no indigentes	Total	Indigentes	Pobres no indigentes	Del cuartil más pobre	Del 40% más pobre	
México	1989	34	14	14	30.1	8.2	21.9	8.5	16.0	75
	1998	31	18	16	26.3	6.3	20.0	9.0	17.2	75
El Salvador	1997	39	36	33	43.5	14.2	29.3	8.4	17.2	70
Nicaragua	1997	66	41	36	70.0	39.6	30.4	6.6	14.4	74
Panamá	1991	34	34	29	40.0	18.0	22.0	5.9	13.3	71
	1997	25	37	29	28.1	11.4	16.7	6.1	13.3	73
Costa Rica	1990	22	36	25	27.4	10.9	16.5	8.2	17.8	65
	1997	17	51	36	25.6	9.9	15.7	8.5	17.3	66
Honduras	1990	65	35	21	71.5	50.4	21.1	5.4	12.2	73
	1997	67	32	28	68.9	40.3	28.6	6.5	14.3	73

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países, en CEPAL (2000), *Panorama social de América Latina, 1999-2000*.

Cuadro 9

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD
SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN Y SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS

País	Año	Años de instrucción					
		0 a 5 años	6 a 9 años	0 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	10 y más años
México	1996						
	Ambos sexos	4.9	58.7	63.6	25.3	11.2	36.5
	Hombres	4.8	57.2	62.0	27.0	11.0	38.0
	Mujeres	5.0	60.2	65.2	23.6	11.3	34.9
El Salvador	1998						
	Ambos sexos	16.7	39.6	56.3	33.3	10.3	43.6
	Hombres	16.1	41.2	57.3	33.0	9.6	42.6
	Mujeres	17.2	38.2	55.4	33.6	10.9	44.5
Nicaragua	1997						
	Ambos sexos	17.0	52.3	69.3	22.0	8.7	30.7
	Hombres	18.6	52.2	70.8	20.0	9.2	29.2
	Mujeres	15.5	52.3	67.8	24.0	8.2	32.2
Panamá	1998						
	Ambos sexos	3.4	39.3	42.7	40.2	17.1	57.3
	Hombres	3.5	41.5	45.0	38.8	16.1	54.9
	Mujeres	3.3	37.1	40.4	41.6	18.0	59.6
Costa Rica	1998						
	Ambos sexos	7.8	48.3	56.1	31.3	12.5	43.8
	Hombres	8.8	49.6	58.4	30.0	11.6	41.6
	Mujeres	6.8	47.0	53.8	32.7	13.5	46.2
Honduras	1998						
	Ambos sexos	16.3	57.3	73.6	19.5	6.9	26.4
	Hombres	17.2	60.5	77.7	15.4	6.9	22.3
	Mujeres	15.5	54.6	70.1	23.0	6.9	29.9

Fuente: CEPAL (2000), *Panorama social de América Latina, 1999-2000*, elaborado sobre la base de tabulaciones

Cuadro 10

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: ESTIMACIONES SOBRE PERSONAS QUE VIVÍAN
CON EL VIH/SIDA, FINAL DE 1999

Países	Adultos (15-49)	Mujeres (15-49)	Niños (0-14)	Población, 1999		Tasa de prevalencia estimada del VIH (%) en adultos
				Total (miles)	Adultos (miles) (15-49)	
México	150 000	22 000	2 400	97 334	52 327	0.29
El Salvador	19 000	4 800	560	6 155	3 170	0.60
Nicaragua	4 800	1 200	<100	4 944	2 388	0.20
Panamá	23 000	9 400	670	2 811	1 499	1.54
Costa Rica	11 000	2 800	290	3 929	2 080	0.54
Guatemala	71 000	28 000	1 600	11 103	5 152	1.38
Honduras	58 000	29 000	4 400	6 319	3 043	1.92

Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA), junio de 2000
(<http://www.unaids.org>).

Cuadro 11

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: TASA DE PREVALENCIA ESTIMADA
DEL VIH (%) EN PERSONAS JÓVENES (15-24), FINES DE 1999

Países	Mujeres		Hombres		Adultos (15-49)
	de	a	de	a	
México	0.05	0.08	0.33	0.48	0.29
El Salvador	0.24	0.31	0.55	0.81	0.60
Nicaragua	0.05	0.08	0.17	0.26	0.20
Panamá	1.20	1.52	1.33	1.97	1.54
Costa Rica	0.22	0.33	0.51	0.78	0.54
Guatemala	0.81	1.03	0.93	1.38	1.38
Honduras	1.46	1.86	1.13	1.68	1.92

Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA
(ONUSIDA), junio de 2000 (<http://www.unaids.org>).

Cuadro 12

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: TASAS DE PARTICIPACIÓN
Y DE DESEMPLEO DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE
EDAD QUE NO ESTUDIAN Y PERTENECEN A HOGARES
POBRES, ZONAS URBANAS a/

(Porcentajes)

País	Año	Tasa de participación	Tasa de desempleo	Tasa global de desempleo abierto b/
México	1992	64.6	16.4	2.8
	1996	64.7	19.4	5.5
Panamá	1991	64.2	43.6	17.5 c/
	1997	66.4	43.7	15.4
Costa Rica	1990	55.0	24.3	5.4
	1997	46.7	34.9	5.9
Honduras	1990	61.0	14.8	7.8
	1997	68.4	13.1	6.4

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ No incluye empleados domésticos que habitan en el hogar.

b/ Principales áreas urbanas o región metropolitana.

c/ Datos de 1992.

Cuadro 13

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO URBANO Y JUVENIL, 1990-1999

(Tasas anuales medias)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
México										
Áreas urbanas	2.7	2.7	2.8	3.4	3.7	6.2	5.5	3.7	3.2	2.6
12-19 años	7.0	5.0	6.9	7.3	8.3	13.1	11.5	8.4	7.0	6.0
20-24 años	4.4	5.7	6.0	9.9	8.8	6.5	5.9	4.8
El Salvador										
Total urbano	9.9	7.9	8.2	8.1	6.8	7.0	7.5	7.5	7.6	6.9
15-24 años	19.3	14.6	14.3	14.4	14.0	13.3	13.1	14.6	15.0	16.4
Panamá										
Región metropolitana	18.6	19.3	17.5	15.6	15.7	16.6	16.9	15.4	15.5	13.8
15-24 años	35.1	38.8	37.0	31.6	31.0	31.9	34.8	31.5	31.7	29.5
Costa Rica										
Total urbano	5.4	6.0	4.3	4.0	4.3	5.7	6.6	5.9	5.3	6.2
12-24 años	10.4	14.1	9.3	10.2	9.8	13.5	13.9	13.1	12.8	...
Honduras										
Total urbano	7.8	7.4	6.0	7.0	4.0	5.6	6.5	5.8	5.2	5.3
10-24 años	10.7	12.3	6.6	9.7	6.7	10.2	9.7	8.7	10.0	...

Fuente: CEPAL (1995 y 1999), *Balace preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*; (2000), *Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe* (LC/L.1339), marzo, y (2000), *Panorama social de América Latina, 1999* (LC/G.2068), agosto.

Cuadro 14

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: TASA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INGRESO DEL HOGAR, ZONAS URBANAS a/

(Porcentajes)

País	Sexo	Total		Cuartil 1		Cuartil 2		Cuartil 3		Cuartil 4	
		1990	1997	1990	1997	1990	1997	1990	1997	1990	1997
México b/	Ambos	48.8	47.9	49.3	50.4	49.8	49.4	49.4	48.5	46.0	39.0
	Hombres	62.9	60.1	71.3	67.2	62.7	63.9	59.8	56.5	54.1	44.2
	Mujeres	35.0	35.6	28.3	33.5	37.6	35.7	38.8	39.7	37.2	33.3
Panamá c/	Ambos	45.5	49.4	44.8	46.0	47.6	51.7	47.6	51.5	39.6	47.8
	Hombres	57.5	61.7	60.9	64.4	60.1	64.9	57.7	61.3	45.9	52.5
	Mujeres	33.1	36.8	29.0	29.3	35.0	37.5	36.4	40.6	32.6	43.1
Costa Rica	Ambos	50.6	46.8	39.8	38.7	51.8	49.0	58.4	51.7	51.2	47.5
	Hombres	61.9	60.4	51.8	55.5	66.8	67.2	67.8	63.3	58.8	52.9
	Mujeres	38.7	32.9	28.1	26.0	35.8	29.0	49.1	38.5	41.3	41.0
Honduras	Ambos	48.4	53.7	40.5	56.5	51.4	49.9	50.0	57.0	50.5	51.7
	Hombres	65.7	69.7	61.0	76.6	72.3	68.6	70.5	72.7	55.7	59.9
	Mujeres	34.5	39.9	25.7	38.0	32.2	34.0	32.6	43.4	46.8	44.9

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ No incluye empleados domésticos que habitan en el hogar.

b/ Período 1992-1996.

c/ Período 1991-1997.

Cuadro 15

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO DE LOS JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INGRESO DEL HOGAR, ZONAS URBANAS a/

(Porcentajes)

País	Sexo	Total		Cuartil 1		Cuartil 2		Cuartil 3		Cuartil 4	
		1990	1997	1990	1997	1990	1997	1990	1997	1990	1997
México b/	Ambos	9.9	12.5	16.6	18.9	9.1	12.3	3.6	7.3	8.7	5.7
	Hombres	10.1	13.8	16.9	21.1	8.9	12.2	3.3	8.2	8.1	6.4
	Mujeres	9.6	10.3	15.8	14.4	9.3	12.4	4.2	5.7	9.7	4.8
Panamá c/	Ambos	37.4	31.5	47.5	45.0	40.1	31.8	29.0	26.8	24.2	17.4
	Hombres	32.0	26.8	39.7	36.9	32.9	25.6	27.6	22.6	19.5	17.9
	Mujeres	47.1	39.7	63.5	61.3	52.6	43.4	31.3	33.7	31.5	16.8
Costa Rica	Ambos	10.6	13.1	23.5	26.7	9.7	11.3	6.4	10.3	6.4	6.2
	Hombres	9.8	11.4	25.0	24.5	6.2	10.3	5.5	8.3	6.9	4.7
	Mujeres	11.8	16.4	20.7	30.2	16.4	13.7	7.6	14.1	5.5	8.6
Honduras	Ambos	11.2	9.4	20.6	19.6	15.3	11.0	7.2	5.8	3.7	1.5
	Hombres	11.5	9.2	20.4	18.7	15.6	9.9	5.6	5.3	4.4	1.8
	Mujeres	10.7	9.7	21.0	21.2	14.9	12.9	10.1	6.7	3.1	1.1

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ No incluye empleados domésticos que habitan en el hogar.

b/ Período 1992-1996.

c/ Período 1991-1997.

Cuadro 16

BUSCAN SU PRIMER EMPLEO, ZONAS URBANAS, 1997

(Porcentajes)

País	Total	Proporción de desempleo juvenil corres- pondiente a jóvenes que buscan trabajo por primera vez	Género		Cuartil de ingreso por habitante del hogar				Años de escolaridad			Educación	
			Hombres	Mujeres	1	2	3	4	0 a 6	7 a 12	13 y más	Estudia	No estudia
			Panamá	100.0	43.0	50.4	49.6	35.3	34.8	21.0	8.9	15.9	71.1
Costa Rica	100.0	26.6	37.7	62.3	44.1	8.5	27.3	20.1	16.0	67.7	16.3	41.9	58.1
Honduras	100.0	25.1	51.4	48.6	42.4	25.4	29.2	2.9	56.9	38.0	5.1	20.8	79.2

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro 17

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: JÓVENES ENTRE 20 Y 24 AÑOS DE
 EDAD QUE TIENEN MENOS DE 10 AÑOS DE INSTRUCCIÓN Y
 NO ESTUDIAN, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS

País	Año	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México	1996			
No estudia, instrucción <10 años		55.2	51.0	59.3
El Salvador	1998			
No estudia, instrucción <10 años		43.3	42.4	44.1
Nicaragua	1997			
No estudia, instrucción <10 años		49.9	51.0	49.0
Panamá	1998			
No estudia, instrucción <10 años		28.9	31.5	26.3
Costa Rica	1998			
No estudia, instrucción <10 años		40.9	41.5	40.3
Honduras	1998			
No estudia, instrucción <10 años		58.9	63.8	55.3

Fuente: CEPAL (2000), *Panorama social de América Latina, 1999-2000*,
 elaborado sobre la base de tabulaciones especiales de las
 encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro 18

(Porcentajes)

País	Año	Desempleados con 8		Desempleados jóvenes con 8 o más		Desempleados con 12 o más años de estudio		Promedio de años de estudio de la fuerza de trabajo juvenil
		Ocupados con 8 o más años de estudio como proporción del total de ocupados	o más años de estudio como proporción del total de desempleados	o más años de estudio como proporción del total de desempleados jóvenes	Ocupados con 12 o más años de estudio como proporción del total de ocupados	Desempleados con 12 o más años de estudio como proporción del total de desempleados	Desempleados jóvenes con 12 o más años de estudio como proporción del total de desempleados jóvenes	
México	1989	0.484	0.631	0.646	0.232	0.176	0.130	8.53
	1994	0.549	0.582	0.654	0.263	0.235	0.175	8.73
	1996	0.607	0.685	0.752	0.170	0.151	0.099	8.73
El Salvador	1990	0.406	0.511	0.615	0.243	0.287	0.335	7.65
	1995	0.487	0.545	0.658	0.292	0.306	0.358	8.06
	1997	0.525	0.601	0.682	0.327	0.368	0.398	8.50
Nicaragua	1997	0.467	0.535	0.556	0.139	0.121	0.058	7.49
Panamá	1989	0.630	0.657	0.793	0.403	0.388	0.444	9.57
	1994	0.691	0.764	0.768	0.457	0.456	0.448	9.75
	1997	0.706	0.766	0.785	0.493	0.464	0.455	9.99
Costa Rica	1990	0.556	0.524	0.568	0.230	0.158	0.112	8.55
	1994	0.588	0.469	0.432	0.252	0.179	0.170	8.72
	1997	0.601	0.591	0.612	0.272	0.153	0.108	8.94
Honduras	1990	0.314	0.397	0.372	0.198	0.258	0.219	6.58
	1994	0.368	0.377	0.365	0.238	0.211	0.177	6.89
	1997	0.375	0.379	0.313	0.241	0.238	0.177	7.15

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro 19

AÑOS DE EDAD SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD, ZONAS URBANAS a/

(Porcentajes)

País	Año	Total	Agricultura y minas	Industria manufacturera	Construcción	Transporte y comunicaciones	Comercio y servicios
México	1992	100.0	9.1	25.4	6.6	3.2	55.6
	1996	100.0	2.2	29.6	5.3	3.7	59.2
Panamá	1991	100.0	5.0	12.7	2.9	5.3	74.0
	1997	100.0	2.5	12.4	7.8	6.8	70.4
Costa Rica	1990	100.0	3.9	26.5	6.0	4.1	59.6
	1997	100.0	3.2	23.8	6.1	5.1	61.9
Honduras	1990	100.0	10.6	23.4	10.9	3.2	51.8
	1997	100.0	8.7	33.6	6.6	3.1	47.9

Fuente: CEPAL (1999), *Panorama social de América Latina 1998*, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ No incluye empleados domésticos que habitan en el hogar.

Cuadro 20

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: JÓVENES ENTRE 15 Y 24 AÑOS
DE EDAD QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN, SEGÚN SEXO,
ZONAS URBANAS

País	Año	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
México	1994	23.4	10.3	35.7
	1996	24.0	13.2	34.9
El Salvador	1995	20.9	12.0	28.8
	1998	22.0	13.9	29.4
Nicaragua	1997	24.5	17.3	31.2
Panamá	1991	27.3	20.5	34.0
	1998	21.3	15.4	26.9
Costa Rica	1990	20.1	10.3	30.5
	1998	17.1	10.1	24.2
Honduras	1990	27.0	13.8	37.6
	1998	22.6	11.4	32.3

Fuente: CEPAL (2000), *Panorama social de América Latina, 1999-2000*, elaborado sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.